

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Vigésima Cuarta Reunión del Comité de Expertos
Del 8 al 12 de septiembre de 2014
Washington, DC

OEA/Ser.L.
SG/MESICIC/doc.418/14 rev. 4
12 septiembre 2014
Original: inglés

JAMAICA

INFORME FINAL

(Aprobado en la sesión plenaria del 12 de septiembre de 2014)

SUMARIO

El presente informe contiene el análisis integral de la implementación en Jamaica del artículo III, Párrafo 9, de la Convención Interamericana contra la Corrupción, correspondiente a “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”, que fue seleccionada por el Comité de Expertos del MESICIC para la Cuarta Ronda; las buenas prácticas informadas por dichos órganos; y el seguimiento de la implementación de las recomendaciones que se le formularon a Jamaica en la Primera Ronda.

El análisis se efectuó dentro del marco de la Convención, el Documento de Buenos Aires, el Reglamento del Comité, y las metodologías adoptadas por el mismo para la realización de las visitas *in situ* y para la Cuarta Ronda, incluidos los criterios allí establecidos para orientar el análisis sobre tratamiento igualitario para todos los Estados parte, equivalencia funcional, y el propósito tanto de la Convención como del MESICIC de promover, facilitar y fortalecer la cooperación entre los Estados Parte en la prevención, detección, sanción y erradicación de la corrupción.

Para llevar a cabo el análisis se contó con la respuesta de Jamaica al cuestionario; y con una nueva e importante fuente de información, como lo fue la visita *in situ* realizada entre el 1 y el 3 de abril de 2014 por los miembros del subgrupo de análisis de Jamaica, integrado por Grenada y la República de El Salvador, con el apoyo de la Secretaría Técnica, con ocasión de la cual se pudo precisar, aclarar y complementar la información suministrada por Jamaica y escuchar opiniones de organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, asociaciones profesionales, académicos e investigadores sobre temas útiles para el análisis, lo cual contribuyó a que el Comité contara con información objetiva y completa sobre dichos temas, facilitó la obtención de información sobre buenas prácticas.

El análisis de los órganos de control superior se orientó, de acuerdo con lo previsto en la metodología para la Cuarta Ronda, a determinar si los mismos cuentan con un marco jurídico, si éste es adecuado, para los propósitos de la Convención, y si existen resultados objetivos; y teniendo en cuenta lo observado se formularon las recomendaciones pertinentes al Estado analizado.

Los órganos de control superior de Jamaica analizados en este informe son: la Oficina del Contratista General; la Comisión de Integridad; la Comisión para la Prevención de la Corrupción; y el Departamento del Auditor General.

Algunas de las recomendaciones formuladas a Jamaica para su consideración en relación con los anteriores órganos apuntan a propósitos tales como, los que se destacan a continuación:

Con respecto a los órganos de control, proveer con los recursos para el cabal desarrollo de sus funciones. Además, para fortalecer el trabajo de la Oficina del Contratista General; la Comisión de Integridad y la Comisión para la Prevención de la Corrupción, adoptar las medidas pertinentes para enfrentar el problema de la falta de procesamientos por parte de la Fiscalía General por delitos de corrupción.

En cuanto a la Oficina del Contratista General, considerar realizar las reformas institucionales y legales necesarias para separar la Comisión Nacional de Contratos de la Oficina del Contratista General; otorgar la potestad y autoridad de suspender o regularizar un contrato o licencia cuando se

presenten indicios de corrupción, irregularidades o actos impropios; y actualizar las sanciones vigentes por incumplimiento de la Ley del Contratista General.

Con respecto a la Comisión de Integridad, considerar establecer un sitio “web” para este órgano de control superior; establecer e implementar un programa de sensibilización para informar a las personas sobre la manera de presentar denuncias referentes a presuntos actos de corrupción cometidos por parlamentarios; y considerar la posibilidad de otorgar a la Comisión de Integridad de imponer sanciones administrativas a un parlamentario por presentación tardía u omisión de presentar declaraciones (patrimoniales).

En lo atinente a la Comisión para la Prevención de Corrupción, considerar adoptar un cronograma para la implementación, por parte de este órgano de control superior, de las funciones que se le atribuyen como autoridad designada en el marco de la Ley de Divulgaciones Protegidas de 2011; implementar un sistema electrónico de presentación de declaraciones (patrimoniales) por los funcionarios públicos; e implementar un registro sobre declaraciones de intereses para facilitar la identificación de potenciales conflictos de intereses entre las intereses privadas de un funcionario público y sus obligaciones públicas.

En lo relativo Departamento del Auditor General, considerar concluir el proceso de aprobación por parte del Ministerio de Finanzas y Planificación y el Gabinete relativa a la nueva estructura orgánica propuesta para este órgano de control superior; considerar la posibilidad de reformar la Ley de Administración Financiera y Auditoría, eliminando el plazo trienal de prescripción para el cobro de resarcimientos a favor del Estado; y autorizar al Auditor General a poner en conocimiento de la Oficina del Contratista General todo incumplimiento de contratos de adquisiciones que se detecte al realizar una auditoría.

Las buenas prácticas sobre las que Jamaica suministró información se refiere a la realización de una auditoría, asegurando así que la información sea exhaustiva, precisa y pertinente, tal como se prevé en el Manual de Procedimientos de Auditoría.

Con respecto al seguimiento de las recomendaciones formuladas a Jamaica en la Primera Ronda, sobre las que el Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas, con base en la metodología de la Cuarta Ronda y teniendo en cuenta la información suministrada por Jamaica en su respuesta al cuestionario y en la visita in situ, se definieron cuáles de dichas recomendaciones habían sido implementadas satisfactoriamente; cuáles requerían atención adicional; y cuáles precisaban ser reformuladas, y se hizo un recuento de las que quedan vigentes, el cual se incluye como anexo I del informe.

Entre los avances relativos a la implementación de tales recomendaciones se destaca: el establecimiento de las Directrices Judiciales de 2012 y la promulgación del Reglamento de Administración Financiera, 2011.

Algunas de las recomendaciones formuladas a Jamaica en la Primera Ronda que quedan vigentes o que fueron reformuladas, apuntan a propósitos tales como: estimular la implementación de un código de ética para Senadores y Diputados, incluyendo mecanismos punitivos por violaciones; desarrollar, cuando corresponda, disposiciones que limiten la participación de los ex funcionarios públicos, en situaciones que conlleven el aprovechamiento indebido de esa condición, en un plazo de tiempo determinado; establecer el deber de denunciar para los funcionarios y empleados públicos que actualmente no están obligados a denunciar a las autoridades competentes los actos de corrupción en

la función pública de los que tengan conocimiento; y hacer públicos en el sitio web de la Unidad de Acceso a la Información todos los Informes Anuales y Trimestrales.

COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN

INFORME RELATIVO A LA IMPLEMENTACIÓN EN JAMAICA DE LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA RONDA, Y SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LA PRIMERA RONDA¹

INTRODUCCIÓN

1. Contenido del Informe

[1] En el presente informe se hará referencia, en primer lugar, a la implementación en Jamaica de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción seleccionada por el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la misma (MESICIC) para la Cuarta Ronda. La disposición seleccionada es la prevista en el párrafo 9 del artículo III de la Convención, relativa a los “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”.

[2] En segundo lugar, se hará referencia a las buenas prácticas que el Estado analizado deseó voluntariamente dar a conocer en relación con los órganos de control superior objeto de análisis del presente informe.

[3] En tercer lugar, conforme a lo acordado por el Comité en su Decimoctava Reunión, en cumplimiento de la recomendación 9, inciso a), de la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC, este informe versará sobre el seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas a Jamaica por el Comité en el Informe de la Primera Ronda y que estimó que requieren atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas, disponibles en: www.oas.org/juridico/spanish/jam.htm

2. Ratificación de la Convención y vinculación con el Mecanismo

[4] De acuerdo con el registro oficial de la Secretaría General de la OEA, Jamaica ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción el día 16 de marzo de 2001 y depositó el instrumento respectivo de ratificación el día 30 de marzo de ese mismo año.

[5] Asimismo, Jamaica suscribió la Declaración sobre el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción el 4 de junio de 2002.

I. SUMARIO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA

1. Respuesta de Jamaica

¹ El presente informe fue aprobado por el Comité, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 g) y 25 del Reglamento y Normas de Procedimiento, en la sesión plenaria celebrada el día 12 de septiembre de 2014, en el marco de su Vigésima Cuarta Reunión, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA, del 8 al 12 de septiembre de 2014.

[6] El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida de Jamaica en todo el proceso de análisis y, en especial, de la Procuraduría General, la cual se hizo evidente, entre otros aspectos, en su respuesta al cuestionario y en la disponibilidad que siempre mostró para aclarar o completar el contenido de la misma, al igual que en el apoyo para la realización de la visita *in situ* a la que se hace referencia en el párrafo siguiente del presente informe. Jamaica envió, junto con su respuesta, las disposiciones y documentos que estimó pertinentes, disponibles en: www.oas.org/juridico/english/mesicic4_jam.htm

[7] Asimismo, el Comité deja constancia de que el Estado analizado otorgó su anuencia para la práctica de la visita *in situ* de conformidad con lo previsto en la disposición 5 de la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ*² la cual se realizó del 1 al 3 de abril de 2014, por parte de los representantes de El Salvador y Grenada, en su calidad de integrantes del Subgrupo de Análisis, contando para ello con el apoyo de la Secretaría Técnica del MESICIC. La información obtenida en dicha visita se incluye en los apartados correspondientes del presente informe y su agenda se anexa al mismo, de conformidad con lo previsto en la disposición 34 de la citada *Metodología*.

[8] El Comité tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por Jamaica hasta el 3 de abril de 2014, y la que fue aportada y le fue solicitada por la Secretaría Técnica y por los integrantes del Subgrupo de Análisis para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con el *Reglamento y Normas de Procedimiento*; la *Metodología para el Análisis de la Implementación de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción Seleccionada en la Cuarta Ronda*; y la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ*.

2. Documentos e información recibidos de organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, del sector privado

[9] El Comité no recibió, dentro del plazo fijado en el Calendario para la Cuarta Ronda, documentos de organizaciones de la sociedad civil de conformidad con lo previsto en el artículo 34, inciso b), del Reglamento del Comité.

[10] No obstante, con ocasión de la práctica de la visita *in situ* realizada al Estado analizado, se recabó información de organizaciones de la sociedad civil y del sector privado que fueron invitadas a participar en reuniones con tal fin, de conformidad con lo previsto en la disposición 27 de la *Metodología para la Realización de las Visitas in Situ*, cuyo listado se incluye en la agenda de dicha visita *in situ* que se anexa al presente informe. Esta información se refleja en los apartados correspondientes del mismo, en lo que resulta pertinente para sus propósitos.

II. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN POR EL ESTADO PARTE DE LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA LA CUARTA RONDA

ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA CONVENCIÓN)

[11] Jamaica cuenta con un conjunto de órganos de control superior con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas, entre los

² Documento SG/MESICIC/doc.276/11 rev. 2, disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf

que cabe destacar la Oficina del Contratista General, de la Comisión de Integridad, la Comisión para la Prevención de la Corrupción, y el Departamento del Auditor General.

[12] A continuación se hace una breve descripción de los propósitos y funciones de los cuatro órganos seleccionados por Jamaica que serán analizados en el presente informe:

[13] La Oficina del Contratista General, cuyo cometido consiste, entre otras cosas, en realizar el seguimiento de los contratos gubernamentales y del otorgamiento, la emisión, la suspensión o la rescisión de los contratos gubernamentales preceptuados, así como realizar investigaciones.

[14] La Comisión de Integridad, cuyo cometido consiste, entre otras cosas, en recibir, mantener registrados y examinar declaraciones legalmente preceptivas formuladas por parlamentarios, así como realizar indagatorias e investigaciones independientes relativas a esas declaraciones

[15] La Comisión para la Prevención de la Corrupción, cuyo cometido consiste, entre otras cosas, en recibir, mantener registrados y examinar declaraciones legalmente preceptivas formuladas por funcionarios públicos, así como realizar indagatorias e investigaciones independientes relativas a esas declaraciones.

[16] El Departamento del Auditor General, cuyo cometido consiste en proporcionar razonables seguridades de que la gestión de las cuentas del Gobierno cumple los estándares y prácticas del Gobierno de Jamaica y los internacionalmente aceptados. Para ello la Oficina, a través de sus auditorías e informes, se propone facilitar la transparencia y la rendición de cuentas, aumentando así la confianza pública y la percepción de la transparencia en el Gobierno.

1. OFICINA DEL CONTRATISTA GENERAL

1.1. Existencia de un marco jurídico y/o de otras medidas

[17] La Oficina del Contratista General (OCG) cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[18] Con respecto a sus objetivos y funciones, la OCG es responsable del seguimiento de la adjudicación y ejecución de los contratos gubernamentales³ para asegurar que esos contratos se adjudiquen imparcialmente o, si corresponde, se rescindan, por razones fundadas; que las circunstancias en que cada contrato se adjudique o, si corresponde, se rescinda, no impliquen situaciones impropias o irregularidades; y que la ejecución de cada uno de esos contratos sea congruente con sus disposiciones. También es responsable del seguimiento del otorgamiento, la emisión, la suspensión o la revocación de toda licencia prescripta,⁴ con el fin de asegurar que las circunstancias de ese otorgamiento, emisión, suspensión o revocación no impliquen actos impropios o irregularidades y, cuando corresponda, examinar si esa licencia se usa conforme a los términos y condiciones que contiene.⁵

³ El Artículo 2 de la Ley del Contratista General dispone que por ‘contratos del Gobierno’ se entiende toda licencia, permiso u otra concesión o potestad conferidas por una entidad pública o acuerdo celebrado por ésta para la realización de obras de edificación o de otro género o para el suministro de cualesquiera bienes o servicios <http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/The%20Contractor-General%20Act.pdf>

⁴ Por definición, en la Ley se entiende por ‘licencia prescripta’ toda licencia, certificado, cuota, permiso o autorización emitidos u otorgados conforme a cualquier disposición de un organismo o autoridad pública.

⁵ Artículo 4(1) de la Ley del Contratista General, *supra* nota 3.

[19] En el cumplimiento de sus funciones el Contratista General deberá ser notificado de la adjudicación y, cuando corresponda, de la variación de cualquier contrato público por el órgano público⁶ responsable de ese contrato. A ese respecto dispone de amplias potestades indagatorias y de seguimiento, como la de obtener acceso a todos los libros, registros, documentos, depósitos u otros bienes de propiedad del Gobierno; obtener acceso a todas las instalaciones o lugares en que la labor referente a un contrato gubernamental ha sido o será realizada; ingresar en cualesquiera instalaciones ocupadas por cualquier persona para efectuar esas averiguaciones o inspeccionar ese documento, registro o bien, así como obtener acceso a todos los libros, registros, documentos y otros bienes usados en relación con el otorgamiento, la emisión o la revocación de cualquier licencia prescripta, así como, entre otras cosas, acceso a cualesquiera instalaciones o lugares en que estén esos libros, registros u otros bienes referentes a licencias prescritas.

[20] Con respecto a la autonomía para cumplir sus funciones, la sección 5(1) de la Ley del Contratista General dispone que en el ejercicio de sus potestades el Contratista General no estará sujeto a la dirección o el control de ninguna otra persona o autoridad.

[21] Con respecto al alcance de sus funciones, la OCG, a través de su Departamento de Servicios Técnicos, actúa también como Secretaría de la Comisión Nacional de Contratos (CNC) para asegurar la plena satisfacción de todas las necesidades técnicas, administrativas y de recursos humanos de la CNC para que esta pueda cumplir eficaz y eficientemente sus objetivos y mandatos, que consisten principalmente en promover la eficiencia en el proceso de adjudicación y ejecución de contratos gubernamentales y garantizar la transparencia y equidad en la adjudicación de tales contratos.⁷ Las únicas excepciones a sus funciones aparecen en la sección 19(1) de la Ley del Contratista General, que establece que bajo la dirección del Gabinete, el Secretario del Gabinete certifica que el suministro de información o la respuesta a cualquier pregunta o la presentación de cualquier documento o cosa afectaría a la seguridad nacional o a la defensa de Jamaica.

[22] Con respecto a la manera en que se adoptan las decisiones, éstas son orientadas únicamente por el Contratista General, quien, conforme a la sección 5 de la Ley, ejerce esas atribuciones con independencia. Además, con respecto a investigaciones, la sección 17 de la Ley dispone que el Contratista General puede adoptar cualquier procedimiento que considere apropiado a las circunstancias del caso concreto. Finalmente, la sección 25 dispone asimismo que en ciertas circunstancias, las funciones del Contratista General pueden ser desempeñadas por cualquier funcionario de la OCG autorizado a esos efectos. Las decisiones del Contratista General son susceptibles de revisión judicial.

[23] Con respecto al procedimiento de designación del Contratista General, la Sección 3(2) de la Ley del Contratista General dispone que esa persona sea designada por el Gobernador General, tras celebrar consultas con el Primer Ministro y con el Jefe de la Oposición. La Sección 6 dispone además que la persona designada como Contratista General cumplirá un mandato de 7 años, renovable por 5 años más. Los altos funcionarios de la OCG son designados por el Contratista General conforme a la sección 13 de la Ley. Dicha sección dispone que el Contratista General puede designar y contratar, con la

⁶ Por definición, en la Ley se entiende por ‘organismo público’ a) un ministerio, departamento o agencia del Gobierno; b) un órgano o autoridad legal, o c) cualquier compañía registrada en virtud de la Ley de Sociedades, que sea una sociedad en que el Gobierno o una dependencia del Gobierno, en virtud de la tenencia de acciones o cualquier otro insumo financiero, esté en condiciones de influir en la política de la sociedad.

⁷ Véase la Respuesta de Jamaica al Cuestionario de la Cuarta Ronda de Análisis, pág. 3, http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_jam_resp.pdf, y sección 23C de la Ley del Contratista General, *supra* nota 3.

remuneración y las condiciones de empleo que apruebe una Comisión,⁸ a los altos funcionarios y agentes que se consideren necesarios para ayudar al Contratista General en el debido cumplimiento de la Ley. El Estado analizado señala en su respuesta al cuestionario que los altos funcionarios son designados por contratos de tres años con opción de renovación.⁹ El Gobernador General puede también aprobar la designación como funcionario de la OCG de cualquier alto funcionario gubernamental.¹⁰

[24] Con respecto a la identificación de necesidades de recursos humanos y selección de personal, los funcionarios de la OCG también son designados y destituidos conforme a la sección 13 de la Ley. Todas las designaciones son por contrato a plazo fijo y la remoción/destitución de los empleados se rige por las condiciones de los respectivos contratos de empleo.¹¹ En cuanto a su contratación, en la visita *in situ* los representantes de la OCG señalaron que si bien se trata de un organismo público autónomo, se rige por las normas de la Comisión de Servicio Público a ese respecto.

[25] El Estado analizado señala también en su respuesta al Cuestionario que todos los nombramientos de funcionarios se basan en el mérito y requieren diversas calificaciones educativas y profesionales que dependen de las funciones del puesto/cargo. La selección se realiza a través de un proceso de entrevistas por etapas, que es precedido por un anuncio público y/o interno, así como por un proceso de controles de seguridad.¹² Durante la visita *in situ* los representantes del OCG manifestaron además que como garantía del mérito se realizan series de entrevistas y una prueba psicométrica, así como controles de antecedentes de seguridad. Se examinan las calificaciones profesionales y competencias de los candidatos. Este proceso de reclutamiento se describió en el Vigésimo Quinto Informe Anual de la OCG, correspondiente a 2011, en los términos siguientes:¹³

[26] “[P]ara asegurar que la OCG posea el conjunto de aptitudes profesionales y técnicas necesarias para cumplir más eficazmente sus cometidos conforme a la ley, en 2006 elaboramos e implementamos una política general de reclutamiento de personal para facilitar el reclutamiento, por la OCG, en forma objetiva y transparente, de las personas más aptas disponibles en el mercado de trabajo jamaicano... La política, requiere, entre otras cosas, la invitación pública a presentar postulaciones de empleo para cargos vacantes en la OCG que no puedan llenarse en la esfera interna. Además, cada uno de los potenciales empleados de la OCG debe ser sometido, en promedio, a dos (2) o tres (3) entrevistas de la OCG documentadas, que son administradas por diferentes equipos multidisciplinarios de la OCG, antes de que pueda ser entrevistado por el propio Contratista General”

[27] El Contratista General puede ser removido del cargo por incapacidad para cumplir las funciones de la oficina, causada por enfermedad física o mental o cualquier otra causa; mala conducta o realización de transacciones con el Gobierno de Jamaica sin previa aprobación, por resolución de cada Cámara del Parlamento. Si cada Cámara decide por resolución que la cuestión de destituir a un Contratista General debería ser investigada, el Gobernador General deberá designar a un tribunal que investigará el asunto y dará cuenta de los hechos al Gobernador General, con una recomendación acerca de si corresponde

⁸ La Sección 13(2) de la Ley dispone que esa Comisión esté formada por su vocero, como presidente, el Presidente del Senado, la persona designada por el Primer Ministro como Jefe de Asuntos del Gobierno en la Cámara de Representantes, la persona designada por el Jefe de la Oposición como Jefe de asuntos de la Oposición en dicha cámara, y el Ministro a cargo del servicio público.

⁹ Respuesta al Cuestionario, pág. 4, *supra* nota 7.

¹⁰ Sección 13(4) de la Ley del Contratista General, *supra* nota 3.

¹¹ Respuesta al Cuestionario, pág. 4, *supra* nota 7.

¹² *Idem*.

¹³ Vigésimo Quinto Informe Anual de la OCG (2011), pág. 5, http://www.OCG.gov.jm/OCG/sites/default/files/annual_report/annual_report_2011.pdf

destituir al Contratista General.¹⁴ La Sección 8 de la Ley dispone también que no puede ser designado como Contratista General ningún integrante del Senado o de la Cámara de Representantes, ninguna persona que esté en situación de quiebra pendiente, que haya sido imputada de cualquier ilícito que revele deshonestidad o torpeza moral, o sea parte de algún contrato con el Gobierno de Jamaica, inclusive como socio de una empresa o director o gerente de una compañía que en tanto sea de su conocimiento, sea parte en algún contrato con el Gobierno de Jamaica. Finalmente, la sección 9 de la Ley dispone que el Contratista General deberá dedicar todo su tiempo a los deberes del cargo y no podrá aceptar empleo remunerado de ningún otro carácter.

[28] Con respecto a los funcionarios de la OCG, el Estado analizado, en su Respuesta al Cuestionario, señala que les son aplicables mecanismos disciplinarios contenidos en la Ley, tales como el de estar sujetos al Juramento de Confidencialidad y a sanciones penales por violación del mismo.¹⁵ Además, la OCG cuenta con un Código Disciplinario que es congruente con las Órdenes para el Personal del Servicio Público y es aprobado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.¹⁶

[29] Con respecto a la existencia de manuales o documentos en que se describen la funciones de su personal, en la respuesta al Cuestionario el Estado analizado señala que la OCG ha elaborado y utiliza Manuales de Operaciones documentados y Descripciones y Funciones de Cargos, que han sido aprobados por la Oficina del Gabinete, para orientar las funciones de su personal.¹⁷

[30] Se proporcionan oportunidades de empleo, externa e internamente, a los funcionarios. A cada división operativa de la OCG se le asigna un presupuesto para capacitación y se trata de obtener asistencia adicional de organismos locales e internacionales.¹⁸ Durante la visita *in situ* los representantes de la OCG manifestaron que existen recursos con objeto especial para capacitación. Además, el Departamento de Recursos Humanos busca diariamente eventuales oportunidades de empleo. A ese respecto en el Vigésimo Sexto Informe Anual de la OCG (2012) se señala que en ese año, 21 funcionarios se vieron beneficiados por uno o más de los trece programas de capacitación externa identificados por el Departamento de Administración de Recursos Humanos.¹⁹ Además, un miembro superior del equipo de investigación participó en el Tercer Programa de Capacitación de País de la Commonwealth, “Mejor Gobernanza – Manejo de la Corrupción”, sobre Administración Pública, orientado a Jefes de Investigaciones, y dos funcionarios completaron el Programa para Ejecutivos de la Commonwealth. Además, en los informes anuales de la OCG aparece una lista de la capacitación proporcionada por su personal en determinado año. Por ejemplo, en el Apéndice IX del Informe Anual de 2012 de la OCG aparecen detalles adicionales sobre los programas de capacitación en que participaron funcionarios de la OCG en 2012.²⁰

[31] Con respecto a la manera en que se proporciona información al público sobre objetivos y funciones, el Estado analizado, en su respuesta al Cuestionario, señala que la OCG utiliza su sitio web, publica informes anuales, informes de investigaciones, comunicados de prensa y medios sociales y electrónicos para difundir información al público en general. También destaca que el sitio web de la

¹⁴ Ley del Contratista General, sección 7, *supra* nota 3.

¹⁵ Respuesta al Cuestionario, pág. 4, *supra* nota 7.

¹⁶ *Idem.*

¹⁷ *Idem.*

¹⁸ *Idem.*, pág. 5.

¹⁹ Vigésimo Sexto Informe Anual de la OCG (2012), pág. 199,

http://www.ocg.gov.jm/ocg/sites/default/files/annual_report/Office%20of%20the%20Contractor%20General%20Annual%20Report%202012.pdf

²⁰ Apéndices del Vigésimo Sexto Informe Anual de la OCG, pág. 597, http://www.OCG.gov.jm/OCG/sites/default/files/annual_report/OCG%20Annual%20Report%202012%20Appendices.pdf

OCG es actualizado a intervalos regulares con información pertinente y/o actividades que conciernen a todos los interesados, incluida información de contacto, guías de funciones y servicios, etc.²¹

[32] Con respecto a mecanismos de control interno referentes a reclamaciones, quejas o denuncias relacionadas con sus objetivos y el desempeño de su personal, el Estado analizado, en su respuesta al Cuestionario, señala que los controles internos incluyen una línea telefónica de denuncia de irregularidades y un formulario disponible en su sitio “web” que permite a los interesados presentar en forma discreta y/o anónima reclamaciones, quejas o denuncias relacionadas con los objetivos de la OCG y el desempeño de su personal.²² A ese respecto, el sitio web de la OCG tiene una página para recibir denuncias de irregularidades en <http://www.OCG.gov.jm/OCG/webform/report-impropriety>. Durante la visita *in situ*, los representantes de la OCG expresaron que además de la posibilidad de formular una denuncia en línea o usar la línea telefónica para denunciar irregularidades, pueden efectuarse denuncias por correo electrónico o anónimamente, o la OCG puede recibir información de inteligencia de otras fuentes.

[33] El Estado analizado señala además que cuenta con un Comité Disciplinario Interno, un Oficial de Ética y un Código Disciplinario para manejar casos de conducta de los empleados y temas relacionados con su desempeño laboral.²³ Además, cuenta con un Proceso de Manejo de Investigaciones que proporciona análisis en profundidad de denuncias recibidas por la Oficina y garantiza que todas las denuncias recibidas por la OCG sean tramitadas.

[34] Con respecto a la manera en que se asegura la satisfacción de las necesidades presupuestarias, el Estado analizado señala en su respuesta al Cuestionario que la OCG recibe recursos presupuestarios del Ministerio de Hacienda y Planificación a través de fondos disponibles en el Fondo Consolidado, en forma similar a todos los demás organismos públicos que carecen de financiamiento propio.²⁴ Además, la sección 26 de la Ley del Contratista General dispone que los fondos de la OCG deberán consistir en las sumas que le asigne de tiempo en tiempo el Parlamento para los fines de la OCG, y de todas las demás sumas que de cualquier modo puedan resultar pagaderas al Contratista General o adjudicadas a éste con respecto a cualquier cuestión que tenga que ver con sus funciones.

[35] Con respecto a la apropiación de fondos recibida por la OCG para su presupuesto, se proporcionó la siguiente información:²⁵

Año	Estimaciones del total aprobado (en dólares jamaicanos)	-Gasto real (en dólares jamaicanos)
Abril de 2011 – Marzo de 2012	199.002.000	198.938.962,99

²¹ Respuesta al Cuestionario, pág. 5, *supra* nota 7.

²² *Ídem.*

²³ *Ídem.*

²⁴ *Ídem.*

²⁵ Vigésimo Sexto Informe Anual de la OCG (2012) pág. 205, *supra* nota 19. A junio de 2014, 1 dólar estadounidense equivalía a 110 dólares jamaicanos.

Abril de 2010 – Marzo de 2011	180.519.000	176.106.347,60
Abril de 2009 – Marzo de 2010	170.727.000	168.540.488,73
Abril de 2008 – Marzo de 2009	189.042.000	177.060.955,42
Abril de 2007 – Marzo de 2008	154.398.000	146.663.647,29

[36] Con respecto a mecanismos de coordinación para la armonización de sus funciones con las de otros organismos de supervisión, la sección 21 de la Ley del Contratista General dispone que si en el curso de una investigación o finalizada la misma existen pruebas de incumplimiento de obligaciones o conducta indebida, o delitos penales cometidos por una autoridad o funcionario de un organismo público, el asunto deberá ser derivado a la(s) persona(s) competente(s) para que lleven(n) a cabo los procedimientos disciplinarios o de otro género que correspondan y presente(n) un informe especial al Parlamento. Además la sección 29 de la Ley dispone que toda persona que intencionalmente efectúe una declaración falsa o induzca a engaño o intente inducir a engaño a un Contratista General o los funcionarios a su cargo, o falte al cumplimiento de cualquier requerimiento legítimo del Contratista General o de los funcionarios a su cargo, así como los basados en la sección 21 de la ley, comete un delito. En esos casos los asuntos son remitidos al Director del Ministerio Público. Esas remisiones, así como las basadas en la sección 21 de la Ley, se documentan en los informes anuales de la OCG. Por ejemplo, en las remisiones contenidas en esos informes se indica la persona involucrada, la razón de la remisión y el organismo gubernamental de destino; por ejemplo el arriba mencionado Director del Ministerio Público, el Auditor General, el Comité de Cuentas Públicas, etc.²⁶ Allí se consigna además si esos organismos públicos han adoptado alguna medida a esa fecha.

[37] Con respecto a los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de obligaciones, la sección 28 de la Ley del Contratista General dispone que el Contratista General tiene la obligación de presentar al Parlamento un informe anual referente, en general, al cumplimiento de sus funciones. Ese informe, que se hace público en el sitio web de la OCG, contiene información referente a la labor realizada en el curso del seguimiento de contratos de construcción o de otro género, licencias, permisos y concesiones, y proporciona información sobre la labor realizada por diversas divisiones de la OCG, tales como la División de Servicios Técnicos, la División de Servicios Institucionales y la División de Investigaciones Especiales. Se hace referencia también a la auditoría anual, que es realizada por el Auditor General, conforme a lo previsto en la sección 27(1) de la Ley.

1.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas.

²⁶ Vigésimo Sexto Informe Anual de la OCG (2012) pág. 216, *idem*.

[38] La Oficina del Contratista General cuenta con un conjunto de disposiciones y de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 1.1 de este Informe. Sin embargo, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[39] En primer lugar, además de la OCG, Jamaica ha establecido una Comisión Nacional de Contratos (CNC), cuyo principal objetivo es promover la eficiencia en el proceso de adjudicación y ejecución de contratos gubernamentales y asegurar la transparencia y la equidad en la adjudicación de los mismos.²⁷ Ella examina y aprueba recomendaciones sobre adjudicación de contratos gubernamentales por un monto de más de J\$15 millones; el registro y la clasificación de contratistas deseosos de formular ofertas para contratos gubernamentales y formular recomendaciones al Gabinete para dotar de mayor eficiencia a los procedimientos de adjudicación y ejecución de contratos gubernamentales.²⁸ El Comité toma nota de que el objetivo de la CNC se asemeja mucho a los objetivos de la OCG, tal como se señala en la sección 1.1 del presente informe, es decir, en relación con el control de la adjudicación y la ejecución de contratos gubernamentales con el fin de asegurar que los mismos sean adjudicados imparcialmente y en función de sus méritos.

[40] Además, la sección 23J de la Ley del Contratista General dispone que los fondos y recursos de la CNC han de provenir de los fondos proporcionados a la OCG. Ésta, en consecuencia, proporciona respaldo administrativo y técnico al CNC y al hacerlo opera como Secretaría de este último. Esa estrecha relación hace difícil a las personas distinguir entre una y otra entidad, aunque la OCG efectivamente establece que si bien proporciona respaldo administrativo y técnico no participa en ninguna medida en el proceso de adopción de decisiones del CNC.²⁹ No obstante, el Comité toma nota de que como parte de su función de controlar la adjudicación y ejecución de contratos gubernamentales, la OCG tiene, entre otros cometidos, el de realizar el seguimiento de las actividades del CNC y al mismo tiempo proporcionarle respaldo en forma de recursos financieros y humanos. Además, como se señala en la descripción del CNC que figura en el sitio web de la OCG, si bien ambas entidades son separadas y claramente distintas desde el punto de vista jurídico, debido a su papel subsidiario como proveedora de recursos al CNC, la OCG tiene conocimiento de las actividades y deliberaciones del CNC.³⁰

[41] Se han hecho esfuerzos para separar las dos entidades a fin de atender el problema de la aparente superposición de funciones y de personal entre esas entidades. Se anunció en noviembre de 2010 la aprobación de una decisión del Gabinete de ‘separarlas’ jurídicamente, pero como se señala en el Vigésimo Cuarto Informe Anual de la OCG:³¹

[42] “[Q]ue sea de conocimiento de la OCG aún no se han establecido las estructuras institucionales y las disposiciones legales tendientes a facilitar la ‘separación’ legal de la CNC con respecto a la OCG en la forma que fue contemplada por las seguridades que dio el Primer Ministro.”

[43] En el Informe Anual de 2011 se señala que las operaciones de ambas entidades siguen inalteradas, en tanto que el Informe Anual de 2012 se refiere al progreso logrado, sin proporcionar detalles

²⁷ Sección 23C de la Ley del Contratista General, *supra* nota 3.

²⁸ Sección 23D, *ídem*. Véase también Comisión Nacional de Contratos, <http://www.ncc.gov.jm/ncc/>

²⁹ Vigésimo Sexto Informe Anual de la OCG (2012) pág. 8, *supra* nota 19.

³⁰ Reseña general de la Comisión Nacional de Contratos, <http://www.OCG.gov.jm/OCG/page/national-contracts-commission-ncc-overview>

³¹ Vigésimo Cuarto Informe Anual de la OCG (2010), pág. 45, http://www.OCG.gov.jm/OCG/sites/default/files/annual_report/annual_report_2010_0.pdf

específicos de ningún paso dado.³² El Comité señala que a la fecha en que se redacta el presente informe ambas entidades parecen compartir las mismas oficinas y números de teléfono y de fax.³³

[44] El Comité toma nota en forma especial de que está a consideración del Parlamento jamaicano la Ley de la Comisión de Integridad, de 2014, que establecería una única entidad anticorrupción que asumiría las funciones de la OCG, así como las de la Comisión de Prevención de la Corrupción y la Comisión de Integridad, para disponer de una estrategia anticorrupción coordinada para hacer frente eficazmente al pertinaz problema de la corrupción y subsanar las insuficiencias que padece el régimen anticorrupción en Jamaica, que según se ha comprobado, es inadecuado para la lucha contra la corrupción.³⁴ Si se sanciona, la ley haría de la CNC una entidad independiente de la OCG, que no dependería de ésta para obtener financiamiento o recursos humanos.

[45] Dada la aparente superposición de funciones y la verdadera superposición de personal que podría afectar al funcionamiento y a la independencia de ambas entidades, el Estado analizado debería considerar la posibilidad de llevar a cabo las reformas institucionales y legales necesarias para separarlas de modo que la OCG pueda cumplir sus funciones de garantizar la probidad, transparencia, justa competencia y rendición de cuentas en la esfera de la contratación pública. El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 1.4.1 en la Sección 1.4 del Capítulo II del presente Informe)

[46] En segundo lugar, el suministro de recursos humanos y financieros a la CNC ha sometido a tensiones a la OCG en el cumplimiento de sus funciones. Su División de Servicios Técnicos (DST) actúa como Secretarí de la CNC. En los Informes Anuales de la OCG se hace referencia a la asignación temporal a la DST de personal de la OCG proveniente de otras divisiones funcionales críticas de la OCG, para satisfacer las abrumadoras necesidades que experimenta la CNC para cumplir su función de implementar un sistema de evaluación del 100% de todas las peticiones de registro y renovación del registro que presentan a la CNC los postulantes a adjudicación de contratos.³⁵ Como se señala en el Vigésimo Quinto Informe Anual de la OCG (2011):

[47] *“Si bien la OCG tiene conocimiento del hecho de que en la actualidad los procesos de registro y renovación de registro de contratistas en la CNC presentan cierto retraso, la realidad es que dadas las limitaciones de personal de la DST que experimenta la OCG y el hecho de que el Gobierno no ha asignado personal adicional a la OCG pese a que en los tres (3) últimos años se le han formulado innumerables peticiones, el problema seguirá preocupando por igual a la OCG, a los contratistas y a los restantes interesados en las actividades de la OGC.”*

[48] *El hecho descarnado, sin embargo, es que la OCG ha venido haciendo lo más que puede en condiciones extremadamente arduas y difíciles y no ha recibido absolutamente ninguna asistencia del Gobierno ni respaldo de la CNC en sus esfuerzos por obtener recursos de personal adicionales para hacer frente al problema.”*

³² Vigésimo Quinto Informe Anual de la OCG (2011), pág. 18, http://www.OCG.gov.jm/OCG/sites/default/files/annual_report/annual_report_2011.pdf and Vigésimo Sexto Informe Anual de la OCG (2012), pág. 8, *supra* nota 19.

³³ Véase la información de contacto proporcionada en las secciones ‘Comuníquese con nosotros’ tanto de la OCG como de la CNC, que proporcionan idéntica información, ‘Comuníquese con nosotros’ de la CNC, http://www.ncc.gov.jm/ncc/contact_us.php y ‘Comuníquese con nosotros’ de la OCG Contact Us, <http://www.OCG.gov.jm/OCG/page/contact-us>

³⁴ Ley de la Comisión de Integridad, 2014, Memorando de Objetos y Fundamentos, pág. 67, http://www.japarlament.gov.jm/attachments/339_The%20Integrity%20Commission%20Act,%202014.pdf

³⁵ Vigésimo Quinto Informe Anual de la OCG (2011), pág. 17, *supra* nota 32.

[49] En el Informe Anual de 2012 se hace referencia asimismo al hecho de que en el cumplimiento de sus funciones la DST sigue experimentando los inconvenientes de una escasez de recursos humanos y que se redujo el número de contratos no relacionados con obras de construcción, licencias, permisos y concesiones controlados en 2012, lo que se debió, entre otras razones, a reasignación de recursos humanos para contribuir a reducir un atraso experimentado por la DST en el proceso de registro de contratistas.³⁶

[50] Una vía que puede aliviar la tensión experimentada por los recursos humanos compartidos consiste en separar la CNC de la OCG sin debilitar o socavar a esta última. En el pasado el Contratista General ha señalado que para abordar los temas de asignaciones y recursos de personal todas las decisiones referentes a presupuesto, recursos y personal de la OCG deben ser sustraídas de la esfera de competencia del Ministerio de Hacienda y ser asignadas a un Comité Bipartidista del Parlamento, presidido por la oposición.³⁷ Sea cual fuere la manera en que el Estado analizado aborde la cuestión del personal en la OCG, el Comité cree que Jamaica debería considerar la posibilidad de proporcionar los recursos humanos necesarios para el adecuado cumplimiento de las funciones de la OCG dentro de los límites de los recursos disponibles. (Véase la Recomendación 1.4.2 en la Sección 1.4 del Capítulo II del presente Informe)

[51] En tercer lugar, el Comité observa que la OCG carece de la potestad de suspender un contrato que ya esté ejecutándose o promover el procesamiento de las partes cuando se detecten actos impropios o irregularidades. Como se señala en el Vigésimo Sexto Informe Anual de la OCG (2012) sus *“potestades se limitan a investigar denuncias y, cuando sea necesario, derivar asuntos a las autoridades pertinentes para que adopten medidas adicionales, conforme a la Sección 21 de la Ley del Contratista General.”*³⁸ Además de derivar asuntos, la OCG puede, entre otras cosas, formular recomendaciones para que un organismo público adopte medidas correctivas para hacer frente a cualquier falla que la OCG haya detectado en la adjudicación de un contrato o autorizado la emisión suspensión o renovación de cualquier licencia prescrita³⁹ y luego enviar informes formales al Parlamento y a diversas autoridades del Estado, con recomendaciones y/o conclusiones, cuando figuren en los informes anuales o informes de investigaciones.

[52] El Comité observa, sin embargo, que las recomendaciones de la OCG en general no son seguidas por los organismos públicos, lo que es motivo de preocupación para ese órgano de supervisión. Por ejemplo, en el Vigésimo Primer Informe Anual, de 2007, el Contratista General señaló la siguiente impresión, que fue repetida en los Informes anuales de 2008, 2009 y 2010:⁴⁰

[53] *“Incurriría en omisión, sin embargo, si no dejara constancia del continuo desaliento de la OCG con respecto a los inaceptablemente bajos niveles de atención que el Gobierno y el Parlamento de Jamaica siguen prestando a las Recomendaciones de la OCG, la mayoría de las cuales típicamente son comunicadas en (a) correspondencia oficial de la OCG, (b) Informes de Investigaciones de la OCG y (c) Informes Anuales.*

³⁶ Vigésimo Sexto Informe Anual de la OCG (2012), pág. 15 y 45, *supra* nota 19.

³⁷ Vigésimo Quinto Informe Anual de la OCG (2011), págs. 9 y 59, *supra* nota 32.

³⁸ Vigésimo Sexto Informe Anual de la OCG (2012), pág. 1, *supra* nota 19.

³⁹ Véanse las secciones 15, 20 y 21 de la Ley del Contratista General, *supra* nota 3.

⁴⁰ Vigésimo Primer Informe Anual de la OCG (2001), pág. 1,

http://www.OCG.gov.jm/OCG/sites/default/files/annual_report/annual_report_2007.pdf; Vigésimo Segundo Informe Anual de la OCG (2008), págs. 18 – 19, http://www.OCG.gov.jm/OCG/sites/default/files/annual_report/annual_report_2008.pdf; Vigésimo Tercer Informe Anual de la OCG (2009), págs. 11 – 12, http://www.OCG.gov.jm/OCG/sites/default/files/annual_report/annual_report_2009.pdf ; e Informe Anual de la OCG (2010), pág. 23, http://www.OCG.gov.jm/OCG/sites/default/files/annual_report/annual_report_2010_0.pdf

[54] *Varias de esas Recomendaciones, formuladas en 2007 o antes, o formuladas por mí mismo o por otros Contratistas Generales, nuevamente, por otro año todavía, han quedado enteramente desatendidas. Si esta tendencia ha de volverse continua es muy posible que dé pie a que la propia OCG se vea obligada a cuestionar su propia pertinencia.*”

[55] Además, el Contratista General ha observado que algunas de las recomendaciones se han repetido “ad infinitum y ad nauseam”, refiriéndose a los mismos tipos de imperfecciones y/o deterioro de los niveles de cumplimiento, probidad, rendición de cuentas y transparencia en la contratación pública.⁴¹

[56] Esta dificultad se manifiesta en la respuesta al Cuestionario, en la que el Estado analizado señala:⁴²

[57] *“Los desafíos que tiene ante sí la OCG son los relacionados con la prevención y detección de actos de corrupción, pertinentes para la adjudicación y rescisión de contratos gubernamentales. Si bien la OCG posee amplias y variadas potestades para realizar investigaciones, incluida la de ingresar y obtener información relacionada con la adjudicación de contratos, subsisten dificultades para que logre el cumplimiento de personas/entidades que estén siendo investigadas. La OCG se ve en dificultades una vez que se han detectado actos de corrupción.”*

[58] De tales manifestaciones se hace eco en el Informe Anual de 2012 –el más recientemente presentado- en que la OCG señala:⁴³

[59] *“Hemos seguido observando insuficiencias en los niveles de cumplimiento, probidad, rendición de cuentas y transparencia en la contratación pública y a lo largo de los años hemos venido considerando recomendaciones para los organismos públicos y autoridades públicas respectivos con el fin de hacer frente a los problemas y preocupaciones que son objeto de investigaciones.*

[60] *No obstante se han intensificado las preocupaciones sobre el hecho de que completados varios informes de carácter similar, en especial en cuanto atañe a problemas de irregularidades y actos impropios en la adjudicación y ejecución de contratos gubernamentales, la mayoría de nuestras recomendaciones han sido consideradas, pero sin efecto alguno. La OCG considera fundadamente que el Oficial y las autoridades públicas deben comenzar a actuar de manera y en forma que promuevan el debido cuidado, transparencia e integridad, y todas las autoridades y altos funcionarios públicos deben ser llamados a responsabilidad por los actos que sean ultra vires e infracciones de políticas, normas, procedimientos del sector público y todas las demás leyes aplicables que rigen las adquisiciones y contrataciones públicas”.*

[61] La falta de cumplimiento parece persistir, ya que la OCG ha emitido 5 informes especiales de investigación que contienen recomendaciones, que no se están cumpliendo, para el período comprendido entre septiembre de 2013 y marzo de 2014. El 27 de marzo de 2014, por ejemplo, la OCG publicó un comunicado de prensa referente a la expedición de una licencia a una compañía de servicios públicos, desconociendo una recomendación dirigida a la OCG de que esa compañía no debía ser incluida en un proceso licitatorio, ya que su oferta había sido presentada tras la expiración de un plazo de presentación de ofertas.⁴⁴

⁴¹ Véase Vigésimo Tercer Informe Anual de la OCG (2009), pág. 12, y Vigésimo Cuarto Informe Anual de la OCG (2010), pág. 15, *ídem*.

⁴² Respuesta al Cuestionario, pág. 7, *supra* nota 7.

⁴³ Vigésimo Sexto Informe Anual de la OCG (2012), pág. 210, *supra* nota 19.

⁴⁴ Véase el Comunicado de Prensa del 27 de marzo de 2014, ‘La Oficina del Contratista General expresa preocupaciones con respecto al proyecto de 360 megavatios y la Recomendación pendiente dirigida a la Oficina de Regulación de Servicios

[62] El Comité observa que el incumplimiento de las recomendaciones emitidas por la OCG va en detrimento de la importante labor que esa institución se propone realizar mediante el seguimiento de la adjudicación y la aplicación de adjudicaciones de contratos y licencias. A ese respecto, el Comité coincide con la observación formulada por la OCG en su último informe anual, según el cual:⁴⁵

[63] “[L]a OCG mantiene su recomendación recurrente de que se le dé la potestad y autoridad de dejar en suspenso un proceso de adjudicación de adquisiciones y/o contratos que dé muestras de irregularidades, actos impropios, corrupción y/o ciertas circunstancias cuestionables que a su juicio estén siendo administradas en forma perjudicial para la población y los contribuyentes de este país.”

[64] El Estado analizado debería considerar la posibilidad de establecer mecanismos que la OCG pueda aplicar para suspender o regularizar la adjudicación de un contrato o licencia sobre la base de los resultados de una investigación. Además, el Estado analizado debería considerar establecer un mecanismo de seguimiento en virtud del cual los organismos gubernamentales que sean objeto de una recomendación emitida por la Oficina del Contratista General deban informar, en un plazo determinado, sobre las medidas que hayan adoptado para aplicarlas, y proporcionar por escrito las razones por las cuales no las hayan considerado. El Comité formulará recomendaciones a ese respecto. (Véanse las Recomendaciones 1.4.3 y 1.4.4 en la Sección 1.4 del Capítulo II del presente Informe)

[65] Esa falta de cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la OCG fue planteada por los representantes de la organización de la sociedad civil “National Integrity Action”: a su juicio la OCG es en teoría una buena oficina, pero carece de potestades suficientes para cumplir su labor, pues sólo está facultada para formular recomendaciones. Según estima, en los últimos 5 a 6 años la OCG ha emitido 40 recomendaciones, que no se han tenido en cuenta en todo o en parte.

[66] En cuarto lugar, el Comité toma nota de que conforme a la sección 21 de la Ley del Contratista General, si el Contratista General concluye, en el curso de una investigación, que existen pruebas de incumplimiento de obligaciones o mala conducta, o de que una autoridad o miembro de un organismo público ha cometido un delito penal, la cuestión debe ser derivada a la(s) persona(s) competentes(s) para adoptar medidas disciplinarias o llevar a cabo otros procedimientos que resulten apropiados, y presentar un informe especial al Parlamento. Esas remisiones se dirigen a instituciones tales como la Procuraduría General, la Fiscalía General, la Comisión para la Prevención de la Corrupción y la Oficina del Auditor General, entre otras entidades, a fin de que se adopten medidas apropiadas. No obstante, la OCG señala en sus informes anuales su preocupación ante la eventual omisión de las instituciones arriba mencionadas de actuar conforme a esas remisiones o responder a ellas en forma oportuna y/o eficaz, o no hacerlo en absoluto.⁴⁶ La OCG señala asimismo que en muchos casos no le llega de algunas de esas instituciones un acuse de recibo de esas remisiones.⁴⁷ Con respecto a tales recomendaciones, la OCG señala: “*si nada sucede con las remisiones o recomendaciones de la OCG, ¿qué cometido útil cumple en realidad la OCG?*”⁴⁸

Públicos’ sobre adjudicación de licencia a Energy World International, http://www.OCG.gov.jm/OCG/sites/default/files/media_releases/OCG%20Media%20Release%20OCG%20-%20The%20Office%20of%20the%20Contractor%20General%20Expresses%20Concerns%20as%20it%20regards%20the%20360%20Megawatt%20Project%20and%20the%20OURs%20Pending%20Recomme.pdf

⁴⁵ Vigésimo Sexto Informe Anual de la OCG (2012), pág. 210, *supra* nota 19.

⁴⁶ Vigésimo Tercer Informe Anual de la OCG (2009), pág. 12, *supra* nota 40.

⁴⁷ *Ídem.*

⁴⁸ *Ídem.*

[67] En el Vigésimo Quinto Informe Anual de la OCG (2011), en una sección titulada “Omisión del Estado de hacer efectiva la responsabilidad de los transgresores”, la OCG señala que en los cinco años que antecedieron a ese informe habían sido muy escasas las actividades de acusación fiscal, aplicación de normas o medidas punitivas resultantes de la remisión que ella había efectuado. En la versión de 2012 del informe, que fue el último publicado en línea, en una sección en que se resumen las remisiones efectuadas en ese año, de 10 remisiones efectuadas a diversos organismos gubernamentales, en cuatro casos la OCG recibió cartas de acuse de recibo de esas entidades, y sólo una dio lugar a medidas ulteriores, una reunión que fue convocada con representantes de la Escuadra de Fraudes y una declaración testimonial proporcionada para colaborar con la investigación.⁴⁹

[68] El Comité observa que la omisión general de adoptar medidas con respecto a las remisiones dispuestas por la OCG va en detrimento del objeto y las funciones de ese órgano de supervisión. El Estado analizado debería considerar la posibilidad de estudiar esa situación e imponer a los organismos públicos la obligación de dar a conocer a la OCG los resultados de las remisiones de esta última en forma oportuna y eficaz. Si no se adoptaron medidas tendientes a procesar o sancionar la conducta identificada por la OCG que haya dado lugar a una remisión, ello también debería expresarse. El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 1.4.5 en la Sección 1.4 del Capítulo II del presente Informe)

[69] En quinto lugar, el Comité observa asimismo que la OCG ha lamentado en anteriores Informes Anuales la inacción de la Fiscalía General en disponer procesamientos por delitos de corrupción. En el Vigésimo Quinto Informe Anual de la OCG (2011), el Contratista General dejó constancia de las principales razones que explican esa situación. Por ejemplo, los delitos de corrupción despiertan menos *atención que los delitos contra la persona humana, en especial en casos de delitos graves, como el homicidio. Además la OCG sostiene que “[e]s también un hecho irrefutable que las tasas extraordinariamente altas de delitos de violencia que se registran en el país han, literalmente, agotado los ya escasos recursos y activos de la Fuerza de Policía de Jamaica, la Dirección del Ministerio Público, y el Poder Judicial.”*⁵⁰ La OCG se refiere también a una pronunciada acumulación de casos, que según ella puede llegar a 400.000. Esas razones han llevado a la OCG a concluir que la Fiscalía General no está estructurada ni adecuadamente dotada de recursos para investigar eficaz y eficientemente y promover procesamientos por complejos delitos de corrupción.

[70] Además, la OCG señala que ella no es el único organismo público cuyas remisiones hayan dado lugar a inacción en procesamientos a ser promovidos por la Fiscalía General. Señala que la Sección de Lucha Anticorrupción de la Fuerza de Policía de Jamaica y la Comisión para la Prevención de la Corrupción han lamentado que varios asuntos penales derivados a la Fiscalía General no hayan dado lugar a procesamientos.⁵¹

[71] Como esos organismos públicos recurren exclusivamente a la Fiscalía General para promover procesamientos por delitos de corrupción y relacionados con corrupción, su eficacia cesa si no se llevan a cabo procesamientos. El Comité observa que el Estado analizado debería considerar la posibilidad de ocuparse de la falta de procesamientos o de medidas de competencia de la Fiscalía General, trátase de un problema de prioridades o de recursos. El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 1.4.6 en la Sección 1.4 del Capítulo II del presente Informe)

⁴⁹ Vigésimo Sexto Informe Anual de la OCG (2012), págs. 216 – 221, *supra* nota 19.

⁵⁰ Vigésimo Quinto Informe Anual de la OCG (2011), pág. 48, *supra* nota 32.

⁵¹ *Ídem*, pág. 49.

[72] En relación con ese tema, el Estado analizado puede considerar la posibilidad de promover mecanismos de coordinación entre esos órganos de supervisión y la Fiscalía General. Como ésta posee competencia exclusiva para promover procesamientos, la creación de canales abiertos de comunicación entre la OCG y esa Oficina puede contribuir a facilitar su labor y llevar a procesamientos por delitos de corrupción y relacionados con corrupción, al igual que ayudar a la OCG en la preparación de los documentos necesarios para apoyar un enjuiciamiento. El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 1.4.7 en la Sección 1.4 del Capítulo II del presente Informe)

[73] En sexto lugar, el Comité observa que la sección 29 de la Ley del Contratista General establece seis casos en que pueden aplicarse sanciones penales por infracción de esas disposiciones legales; a saber, cuando una persona a) hace una declaración falsa para inducir a error, o induce a error, o intenta inducir a error a un Contratista General o cualquier otra persona en el cumplimiento de las funciones que la ley encomienda a un Contratista General; b) sin justificación o excusa legal, estorba, dificulta u opone resistencia al Contratista General u otra persona en el cumplimiento de las funciones que le encomienda la Ley, y c) el Contratista General y cualquier otra persona a quien le concierna la administración de la ley revela documentos, información y otras cosas que se le proporcionen en la aplicación de cualesquiera disposiciones de la Ley, que deban considerarse como secretas y confidenciales. La pena por violación de esas disposiciones es una multa por no más de J\$5000 o prisión por no más de un año.⁵² El Comité señala que expresada en dólares estadounidenses el monto máximo de la multa que puede imponerse a una persona, expresada en dólares de los Estados Unidos, es de aproximadamente US\$45.

[74] La OCG ha comentado en el pasado el hecho de que las bajas sanciones que pueden imponerse por violación de la Ley no son un disuasivo eficaz ni han cambiado en cerca de tres décadas, expresándose en los siguientes términos:⁵³

[75] *“Pero aun cuando la comisión de delitos de corrupción y otros delitos conexos estuviera siendo eficazmente investigada y se promoviera eficazmente su procesamiento en Jamaica –situación que lamentablemente, como se ha visto, no ocurre- el hecho es que las sanciones asociadas con la comisión de los referidos delitos son tan bajas que en modo alguno pueden servir de disuasivos, pese a lo cual nada se está haciendo a ese respecto.*

[76] *Un caso elocuente es el de las innumerables recomendaciones de la OCG formuladas para corregir la situación en relación con las sanciones preceptuadas para los tres (3) delitos de corrupción especificados en la Ley del Contratista General. Las sanciones de que se trata se han mantenido, en los últimos 28 años, en el nivel, inexplicablemente bajo, de una multa de no más de J\$5.000 y/o prisión por un término de no más de US\$5.000 y/o prisión por un término de no más de 12 meses...*

[77] *Es por demás evidente, por lo tanto, la urgencia y necesidad de que la situación, en Jamaica, sea objeto de críticas medidas de urgencia. Deben sancionarse y aplicarse más severas sanciones penales – incluidas penas de privación de libertad preceptivas y sanciones de base económica, cuando corresponda, para hacer frente eficazmente a la corrupción en la contratación pública.”* [énfasis en el original]

[78] El Comité observa que como las sanciones establecidas por el Contratista General no han sido actualizadas en cerca de tres décadas, el Estado analizado debería considerar la posibilidad de revisarlas para que constituyan un disuasivo eficaz frente a la infracción a la Ley. El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 1.4.8 en la Sección 1.4 del Capítulo II del presente Informe)

⁵² J\$1 equivale a 1 centavo de US\$.

⁵³ Vigésimo Quinto Informe Anual de la OCG (2011), págs. 49 – 50, *supra* nota 32.

[79] A ese respecto, considerando la orientación del Estado analizado hacia la consolidación de las potestades de la OCG en el marco de una nueva Comisión de Integridad, el Comité señala que en ese nuevo régimen se debería tener en cuenta la necesidad de establecer penas más severas por violación de las normas que atañen a la OCG en el marco de la Ley del Contratista General.

1.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[80] En su respuesta al Cuestionario el Estado analizado señala que la OCG ha adoptado las siguientes medidas y/o implementado las siguientes iniciativas para colaborar en la prevención de actos de corrupción vinculados con la adjudicación y/o rescisión de contratos gubernamentales y licencias prescriptas: Informe Trimestral de Adjudicación de Contratos, Realización de Investigaciones Legales; Gestión de Indagatorias y Auditorías de Adquisiciones; Presentaciones de Organismos Públicos; Establecimiento de una Base de Datos de Información sobre Licencias Prescriptas; Discursos Públicos del Contratista General; Participación en la Supervisión de las Asociaciones Público-Privadas, y publicación de comunicados de prensa sobre diversos temas vinculados, entre otras cosas, con corrupción.⁵⁴

[81] Además, tal como se señala en la sección 1.1 del presente informe, la OCG publica un informe anual que contiene una reseña exhaustiva de sus actividades. Por ejemplo, se proporciona información sobre las actividades llevadas a cabo por las diversas divisiones que constituyen la OCG. La División de Inspección, que se ocupa principalmente del seguimiento de los contratos públicos, realizó el seguimiento de un total de 967 llamados de ofertas para adquisiciones efectuados en 2012; 600 de ellos para proyectos no relacionados con obras de construcción, en tanto que los 367 restantes para proyectos de construcción.⁵⁵ El total de proyectos de adquisiciones cuyo seguimiento se realizó entre 2008 y 2012 se copia a continuación del publicado en el Vigésimo Sexto Informe Anual de la OCG (2012).⁵⁶

PROYECTOS DE ADQUISICIONES CON SEGUIMIENTO REALIZADO, 2008 – 2012					
AÑO	2008	2009	2010	2011	2012
NÚMERO DE PROYECTOS CON SEGUIMIENTO REALIZADO	485	795	972	1092	967

[82] Esos informes anuales contienen información y recomendaciones formuladas por la OCG con respecto a esas adquisiciones,⁵⁷ además de actividades anteriores y posteriores al seguimiento y

⁵⁴ Respuesta al Cuestionario, págs. 6 – 7, *supra* nota 7.

⁵⁵ Vigésimo Sexto Informe Anual de la OCG (2012), pág. 9, *supra* nota 19.

⁵⁶ *Ídem*.

⁵⁷ Véase ‘Seguimiento de Contratos de Construcción’ y ‘Seguimiento de Contratos no Relacionados con Construcción, Licencias, Permisos y Concesiones’, que aparecen en las páginas 21 y 45, respectivamente, del Vigésimo Sexto Informe Anual de la OCG (2012), *ídem*.

comentarios sobre contratos de construcción y de otra índole, así como un resumen de los contratos de construcción y de otro género cuyo seguimiento se realizó.⁵⁸

[83] Esos informes anuales contienen también información sobre el Informe Trimestral de Adjudicación de Contratos que preparan y presentan todos los organismos públicos que realizan adquisiciones, y en que se indican las particularidades de los contratos que han adjudicado esos organismos, cuyo valor oscila entre J\$500.000 e infinito.⁵⁹ Esos Informes han de ser remitidos a la OCG, del modo estipulado, retroactivamente, dentro de un año calendario que siga a la finalización del trimestre con el que se relacionan. Cabe señalar que desde el primer trimestre de 2009 la OCG ha registrado una tasa de cumplimiento del 100% en tres años calendario consecutivos en el período comprendido entre 2009 y 2012, o sea doce trimestres consecutivos, con excepción del primer trimestre de 2012, en que se registró una tasa de cumplimiento del 99%.⁶⁰ Para el año 2012 esa cifra fue de 9399 adjudicaciones, valoradas en más de J\$25.700 millones.⁶¹ En los apéndices IX y X de los Apéndices del Vigésimo Sexto Informe Anual para la OCG aparece un resumen A sucinto de los Apéndices para el resumen del Vigésimo Sexto de esos informes para el Vigésimo Informe Anual para la OCG.⁶²

[84] También se proporciona información detallada sobre la labor de las diversas divisiones que constituyen la OCG (Contratos de Construcción, Contratos no relacionados con Construcción, Licencias y Permisos, Servicios Técnicos, Servicios Instituciones, Sistemas de información, Unidad de Investigaciones Especiales), así como la capacitación proporcionada al personal durante el año.

[85] Significativamente, en el informe anual también constan las investigaciones realizadas por la OCG cada año y las recomendaciones que de ellos emanan. Esos informes también contienen resultados sobre las remisiones efectuadas por la OCG a diversos organismos públicos y en ellos se hace constar si se ha recibido alguna retroinformación como consecuencia de esas remisiones.

1.4. Conclusiones y recomendaciones.

[86] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la Oficina del Contratista General en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[87] Jamaica ha considerado y adoptado medidas encaminadas a mantener y fortalecer la Oficina del Contratista General como órgano de control superior, tal como se describió en la sección 1 del capítulo II del presente informe.

[88] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

⁵⁸ Véanse los Apéndices III – VIII de los Apéndices del Vigésimo Sexto Informe Anual de la OCG, http://www.OCG.gov.jm/OCG/sites/default/files/annual_report/OCG%20Annual%20Report%202012%20Appendices.pdf

⁵⁹ Véase el Informe Trimestral sobre el Régimen de Adjudicación de Contratos (RAC), <http://www.OCG.gov.jm/OCG/view/qca-reporting>. En esos informes se capta informaciones adicionales tales como la fecha de apertura de licitaciones y los actos de aprobación recibidos y se proporciona a los organismos públicos la posibilidad de formular justificaciones sobre el uso de los mecanismos de contratación directa o licitaciones limitadas por encima de cierto valor. Además los organismos públicos pueden insertar comentarios para cada contrato del que informan, en la medida de lo necesario.

⁶⁰ *Ídem*, pág. 158.

⁶¹ *Ídem*, pág. 162.

⁶² Apéndices para el Vigésimo Sexto Informe Anual para la OCG, págs. 541 y 569, http://www.OCG.gov.jm/OCG/sites/default/files/annual_report/OCG%20Annual%20Report%202012%20Appendices.pdf

- 1.4.1. Considerar realizar las reformas institucionales y legales necesarias para separar a la Comisión Nacional de Contratos de la Oficina del Contratista General (Véase la sección 1.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 1.4.2. Proporcionar a la Oficina del Contratista General los recursos humanos necesarios para el adecuado cumplimiento de su función, dentro de los límites de los recursos humanos disponibles. (Véase la sección 1.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 1.4.3. Considerar la posibilidad de otorgar a la Oficina del Contratista General la potestad y autoridad de suspender o regularizar un contrato o licencia cuando se presenten indicios de corrupción, irregularidades o actos impropios. (Véase la Sección 1.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 1.4.4. Establecer un mecanismo de seguimiento por el cual los organismos públicos que sean objeto de una recomendación formulada por la Oficina del Contratista General deban informar, en un plazo determinado, sobre las medidas adoptadas para implementarlas y proporcionar, por escrito, las razones por las cuales no las hayan considerado (Véase la Sección 1.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 1.4.5. Disponer la obligatoriedad de que la Comisión Nacional de Contratos reciba en forma oportuna y eficaz información de los organismos públicos con respecto al resultado de las remisiones de casos de irregularidades (Véase la Sección 1.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 1.4.6. Adoptar las medidas pertinentes para enfrentar el problema de la falta de procesamientos por parte de la Fiscalía General por delitos de corrupción y relacionados con corrupción. (Véase la Sección 1.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 1.4.7. Establecer, cuando sea apropiado, un mecanismo o acuerdo de intercambio de información entre la Oficina del Contratista General y la Fiscalía General, para ayudar a la Oficina del Contralor General en la preparación de los documentos necesarios para apoyar un enjuiciamiento. (Véase la Sección 1.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 1.4.8. Considerar la posibilidad de actualizar las sanciones vigentes por incumplimiento de la Ley del Contratista General, para que operen como un disuasivo eficaz. (Véase la Sección 1.2 del Capítulo II del presente Informe)

2. LA COMISIÓN DE INTEGRIDAD

2.1 Existencia de un marco jurídico y/o de otras medidas

[89] La Comisión de Integridad cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[90] Con respecto a sus objetivos y al alcance de sus funciones, la sección 5(1) de la Ley (de Integridad de los Miembros) del Parlamento dispone que la Comisión tiene el cometido de recibir y mantener registradas las declaraciones legales (patrimoniales) proporcionadas por parlamentarios,

examinarlas, solicitar a esos parlamentarios cualquier información pertinente para esas declaraciones que pueda ser útil para los miembros de la Comisión en sus exámenes; realizar indagatorias e investigaciones independientes con respecto a esas declaraciones, y recibir e investigar cualquier denuncia contra un parlamentario referente a un acto de corrupción en la acepción dada al término por la sección 14 de la Ley de Prevención de la Corrupción.⁶³

[91] La Comisión de Integridad tiene también la potestad de convocar testigos, requerir la presentación de documentos y realizar toda actividad que considere necesaria o conveniente para el cumplimiento de sus funciones.⁶⁴

[92] Con respecto a la manera en que se adoptan decisiones, conforme a la sección 15 del Primer Anexo de la Ley (de Integridad de los Miembros) del Parlamento, las decisiones deben ser adoptadas por mayoría de votos de un quórum de no menos de tres miembros de la Comisión. El Presidente, además de tener voto original, tendrá también el voto decisorio en todo caso de igualdad de votos. Las decisiones de la Comisión de Integridad están sujetas a revisión judicial.

[93] Con respecto a la selección de los funcionarios superiores del cuerpo, los miembros de la Comisión de Integridad están constituidos por el Auditor General y otros cuatro miembros (denominados ‘miembros designados’), que son designados por el Gobernador General tras celebrar consultas con el Primer Ministro y el Jefe de la Oposición. Esos cuatro miembros son elegidos de 5 categorías de personas: i) miembros del Consejo Privado; ii) presidente o ex presidente del Instituto de Contadores Acreditados de Jamaica; iii) Jueces de Apelación jubilados o Jueces jubilados de la Corte Suprema; (iv) personas que hayan ocupado el puesto de Comisionado del Impuesto sobre la Renta, Secretario Financiero o Auditor General y v) personas que a juicio del Gobernador General posean elevada integridad y estén en condiciones de ejercer competencia, diligencia y juicio fundado en el cumplimiento de los cometidos que les señala la Ley.⁶⁵

[94] Los miembros designados ocupan sus cargos por períodos no inferiores a dos años y superiores a cinco años y pueden ser reelectos. El Gobernador General designa a uno de esos miembros como Presidente de la Comisión de Integridad.⁶⁶ El Gobernador General, tras celebrar consultas con el Primer Ministro y el Jefe de la Oposición, puede en cualquier momento revocar la designación de cualquier miembro designado.

[95] Con respecto a la identificación de necesidades de recursos humanos y selección de personal, la sección 13 del Primer Anexo de la Ley dispone que la Comisión de Integridad designe y dé posesión de sus cargos a un Secretario y a los restantes altos funcionarios y empleados que considere necesarios para el debido cumplimiento de sus cometidos. Además, el Gobernador General puede aprobar la designación de cualquier alto funcionario al servicio del Gobierno para cualquier cargo con la Comisión de Integridad.

[96] Adicionalmente, en la respuesta al cuestionario, el Estado analizado señala que todas las designaciones de funcionarios se basan en el mérito y requieren diversas calificaciones de educación

⁶³ Ley (de Integridad de los Miembros) del Parlamento, http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_jam_parlia.pdf. Se entiende por parlamentarios los miembros de la Cámara de Representantes y los Senadores. Véase además la sección 14 de la Ley de Prevención de la Corrupción, que define los actos de corrupción, <http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/The%20Corruption%20Prevention%20Act.pdf>

⁶⁴ Sección 5(2) de la Ley (de Integridad de los Miembros) del Parlamento, *supra* nota 63.

⁶⁵ Sección 2 del primer Anexo de la Ley (de Integridad de los Miembros) del Parlamento, *idem*.

⁶⁶ Secciones 3 y 4 del primer Anexo, *idem*.

y profesionales. La selección de personal se rige por un proceso de entrevistas sucesivas, precedido por un anuncio público y/o interno, así como verificaciones de seguridad.⁶⁷

[97] Durante la visita *in situ*, los representantes de la Comisión de Integridad manifestaron que los contratos son a plazo fijo de 3 a 5 años, y como sus titulares no se consideran miembros del servicio público, su remoción y destitución se rige por las condiciones de los contratos de empleo.⁶⁸ La Comisión de Integridad está formada por cinco personas: un secretario administrador, un oficial de investigaciones, un oficial ejecutivo, un secretario superior y un asistente de oficina.⁶⁹

[98] Con respecto al uso de modernas tecnologías para facilitar su labor, los representantes de la Comisión de Integridad, durante la visita *in situ*, manifestaron que el órgano tiene acceso a bases de datos para contribuir a verificar el contenido de las declaraciones legales (patrimoniales), como las de la Agencia Nacional de Tierras, la Oficina de Compañías de Jamaica y el Registro de Automotores en el Departamento de Ingresos Internos.⁷⁰

[99] Con respecto a la manera en que se asegura la satisfacción de las necesidades presupuestarias, en su respuesta al cuestionario el Estado analizado señala que los fondos de la Comisión de Integridad consisten en las sumas proporcionadas para la ejecución de su labor por el Parlamento y otras cantidades que le sean pagadas conforme a la ley.⁷¹ Además la Comisión de Integridad debe presentar al Primer Ministro, con miras a su aprobación, antes del 31 de octubre del año, sus estimaciones de ingresos y gastos para el período que se inicia el 1 de abril del ejercicio siguiente y finaliza el 31 de marzo del ejercicio subsiguiente.⁷² Además, durante la visita *in situ* los representantes de la Comisión de Integridad proporcionaron la siguiente información sobre su presupuesto para los cinco ejercicios fiscales anteriores:

Año	Presupuesto (en dólares jamaicanos)
2009/2010	11,4 millones
2010/2011	11,6 millones
2011/2012	12,8 millones

⁶⁷ Respuesta al Cuestionario, pág. 9, *supra* nota 7.

⁶⁸ *Ídem*.

⁶⁹ Véase Informe de la Comisión de Integridad designada conforme a la Ley (de Integridad de los Miembros) del Parlamento, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, pág. 4, http://www.japarlament.gov.jm/attachments/1158_Report%20of%20the%20Integrity%20Commission.pdf

⁷⁰ Véase además la pág. 4 del Informe Anual de 2010 de la Comisión de Integridad, *ídem*.

⁷¹ Respuesta al Cuestionario, pág. 9, *supra* nota 7. Véase además la sección 10 del primer Anexo a la Ley (de Integridad de los Miembros) del Parlamento, *supra* nota 63.

⁷² Primer Anexo de la Ley (de Integridad de los Miembros del) Parlamento, sección 12(1), *supra* nota 63.

2012/2013	17,3 millones ⁷³
2013/2014	15,5 millones

[100] La Sección 11 del Primer Anexo de la Ley dispone asimismo que la Comisión de Integridad debe llevar cuentas adecuadas de sus recibos, pagos, activos y pasivos, y que esas cuentas deben ser auditadas anualmente por un auditor designado cada año por la Comisión de Integridad, con la aprobación del Primer Ministro.

[101] Con respecto a los mecanismos de coordinación, la Ley dispone que la Comisión de Integridad debe denunciar todo acto de corrupción a los líderes parlamentarios (Primer Ministro, Jefe de la Oposición, Presidente de la Cámara Baja y Presidente del Senado) y al Fiscal General.⁷⁴ Además, cuando una persona omite presentar a la Comisión de Integridad una declaración legalmente preceptuada por la Ley, o la Comisión de Integridad no considera satisfactorio algún aspecto de una declaración, dicha comisión debe poner el asunto en conocimiento de los líderes parlamentarios. Ese informe puede ser derivado también al Director del Ministerio Público o al Comisionado de Policía, quienes pueden tomar las medidas que consideren apropiadas en cada caso.⁷⁵

[102] Con respecto a los mecanismos de rendición de cuentas, la sección 12(2) del Primer Anexo de la Ley dispone que la Comisión debe presentar al Primer Ministro un informe anual relativo, en forma general, al cumplimiento de sus funciones. Ese informe debe ser presentado a la Cámara de Representantes y al Senado. Además el informe anual establece el salario y las asignaciones para viajes de sus ejecutivos superiores (Secretario Administrador, Oficial de Investigaciones y Oficial Ejecutivo), así como la remuneración percibida por los miembros de la Comisión de Integridad.⁷⁶

[103] Finalmente, se proporcionan también los estados financieros de la Comisión de Integridad, y que son auditados de forma independiente.⁷⁷

2.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[104] La Comisión de Integridad cuenta con un conjunto de disposiciones y de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 2.1 de este Informe. Sin embargo, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[105] El Comité señala en primer lugar el importante papel que cumple en Jamaica la Comisión de Integridad en materia de lucha contra la corrupción. Como se señaló en la sección 2.1, ese órgano de supervisión se encarga de recibir, examinar e investigar las declaraciones que los parlamentarios deben

⁷³ El estado analizado señala que en relación con el presupuesto que fue presentado para los últimos cinco años, el presupuesto correspondiente al ejercicio de 2012/13 incluye la suma de \$4,2 millones, que corresponde a beneficios jubilatorios para el ex Secretario Administrador.

⁷⁴ Ley de Integridad (de los Miembros) del Parlamento, sección 12(4), *ídem*.

⁷⁵ *Ídem*, sección 12(3).

⁷⁶ Véase Remuneraciones de Altos Funcionarios Ejecutivos y Remuneraciones de Directores en el Informe de 2010 de la Comisión de Integridad, *supra*, nota 69.

⁷⁷ Estados Financieros de la Comisión de Integridad, 31 de marzo de 2010,

http://www.japarlament.gov.jm/attachments/1158_Integrity%20Commission%20Financial%20Statements%20-%20March%2031%202010.pdf

efectuar conforme a la ley, así como recibir e investigar denuncias sobre actos de corrupción en que incurran esos funcionarios electivos. A ese respecto el Comité observa además que en la Política de Seguridad Nacional para 2013 correspondiente a Jamaica, que fue preparada por la Unidad de Coordinación de la Política Nacional de Seguridad (Oficina del Gabinete) y el Ministerio de Seguridad Nacional, uno de los peligros claros y presentes que enfrenta Jamaica es la corrupción de los funcionarios electivos.⁷⁸ Ese peligro ha sido identificado como de Nivel 1, lo que significa que es de fuerte impacto, de alta probabilidad y que ha sido considerado como alta prioridad y requiere una respuesta activa.⁷⁹

[106] El Comité señala además que el Estado analizado ha presentado un proyecto de Ley de la Comisión de Integridad, de 2014, que derogarí la Ley (de Integridad de los Miembros) del Parlamento y sustituiría la integración actual de la Comisión de Integridad por una nueva integración, responsable de promover y mejorar los estándares de conducta ética, no sólo de los parlamentarios, sino también de funcionarios públicos.⁸⁰ Dicho proyecto consolidaría las leyes relativas a la prevención de la corrupción y a la adjudicación, el seguimiento y la investigación de contratos gubernamentales y licencias preceptivas, y prevería el establecimiento de un órgano único, una nueva Comisión de Integridad, encargado de promover y fortalecer medidas encaminadas a prevenir, detectar, investigar y promover el procesamiento penal por actos de corrupción.⁸¹ En virtud de ese proyecto de ley se fusionaría la Comisión de Integridad, la Oficina del Contratista General y la Comisión para la Prevención de la Corrupción en un único organismo anticorrupción, medida que ha sido recomendada también por la Política Nacional de Seguridad arriba mencionada.⁸²

[107] En la Exposición de Objetivos y Fundamentos de dicho proyecto de ley se señala:⁸³

[108] “*El actual régimen, previsto por la Ley de Prevención de la Corrupción y la Ley (de Integridad de los Miembros) del Parlamento, ha sido considerado inadecuado para la lucha contra la corrupción.*”

[109] El Comité observa además, que la creación de un único organismo anticorrupción en Jamaica recibe una consideración favorable, ya que contribuiría a eliminar la superposición y duplicación de recursos y a hacer frente a las fallas que se perciben en el actual marco institucional, que se considera desarticulado, fraccionado, sumamente ineficaz, ineficiente, insuficientemente dotado de recursos e inadecuado para combatir la corrupción.⁸⁴

[110] Teniendo en cuenta el importante papel que cumple la Comisión de Integridad en la detección de actos de corrupción cometidos por funcionarios electivos, los objetivos y fundamentos de la Ley de la Comisión de Integridad, 2014, la conclusión del Gobierno de Jamaica de que el régimen actualmente vigente, en especial el hecho de que sea regido por la actual Comisión de Integridad, es inadecuado para hacer frente a la corrupción en el Estado analizado, y a la necesidad de hacer frente al peligro claro y presente identificado en la Política Nacional de Seguridad de Jamaica de 2013, el Comité formula las siguientes observaciones para ayudar a fortalecer la labor de ese órgano de supervisión:

⁷⁸ 2013 Política Nacional de Seguridad de Jamaica, pág. 15.

[http://www.cabinet.gov.jm/files/NATSEC%20March%2025%202014%20\(1\)%20\(1\).pdf](http://www.cabinet.gov.jm/files/NATSEC%20March%2025%202014%20(1)%20(1).pdf)

⁷⁹ *Idem*, pág. 4.

⁸⁰ Véase el Preámbulo de la Ley de la Comisión de Integridad, 2014, *supra*, nota 34. Este proyecto de ley se presentó en marzo 2014.

⁸¹ *Idem*

⁸² Política Nacional de Seguridad de Jamaica, 2013, pág. 33, *supra*, nota 78.

⁸³ Exposición de Objetivos y Fundamentos, pág. 67, *supra* nota 34.

⁸⁴ Véanse los comentarios del Contratista General en su Vigésimo Quinto Informe Anual (2011), pág. 41, *supra*, nota 32.

[111] Primero, el Comité señala que ese órgano de supervisión, si bien cumple importantes funciones de lucha contra la corrupción en Jamaica, carece de un sitio web en que el público en general y las personas sujetas a su régimen, o sea los parlamentarios, puedan tener acceso a la labor que realiza y formular consultas sobre la misma.

[112] El Comité observa que la única manera de hallar alguna información sobre la labor de ese órgano de supervisión es ingresar en el sitio web del Parlamento de Jamaica y realizar una búsqueda. El Estado analizado debería considerar la posibilidad de establecer un sitio web de la Comisión de Integridad, que contenga, por ejemplo, estadísticas de su labor, así como suministrar información a los parlamentarios sobre sus obligaciones de proporcionar las declaraciones preceptuadas por la ley y la manera de hacerlo. El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 2.4.1 en la Sección 2.4 del Capítulo II del presente Informe)

[113] El Comité observa que el Estado analizado señala que existen varias vías a través de las cuales el público puede presentar una denuncia ante la Comisión de Integridad, tales como: i) por escrito, en sobre confidencial o anónimamente; ii) por teléfono; iii) compareciendo personalmente a la oficina. También señala que el público puede además formular la denuncia a un miembro de la Comisión, al Secretario Administrador o al funcionario a cargo de la investigación. Además, todos los informes anuales de la Comisión contienen la dirección de la misma. Sin embargo, el Comité señala que estas vías no se dan a conocer de una manera fácilmente accesible para el público. Como ya se señaló, la Comisión de Integridad no tiene un sitio web, y el Comité no pudo encontrar ninguna información de contacto sobre este órgano de supervisión en el sitio web del Parlamento de Jamaica,⁸⁵ por lo que al Comité no le resulta claro si este organismo de supervisión cumple eficazmente su función de recibir e investigar denuncias contra parlamentarios referentes a actos de corrupción, como se establece en la sección 5(1)(d) de la Ley (de Integridad de los Miembros) del Parlamento. El Comité cree que el Estado analizado debería considerar establecer e implementar un programa de sensibilización para informar a las personas sobre la manera en que se pueden presentar denuncias a la Comisión de Integridad referentes a presuntos actos de corrupción cometidos por parlamentarios. (Véase la Recomendación 2.4.2 en la Sección 2.4 del Capítulo II del presente Informe)

[114] El Comité toma nota de que la Comisión de Integridad cumple sus cometidos con cinco funcionarios. Durante la visita *in situ*, sus representantes manifestaron que consideraban conveniente aumentar el personal de la Comisión, lo que ayudaría a realizar la labor que ésta tiene a su cargo. Por ejemplo, en el Informe Anual de 2010, la Comisión de Integridad señala que había obtenido acceso en línea a la Agencia Nacional de Tierras y a la Oficina de Compañías de Jamaica, lo que permitiría a ese organismo de supervisión obtener información sobre inmuebles e inversiones de propiedad de parlamentarios y ayudaría a verificar el contenido de sus declaraciones y a realizar investigaciones. Por lo tanto, la carga de trabajo del Oficial de Investigaciones se incrementaría sustancialmente y por ende solicitaba autorización para utilizar los servicios de un funcionario adicional. No obstante, el Comité señala que durante la visita *in situ* los representantes de la Comisión de Integridad manifestaron que el número de funcionarios seguía siendo de cinco, o sea igual al existente cuando se preparó el Informe Anual de 2010, con un solo investigador empleado. Además, en la Respuesta al Cuestionario, el Estado analizado señala que:⁸⁶

⁸⁵ En el informe anual de ese organismo de investigación se proporciona, ciertamente, la ubicación de las oficinas, pero no se agrega información alguna sobre el lugar en que puede formularse una denuncia, ni se aclara si ello se puede hacer por fax, teléfono, correo electrónico o algún otro medio, Informe Anual de 2010, pág. 5, *supra*, nota 69.

⁸⁶ Respuesta al Cuestionario, pág. 36, *supra* nota 7.

[115] “La Comisión de Integridad se enfrenta a ciertas limitaciones presupuestarias que impiden la contratación de personal adicional. La Comisión ha solicitado la aprobación del Ministerio de Finanzas y Planificación para dos puestos adicionales; 1 un (1) Oficial Investigador; y 2. de un (1) Analista Financiero. La solicitud aún no ha sido aprobado. Con el personal adicional, la Comisión de Integridad estaría en condiciones de realizar más investigaciones y análisis más significativos de las declaraciones y los estados financieros.”

[116] Los representantes de la Comisión señalaron también que evaluaban positivamente el proyecto de Ley de Comisión de Integridad de 2014, que incrementaría el número de funcionarios y les permitiría cumplir más eficazmente su labor. Por ejemplo, les podría permitir investigar más detenidamente casos en que un parlamentario no hubiera proporcionado información sobre los activos, pasivos e ingresos de su cónyuge e hijos, información que los representantes de la Comisión de Integridad, durante la visita *in situ*, manifestaron que algunos parlamentarios habían expresado que tenían cierta dificultad en obtener.

[117] En virtud de lo que antecede, el Comité observa que el Estado analizado debería considerar proporcionar a la Comisión de Integridad los recursos presupuestarios y humanos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones dentro de los límites de los recursos disponibles. El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 2.4.3 en la Sección 2.4 del Capítulo II del presente Informe)

[118] A ese respecto, las organizaciones de la sociedad civil durante la visita *in situ* expresaron preocupación sobre los recursos proporcionados en Jamaica a los organismos anticorrupción en general, y en especial a la Comisión de Integridad, señalando que no resulta claro si el Oficial de Investigaciones empleado por ese organismo de investigación es un investigador de fraudes certificado.⁸⁷

[119] Con respecto al uso de sistemas o tecnologías modernas para facilitar su labor, el Comité observa que la Comisión de Integridad tiene acceso a bases de datos para ayudar a verificar el contenido de las declaraciones anuales, como las de la Agencia Nacional de Tierras y la Oficina de Compañías de Jamaica. En el Informe Anual de 2010 de la Comisión de Integridad se hace referencia a la obtención de acceso en línea, con carácter limitado, por parte del Departamento de Ingresos Internos, que se ha consolidado ahora en la Administración de Tributos de Jamaica. El Comité cree que el acceso a la información contenida en la Administración de Tributos de Jamaica es importante para colaborar en el examen y la investigación de la corrupción, especialmente con respecto a denuncias de enriquecimiento ilícito. A esos efectos el Comité cree que el Estado analizado puede considerar la posibilidad de aplicar medidas que permitan a la Comisión de Integridad inspeccionar y sacar copias de registros y documentos en poder de departamentos y organismos gubernamentales, y no exclusivamente los que están en poder de los servicios de ingresos. El Comité observa que conforme a la sección 5(2) de la Ley (de Integridad de los Miembros) del Parlamento, la Comisión tiene la potestad de citar testigos, requerir la producción de documentos y hacer todo lo que considere necesario o conveniente para el cumplimiento de sus funciones. No obstante, alguna información puede estar amparada por requisitos de confidencialidad y no figurar en registros públicos.⁸⁸ En esos casos la posibilidad de requerir la producción de documentos puede afectar a la labor de la Comisión

⁸⁷ El Estado analizado señala que el Oficial de Investigaciones no es un investigador de fraudes certificado, pero generalmente es un Contador Certificado.

⁸⁸ Véanse, por ejemplo, la observación de la Comisión para la Prevención de la Corrupción, que tiene iguales potestades que la Comisión de Integridad pero cuyo mandato consiste en recibir, examinar e investigar declaraciones de altos funcionarios públicos y ha solicitado que se le confiera la potestad de inspeccionar y sacar copias de registros para facilitar su propia labor, Informe Anual de la Comisión para la Prevención de la Corrupción, pág. 16, <http://www.cpcpd.gov.jm/sites/default/files/reports/CPC%20Annual%20Report%202012-2013.pdf>

de Integridad en cuanto a verificación del contenido de las declaraciones de funcionarios electos. El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 2.4.4 en la Sección 2.4 del Capítulo II del presente Informe)

[120] El Comité tiene presente además que durante la visita *in situ* los representantes de la Comisión de Integridad manifestaron que la presentación de documentos se basa en papel, es decir que no se archivan electrónicamente. Pese a que el tema de los sistemas de registro de ingresos, activos y pasivos fue examinado en la Primera Ronda y se formularon recomendaciones, el Estado analizado debería considerar la posibilidad de implementar un sistema electrónico para las declaraciones, de modo que se facilite su presentación y el proceso de examen y se contribuya a facilitar el análisis de la información proporcionada. El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 2.4.5 en la Sección 2.4 del Capítulo II del presente Informe)

[121] Con respecto al examen de las declaraciones, los representantes de la Comisión de Integridad explicaron el proceso. En esencia se realiza un examen del patrimonio neto declarado examinando la diferencia entre el total de los activos y el pasivo. La Comisión de Integridad examina luego ese patrimonio neto, que prepara el oficial investigador. Puede solicitarse información adicional en casos como aquellos en que se da un considerable incremento del patrimonio neto de un año a otro. Como se señaló en el informe de país correspondiente a Jamaica de la Primera Ronda de Análisis, aunque esas declaraciones se usan para detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito, no se utilizan para detectar y prevenir conflictos de intereses.⁸⁹ A ese respecto, el Comité observa que la legislación no parece contemplar la posibilidad de que los parlamentarios declaren sus intereses, tales como cargos en directorios de compañías o instituciones, particularidades de contratos que mantengan con el Estado o el nombre o la descripción de cualquier compañía, asociación o sociedad civil en que el parlamentario sea inversionista. A juicio del Comité el Estado analizado debería considerar la posibilidad de mantener un registro de intereses en que los parlamentarios aporten una lista de esos intereses, de carácter pecuniario o no pecuniario, que puedan parecer generadores de un conflicto entre los intereses privados de un parlamentario y sus obligaciones públicas. Ese registro puede ayudar a identificar esos posibles conflictos de intereses, que la Comisión de Integridad puede luego estar en condiciones de abordar mediante instrumentos apropiados, como el de exigir la creación de fideicomisos ciegos. El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 2.4.6 en la Sección 2.4 del Capítulo II del presente Informe)

[122] A ese respecto, el Comité señala que la Política Nacional de Seguridad de Jamaica, en su descripción de la corrupción de funcionarios electivos como riesgo claro y presente para el país, señala el perjuicio que sobreviene para el Estado analizado cuando existen estrechos vínculos entre un político y un contratista, en especial con respecto a los contratos de obras públicas.⁹⁰

[123] El Comité observa además que durante la visita *in situ* los representantes de la Comisión de Integridad manifestaron que la misma depende de la Oficina del Primer Ministro y sus propuestas presupuestarias también se presentan a través de esa Oficina. Además, los informes anuales de la Comisión de Integridad, que proporcionan detalles de sus funciones, se presentan a esa misma Oficina,

⁸⁹ El Estado analizado señala que durante la preparación del patrimonio, el funcionario a cargo de la investigación, si es necesario, solicitará información adicional tal como intereses en compañías/ instituciones, número y valor de acciones o montos invertidos por otra vía, tales como préstamos a directores, etc. Además, los parlamentarios tienen la obligación de formular una solicitud y declarar a la Cámara de Representantes detalles de cualquier contrato que hayan celebrado con el Estado durante su mandato. Se abre y mantiene un expediente para cada persona, y esa solicitud/contrato se remite también al Contratista General para su examen.

⁹⁰ Política Nacional de Seguridad de Jamaica, 2013, pág. 20, *supra* nota 78.

que luego hace presentar sendas copias a la Cámara de Representantes y al Senado. La Oficina del Primer Ministro determina asimismo el salario de los funcionarios de la Comisión, en un régimen conforme al cual ningún salario de más de setecientos cincuenta mil dólares podrá asignarse a ningún puesto sin previa aprobación de esa Oficina.⁹¹ Tal Oficina cumple además un papel importante en la designación y remoción de los Comisionados. El Comité observa que durante la visita *in situ* no hubo indicio alguno de que la autonomía de ese órgano de supervisión fuera un problema, dado el importante papel que cumple la Oficina del Primer Ministro en sus operaciones. No obstante, para reforzar la importante labor que cumple la Comisión de Integridad y ayudar a asegurar la integridad de esa labor, el Comité cree que el Estado analizado debería considerar la posibilidad de sancionar disposiciones que establezcan que ese órgano de supervisión, en el ejercicio de sus funciones en el marco de la Ley de Integridad de los Miembros) del Parlamento, no está sujeta al control o la dirección de ninguna persona o autoridad, en gran medida, tal como se expresa en la Ley del Contratista General, que establece expresamente la independencia del Contratista General.⁹² El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 2.4.7 del Capítulo II del presente Informe)

[124] Análogamente, el Comité observa que a diferencia de la Oficina del Contratista General, no existen disposiciones en vigor que indiquen en qué circunstancia las personas que integran la Comisión de Integridad pueden ser removidas de sus cargos como miembros de la misma o inhabilitados para actuar en esa oficina. El Primer Anexo de la Ley dispone únicamente que un miembro de la Comisión puede ser removido por el Gobernador General, tras la realización de consultas con el Primer Ministro y el Jefe de la Oposición. Por otra parte, se establece además que una recomendación de remoción tendrá en cuenta los alegatos presentados por un parlamentario que demuestren la causa por la que una persona no debe continuar siendo miembro de la Comisión. El Comité nota, sin embargo, que el Estado analizado puede considerar la posibilidad de sancionar disposiciones que establezcan los parámetros para la remoción de un nombramiento. Tales parámetros puede contribuir a dar transparencia sobre los fundamentos de una remoción. (Véase la Recomendación 2.4.8 en la Sección 2.4 del Capítulo II del presente Informe)

[125] En relación con respecto la sensibilización de los parlamentarios con respecto a sus obligaciones de proporcionar declaraciones (patrimoniales), el Comité señala que durante la visita *in situ* los representantes indicaron que se proporciona cierta capacitación a los parlamentarios sobre las responsabilidades que les impone la Ley. Observaron que el Presidente de la Cámara Baja realiza un seminario una vez por año, especialmente para nuevos miembros, en que participa el Secretario Administrador la Comisión de Integridad dando respuesta a preguntas. Además, en la Respuesta al Cuestionario, el Estado analizado señala que:⁹³

[126] *“El Director de Administración de las cámaras del Parlamento ha concertado reuniones con parlamentarios y se ha pedido a la Comisión de Integridad que haga una breve exposición sobre los requisitos previstos en la Ley (sobre Integridad de los Miembros) del Parlamento. Se sensibilizó a los parlamentarios sobre las disposiciones de la ley y se les recordaron sus obligaciones de completar sus declaraciones con exactitud y presentarlas puntualmente con los documentos de apoyo necesarios.”*

[127] Además, el Estado analizado nota que se realizan actividades de capacitación siempre y cuando sea necesario y que el Parlamento lleva a cabo asimismo sesiones de sensibilización sobre sus

⁹¹ Sección 13(2) del primer Anexo de la Ley de Integridad (de los Miembros) del Parlamento, *supra* nota 63.

⁹² Véase la sección 5 de la Ley del Contratista General, *supra* nota 3.

⁹³ Respuesta al Cuestionario, pág. 35, *supra* nota 7.

obligaciones previstas en la Ley. Además los parlamentarios acuden muy regularmente a la oficina de la Comisión para consultar la manera de llenar del mejor modo posible los formularios de sus declaraciones y la manera en que deben clasificarse sus respectivos activos.

[128] Sin embargo, el Comité señala que es difícil determinar si un programa de capacitación establecido por la Comisión de Integridad se realiza en forma permanente y de manera continua. El Comité observa que en el Informe Anual de la Comisión de Integridad correspondiente a 2010 no se hace mención a ningún programa de capacitación, del género que fuere, proporcionada a parlamentarios por ese órgano de supervisión. Y como la Comisión de Integridad no tiene un sitio web no resulta claro cómo pueden recibir los parlamentarios información adicional sobre sus responsabilidades conforme a la Ley. El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 2.4.9 en la Sección 2.4 del Capítulo II del presente Informe)

[129] A ese respecto el Comité señala que el Manual para Parlamentarios, que sirve de orientación para los parlamentarios y proporciona información básica sobre el Parlamento y sobre los privilegios y obligaciones de los parlamentarios y los beneficios y servicios que se les proporcionan durante su mandato, no contiene información sobre sus deberes y obligaciones con respecto a la presentación de declaraciones legalmente preceptivas, salvo una referencia al hecho de que los parlamentarios deben conocer la Ley (de Integridad de los Miembros) del Parlamento.⁹⁴

2.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas.

[130] El Estado analizado proporcionó durante la visita *in situ*, el siguiente cuadro estadístico, con respecto a la labor de la Comisión de Integridad:⁹⁵

DECLARACIONES PRECEPTUADAS POR LA LEY

	2008	2009	2010	2011	2012
Número de declaraciones preceptuadas por la ley	81	81	81	81	186 ⁹⁶
Declaraciones presentadas a más tardar en la fecha de expiración del plazo	53	52	61	63	119
Total de declaraciones presentadas para el ejercicio	73	80	102 ⁹⁷	81	185
Número de declaraciones examinadas y aceptadas	76	74	82	92	177
Número de personas denunciadas a la Fiscalía General	8	1	1	19	14
Número de personas llevadas a la Justicia	5	2	0	7	2

⁹⁴ Manual para Parlamentarios, pág. 6, http://japarlament.gov.jm/attachments/702_Handbook%20for%20Parliamentarians.pdf.pdf

⁹⁵ Comisión de Integridad: Resultados, http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_jam.htm

⁹⁶ Las personas tuvieron que presentar dos declaraciones debido a las elecciones generales, lo que está en consonancia con la Ley (de Integridad de los Miembros) del Parlamento.

⁹⁷ El exceso se debe a que algunos declarantes efectuaron declaraciones finales, en tanto que otras declaraciones corresponden a años anteriores.

[131] El Comité toma nota del número relativamente bajo de situaciones de cumplimiento, por los parlamentarios, de su obligación de presentar sus declaraciones dentro del plazo preceptuado por la ley. En el Informe Anual de 2010 la Comisión de Integridad manifestó su preocupación ante la elevada tasa de declaraciones incompletas proporcionadas por parlamentarios, que da lugar a correspondencia y pedidos de información innecesarios.⁹⁸ A ese respecto, el Comité observa que la sección 12 de la Ley (de Integridad de los Miembros) del Parlamento dispone que la Comisión informe del asunto a los líderes parlamentarios, que pueden derivar el informe al Comité de Privilegios de la Cámara de Representantes o del Senado. Además la sección 15 de la Ley dispone que la omisión en presentar una declaración a la Comisión se sanciona, previo trámite sumario declarativo de culpabilidad, con multa de no más de doscientos mil dólares y/o prisión por un término de no más de dos años. Esa sanción es de carácter penal, que puede requerir un largo proceso hasta que se llega a un resultado final en un caso. El Comité señala, por ejemplo, que en el Apéndice II del Informe Anual de 2010 aparece la lista de parlamentarios cuyas declaraciones seguían pendientes al 31 de diciembre de 2010 y fueron derivadas al Fiscal General para la adopción de medidas ulteriores. En su informe correspondiente a 2010 hay casos que involucran a parlamentarios a partir de 2002 y asuntos derivados al Fiscal General en 2003 aún pendientes a la fecha de dicho informe. Lo mismo sucedía con declaraciones pendientes correspondientes a 2006, 2007, 2008 y 2009, que en la mayoría de los casos se referían a la misma persona.⁹⁹

[132] Adicionalmente, la Ley dispone que los parlamentarios deben asimismo presentar una declaración final una vez que dejan el cargo, pero durante la visita *in situ* los representantes manifestaron que no es mucho lo que puede hacerse para que un ex parlamentario presente la declaración, especialmente en los casos en que deja el país. El Comité señala que esto puede dar lugar a casos de enriquecimiento ilícito no detectado.

[133] El Comité efectivamente observa que al parecer la mayoría de los parlamentarios en ejercicio con el tiempo presentan sus declaraciones en determinado año. No obstante, a juicio del Comité el Estado analizado puede considerar la posibilidad de conferir a la Comisión la potestad de imponer una sanción administrativa persuasiva por declaración tardía o falta de declaración, lo que puede servir como disuasivo y ayudar a la Comisión de Integridad a utilizar su tiempo y sus recursos para otros asuntos. Además, puede contribuir a alentar a los parlamentarios que dejen sus cargos a presentar sus declaraciones. El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 2.4.10 en la Sección 2.4 del Capítulo II del presente Informe)

[134] El Comité observa que la Comisión de Integridad ha derivado asuntos al Fiscal General por violaciones de la Ley y actos de corrupción, y que se han adoptado algunas medidas. No obstante, el número de personas llevadas a la justicia es bajo en comparación con el número de reenvíos efectuados. Se ha hecho referencia en la sección 1.2 a las preocupaciones de la Oficina del Contratista General con respecto a los casos de corrupción, lo que también afecta e influye sobre la labor de la Comisión de Integridad. Si la Fiscalía General no promueve procesamientos por actos de corrupción cometidos por altos funcionarios electos, como lo constata la Comisión de Integridad, esto va en detrimento de los esfuerzos realizados por el país para hacer frente a los problemas de seguridad identificados en la Política Nacional de Seguridad de 2014. El Comité reitera su recomendación con respecto a la falta de procesamientos promovidos por la Oficina del Director del Ministerio Público en la sección 1.2 del presente informe. (Véase la Recomendación 1.4.6 en la Sección 1.4 del Capítulo II del presente Informe)

⁹⁸ Informe Anual de 2010, pág. 7, *supra* nota 69.

⁹⁹ *Ídem*, pág. 11.

[135] Con respecto a este tema el Comité señala que en Jamaica existe la percepción de que no se adopta medida alguna para sancionar a altos funcionarios electos por supuestos actos de corrupción, incluso entre otros órganos de supervisión. Por ejemplo, en el Vigésimo Quinto Informe Anual de la OCG (2011) el Contratista General lamentaba lo muy poco que se escuchaba sobre arrestos y/o procesamientos por casos de corrupción de políticos y altos funcionarios públicos y sobre la falta de medidas sobre utilización de las disposiciones sobre enriquecimiento ilícito para combatir la corrupción, por ejemplo.¹⁰⁰

[136] Esto se señaló también en los comentarios formulados en la visita *in situ* por el representante del Colegio de Abogados de Jamaica, atinentes a que era sorprendente que durante décadas ningún funcionario de alta jerarquía hubiera sido procesado penalmente, con excepción de un ministro de Estado o parlamentario.

[137] Además, el Comité señala que toda acción realizada por la Fiscalía General depende de que el asunto le sea derivado por la Comisión de Integridad. Aunque el cuadro estadístico indica una significativa mejora para 2011 y 2012, en los años 2009 y 2010 sólo se derivó un asunto por año.¹⁰¹ A ese respecto, la Oficina del Contratista General, en su Vigésimo Quinto Informe Anual (2011) manifiesta que un representante de la Comisión de Integridad había admitido ante el Comité de Administración Pública y Apropiaciones Presupuestarias en octubre de 2011 que si bien parlamentarios habían incurrido en varias infracciones de la Ley de Integridad, la Comisión “*no había impulsado muy activamente los procesamientos, puesto que no había derivado los asuntos, como correspondía, al Director del Ministerio Público.*”¹⁰²

[138] A juicio del Comité el Estado analizado debería considerar la posibilidad de asegurar que la Comisión de Integridad, como corresponde, derive los asuntos pertinentes al Fiscal General, a fin de que puedan adoptarse medidas efectivas ante actos de corrupción detectados en que incurran parlamentarios. No hacerlo no puede menos que socavar la confianza en la importante labor que cumple ese órgano de supervisión. El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 2.4.11 en la Sección 2.4 del Capítulo II del presente Informe)

[139] Adicionalmente, con respecto a los actos de derivación de asuntos es difícil determinar si fueron hechas por casos en que se sospeche enriquecimiento ilícito o en que los parlamentarios no hayan presentado sus declaraciones o estén en omisión de proporcionar información a la Comisión de Integridad, por ejemplo para aclarar una declaración. Durante la visita *in situ* los representantes de ese órgano de supervisión manifestaron que esos procedimientos de derivación abarcan situaciones en que se comprobó enriquecimiento ilícito u omisión de proporcionar información para una derivación. Sería útil para el Estado analizado considerar en forma más detallada la posibilidad de proporcionar información o derivar asuntos para que el público pueda comprender mejor las razones por las que un asunto haya sido derivado al Fiscal General. El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 2.4.12 en la Sección 2.4 del Capítulo II del presente Informe)

¹⁰⁰ *Ídem*, pág. 34.

¹⁰¹ El Estado analizado señala que la Comisión ha procedido como lo dispone la Ley, es decir proporcionando información sobre los parlamentarios a las autoridades administrativas del Parlamento, y si no hay respuesta y tras enviar recordatorios, se da cuenta del asunto al Fiscal General. En este sentido, se informó ya sea por omisión de presentar las declaraciones legalmente obligatorias o de presentar información adicional que facilite la rápida culminación del examen de los documentos. Se informa sobre la situación de algunos de esos parlamentarios más de una vez durante el mismo año.

¹⁰² Vigésimo Quinto Informe Anual de la OCG (2011), pág. 49, *supra*, nota 32.

[140] En relación con este tema, el Estado analizado puede considerar la posibilidad de promover mecanismos de coordinación entre esos órganos de supervisión y la Fiscalía General. Como ésta posee competencia exclusiva para promover procesamientos penales, la existencia de canales abiertos de comunicación entre la Comisión de Integridad y dicha Oficina puede contribuir a facilitar su labor y conducir a procesamientos por corrupción y relacionados con corrupción. El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 2.4.13 en la Sección 2.4 del Capítulo II del presente Informe)

[141] Finalmente, el Comité señala que la información proporcionada en el cuadro estadístico no es de acceso público, con excepción de algunas cifras proporcionadas para el año 2010, en el único informe anual disponible en línea.¹⁰³ La inexistencia de un sitio web, como se señala en la sección 2.2 del presente informe, hace difícil disponer de este tipo de información. Otro problema, empero, es el hecho de que si bien la Comisión de Integridad ha presentado sus informes anuales correspondientes a 2011 y 2012 a la Oficina del Primer Ministro, esos informes no han sido presentados al Parlamento y por lo tanto no han sido puestos a disposición del público. A falta de acceso a esos informes, al Comité y al público en general les es difícil determinar la labor realizada por la Comisión de Integridad. En interés de la transparencia e integridad del sistema existente el Estado analizado debería hacer presentar y hacer públicos sin dilación esos informes, en especial teniendo en cuenta que se trata de la supervisión de altos funcionarios electivos y que tales informes identifican a los parlamentarios que no han cumplido sus obligaciones legales de presentar declaraciones. Además, deberían estar disponibles todos los informes anuales anteriores, y no únicamente la versión de 2010. El Comité formulará recomendaciones. (Véanse las Recomendaciones 2.4.14 y 2.4.15 en la Sección 2.4 del Capítulo II del presente Informe)

2.4. Conclusiones y recomendaciones.

[142] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la Comisión de Integridad en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[143] Jamaica ha considerado y adoptado medidas encaminadas a mantener y fortalecer la Comisión de Integridad como órgano de control superior, tal como se describe en la Sección 2 del Capítulo II del presente informe.

[144] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 2.4.1 Establecer un sitio “web” para la Comisión de Integridad. (Véase la sección 2.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 2.4.2 Establecer e implementar un programa de sensibilización para informar a las personas sobre la manera en que se pueden presentar denuncias a la Comisión de Integridad referentes a presuntos actos de corrupción cometidos por parlamentarios. (Véase la sección 2.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 2.4.3 Proporcionar a la Comisión de Integridad los recursos presupuestarios y humanos necesarios para el adecuado desempeño de su función, dentro de los límites de los recursos disponibles. (Véase la sección 2.2 del Capítulo II del presente Informe)

¹⁰³ Véase el Informe Anual correspondiente a 2010, págs. 6 – 7, *supra*, nota 69.

- 2.4.4 Conceder a la Comisión de Integridad la potestad de inspeccionar y sacar copias de todos los registros y documentos de departamentos y organismos del Gobierno, incluidos los de la Administración Tributaria de Jamaica. (Véase la sección 2.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 2.4.5 Establecer un sistema electrónico para la presentación de las declaraciones (patrimoniales) de los parlamentarios, (Véase la sección 2.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 2.4.6 Establecer un registro sobre declaraciones de intereses, para ayudar a identificar potenciales conflictos de intereses entre los intereses privados de los parlamentarios y sus obligaciones públicas. (Véase la sección 2.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 2.4.7 Considerar la posibilidad de sancionar disposiciones que establezcan que la Comisión de Integridad, en el ejercicio de sus funciones conforme a la Ley (de Integridad de los Miembros) del Parlamento, no está sujeta al control ni a la dirección de ninguna persona o autoridad. (Véase la sección 2.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 2.4.8 Considerar la posibilidad de sancionar disposiciones adicionales que establezcan las circunstancias para la remoción del nombramiento de un miembro de la Comisión de Integridad. (Véase la sección 2.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 2.4.9 Establecer un programa de capacitación por la Comisión de Integridad con el fin de asegurar que todos los parlamentarios reciban capacitación en forma permanente y continua, en cuanto a sus cometidos y obligaciones conforme a la Ley (de Integridad de los Miembros) del Parlamento, y asegurar la existencia de programas para concientizarlos al respecto. (Véase la sección 2.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 2.4.10 Considerar la posibilidad de otorgar a la Comisión de Integridad la potestad de imponer sanciones administrativas a un parlamentario por presentación tardía u omisión de presentar declaraciones (patrimoniales). (Véase la sección 2.3 del Capítulo II del presente Informe)
- 2.4.11 Asegurar que la Comisión de Integridad derive a la Fiscalía General los casos de corrupción de los parlamentarios de los que tenga conocimiento (Véase la sección 2.3 del Capítulo II del presente Informe)
- 2.4.12 Mantener información sobre resultados clasificados por categorías basadas en las razones por las que se han derivado asuntos a la Fiscalía General, en orden a identificar retos y recomendar medidas correctivas. (Véase la sección 2.3 del Capítulo II del presente Informe)
- 2.4.13 Establecer, como sea apropiado, un mecanismo o sistema de intercambio de información y coordinación entre la Comisión de Integridad y la Fiscalía General. (Véase la sección 2.3 del Capítulo II del presente Informe)

- 2.4.14 Asegurar que todos los informes anuales que hayan sido presentados a la Oficina del Primer Ministro se presenten oportunamente ante el Parlamento, para que puedan hacerse públicos. (Véase la sección 2.3 del Capítulo II del presente Informe)
- 2.4.15 Hacer de fácil acceso para la ciudadanía en general todos los informes anuales, anteriores y actuales, de la Comisión de Integridad. (Véase la sección 2.3 del Capítulo II del presente Informe)

3. LA COMISIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

3.1 Existencia de un marco jurídico y/o de otras medidas

[145] La Comisión para la Prevención de la Corrupción (CPC) cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[146] Con respecto a sus objetivos y al alcance de sus funciones, la sección 5(1) de la Ley sobre (Prevención de) la Corrupción dispone que la Comisión tiene el cometido de recibir y mantener registradas las declaraciones legales (patrimoniales) proporcionadas por funcionarios públicos, examinarlas, solicitar a esos funcionarios públicos cualquier información pertinente para esas declaraciones que pueda ser útil para los miembros de la Comisión en sus exámenes; realizar indagatorias e investigaciones independientes con respecto a esas declaraciones, y recibir e investigar cualquier denuncia contra un funcionario público referente a un acto de corrupción, e investigar por sí misma, por iniciativa propia, un acto de corrupción.¹⁰⁴ La CPC tiene también la potestad de convocar testigos, requerir la presentación de documentos y realizar toda actividad que considere necesaria o conveniente para el cumplimiento de sus funciones.¹⁰⁵

[147] La CPC no tiene la potestad de recibir y examinar las declaraciones (patrimoniales) legalmente preceptivas de los parlamentarios ni la de recibir y examinar, generalmente, las declaraciones (patrimoniales) legalmente preceptivas de los funcionarios públicos que perciban emolumentos por menos de J\$2 000 000 por año, si bien la sección 4(5A) de la Ley sí lo permite en algunas circunstancias.¹⁰⁶ Además, en la respuesta al cuestionario, el Estado analizado señala que a los

¹⁰⁴ Ley sobre (Prevención de) la Corrupción, http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_jam_prev.pdf. La expresión ‘funcionario público’ significa a) cualquier persona empleada en el servicio público, municipal o parroquial de Jamaica o en el servicios de un órgano o autoridad de creación legal o en un organismo público; b) la persona que sea un jerarca del Estado o de cualquiera de sus organismos, y c) una persona elegida, seleccionada o que tome parte de otro modo en el cumplimiento de una función pública. Por ‘función pública’ se entiende toda actividad cumplida en determinado momento o continuamente, con remuneración o sin ella, realizada por a) una persona para o en nombre o bajo la orientación de un Ministerio, Departamento o Gobierno, un órgano o autoridad de creación legal, un Consejo Parroquial, la Kingston and St. Andrew Corporation o una compañía del Estado; b) un órgano, público o privado, que preste servicios públicos, o c) un miembro de la Cámara de Representantes o del Senado en calidad de tal.

¹⁰⁵ Sección 5(2) de la Ley (de Prevención) de la Corrupción, *ídem*.

¹⁰⁶ Véase la sección 4(5*) de la Ley (de Prevención) de la Corrupción, *ídem*, que permite la Comisión a 1) solicitar declaraciones individuales legalmente preceptivas a personas que ganen menos de J\$2 000 000, y 2) solicitar declaraciones legalmente preceptivas de grupos de personas que ganen menos de J\$2 000 000 Una vez recibidas, esas declaraciones son examinadas conforme a las disposiciones contenidas en la Sección 5 de la Ley sobre Prevención de la Corrupción. Véase además la sección 3(1) del Reglamento (sobre Prevención) de la Corrupción, 2003, [http://www.cpcpd.gov.jm/sites/default/files/pdf/Corruption%20\(Prevention\)%20Regulations%202003.pdf](http://www.cpcpd.gov.jm/sites/default/files/pdf/Corruption%20(Prevention)%20Regulations%202003.pdf). La suma de J\$2 000 000 equivale aproximadamente a US \$18 100.

miembros de la Judicatura tampoco se les aplican las disposiciones de la Ley sobre (Prevención de) la Corrupción.¹⁰⁷

[148] La CPC es también la autoridad designada para el seguimiento del cumplimiento de la Ley de Divulgaciones Protegidas de 2011,¹⁰⁸ cuya finalidad consiste en alentar y facilitar la formulación de denuncias, por los funcionarios, en interés público; regular la recepción, investigación u otro tipo de tramitación de denuncias de irregularidades, y proteger a los empleados que formulen determinadas denuncias par que no sean objeto de detrimento laboral.¹⁰⁹ Como autoridad designada, es responsable de a) publicar directrices procesales sobre la formulación, recepción e investigación de denuncias; b) prestar asistencia a toda persona que sea un funcionario designado, empleador u otra persona sujeta a la Ley; c) implementar y realizar el seguimiento de programas de sensibilización pública encaminadas a informar y educar a empleados, empleadores y al público en general sobre la formulación de denuncias y los procedimientos de recepción e investigación de denuncias, y d) iniciar una investigación, hacerse cargo de una investigación ya iniciada o autorizar a un órgano a hacerse cargo en todo o en parte de investigaciones, entre otras funciones.¹¹⁰ Además, la Ley dispone que la CPC es la encargada de recibir asimismo denuncias de empleados, en ciertos casos.¹¹¹

[149] Con respecto a la manera en que se adoptan decisiones para el cumplimiento de sus funciones conforme a la sección 15 del Primer Anexo de la Ley, las decisiones adoptadas por la CPC deben contar con mayoría de votos de un quórum de no menos de tres miembros de la Comisión. El Presidente, además de tener voto original, tendrá también el voto decisorio en todo caso de igualdad de votos. Las decisiones de la CPC están sujetas a revisión judicial.

[150] Con respecto a la selección de los funcionarios superiores del cuerpo, los miembros de la CPC están constituidos por el Auditor General y otros cuatro miembros (denominados ‘miembros designados’), que son designados por el Gobernador General tras celebrar consultas con el Primer Ministro y el Jefe de la Oposición. Esos cuatro miembros son elegidos de las siguientes categorías de personas: i) miembros del Consejo Privado; ii) Jueces de Apelación jubilados o Jueces jubilados de la Corte Suprema; (iv) personas que a juicio del Gobernador General posean elevada integridad y estén en condiciones de ejercer competencia, diligencia y juicio fundado en el cumplimiento de los cometidos que les señala la Ley.¹¹²

[151] Los miembros designados ocupan sus cargos por un período de siete años y pueden ser reelectos. El Gobernador General designa a uno de esos miembros como Presidente de la CPC.¹¹³ Además, el Gobernador General, tras celebrar consultas con el Primer Ministro y el Jefe de la Oposición, puede en cualquier momento revocar la designación de cualquier miembro designado.

[152] Con respecto a la identificación de necesidades de recursos humanos y selección de personal, la sección 13 del Primer Anexo de la Ley dispone que la CPC designe y dé posesión de sus cargos a un Secretario y a los restantes altos funcionarios y empleados que considere necesarios para el debido

¹⁰⁷ Respuesta al Cuestionario, pág. 11, *supra* nota 7.

¹⁰⁸ Ley sobre Divulgaciones Protegidas, 2011,

<http://www.cpcpd.gov.jm/sites/default/files/pdf/The%20Protected%20Disclosures%20Act%202011.pdf>

¹⁰⁹ Sección 3, *ídem* En la sección 2 de la Ley aparecen las definiciones de ‘conducta impropia’, ‘empleados’, ‘conducta impropia’ y ‘detrimento ocupacional’.

¹¹⁰ Sección 21, *ídem*

¹¹¹ Sección 10, *ídem*

¹¹² Sección 1 del Primer Anexo de la Ley (de Prevención) de la Corrupción, *supra* nota 104.

¹¹³ Secciones 3 y 4 del primer Anexo, *ídem*

cumplimiento de sus cometidos. Además el Gobernador General puede aprobar la designación de cualquier alto funcionario al servicio del Gobierno para cualquier cargo con la CPC.

[153] Además, en la respuesta al cuestionario, el Estado analizado señala que todas las designaciones de funcionarios se basan en el mérito y requieren diversas calificaciones de educación y profesionales. Por otra parte, el personal es seleccionado sobre la base de anuncios publicados en la prensa, y tratándose de algunos funcionarios se realiza una entrevista a cargo del panel de miembros de la Comisión, quienes son responsables de ellos en cuanto al desempeño de sus cometidos. Los funcionarios prestan servicios durante términos/períodos fijos, pudiendo ser renovados por la Comisión, y su desempeño es evaluado anualmente.¹¹⁴ Con respecto a la creación de cargos y a la planificación de los recursos humanos, esa labor está a cargo de la Oficina del Gabinete. Durante la visita *in situ*, los representantes de la CPC manifestaron que la CPC tiene 23 funcionarios.

[154] Con respecto a la existencia de manuales o documentos en que se describan las funciones de personal y la capacitación, en su respuesta al cuestionario el Estado Analizado señala que ha implementado manuales y actividades de capacitación continua con respecto a todas las posiciones.¹¹⁵ Además, durante la visita *in situ*, los representantes de la CPC manifestaron que hay una descripción del cargo para cada posición, agregando que se proporciona capacitación en relación con análisis, investigación e incorporación de declaraciones, y que se han adoptado documentos de capacitación a ese respecto. En los cursos de capacitación llevados a cabo por el Ministerio de Seguridad Nacional participan también analistas, y también se proporciona capacitación regional. Los representantes de la CPC expresaron asimismo que se proporciona capacitación anualmente al personal de los organismos gubernamentales para que tengan presente su obligación de presentar declaraciones.

[155] Con respecto al uso de modernas tecnologías para facilitar su labor, los representantes de la Comisión de Integridad, durante la visita *in situ*, manifestaron que el órgano mantiene una base de datos de aproximadamente 30 000 declarantes que tienen la obligación de presentar declaraciones. Agregaron que consultan bases de datos de inmuebles, tributarios y de automotores para contribuir a verificar el contenido de una declaración.

[156] Con respecto a la manera en que se asegura la atención de necesidades presupuestarias, en su respuesta al cuestionario el Estado analizado señala que conforme a lo dispuesto en la sección 10 del Primer Anexo de la Ley sobre (Prevención de) la Corrupción son los fondos que el Parlamento de cuando en cuando ponga a su disposición a los efectos del cumplimiento de la Ley y cualesquiera otros fondos que se proporcionen a la Comisión conforme a la Ley¹¹⁶. Además la CPC debe presentar al Ministro de Justicia, con miras a su aprobación, antes del 31 de octubre del año, sus estimaciones de ingresos y gastos para el ejercicio financiero siguiente.¹¹⁷ A este respecto, durante la visita *in situ* los representantes de la CPC manifestaron que el presupuesto se elabora en la Secretaría y se remite al Ministro de Justicia para que sea reenviado al Ministro de Finanzas.

[157] En la Sección 11 del Primer Anexo de la Ley se dispone además que la CPC debe llevar cuentas adecuadas de sus recibos, pagos, activos y pasivos, y que esas cuentas deben ser auditadas

¹¹⁴ Respuesta al Cuestionario, pág. 11, *supra* nota 7.

¹¹⁵ *Ídem*

¹¹⁶ *Ídem*, pág. 12.

¹¹⁷ Primer Anexo de la Ley sobre (Prevención de) la Corrupción, sección 12(3), *supra* nota 104.

anualmente por un auditor designado cada año por la CPC, con la aprobación del Ministro de Justicia. Con respecto al presupuesto quinquenal aprobado, se señala lo siguiente:¹¹⁸

Año	Presupuesto (en dólares jamaicanos)
2010/2011	59 382 000
2011/2012	61 191 000
2012/2013	58 840 000
2013/2014	68 808 000
2014/2015	75 318 000

[158] Con respecto a los mecanismos de coordinación, la Ley dispone que si alguna persona falta a su obligación de proporcionar a la CPC una declaración conforme a lo estipulado por la Ley, o tras examinar cualquier información o documentos, o lleva a cabo una indagatoria de una declaración y considera insatisfactorio cualquier aspecto a la misma, debe poner el asunto en conocimiento de la Comisión, Junta, Órgano u otra Autoridad del Servicio y del Director del Ministerio Público, indicando los detalles y aspectos específicos pertinentes. Además la CPC debe denunciar a esas mismas entidades públicas cualquier acto de corrupción para que ellas puedan adoptar las medidas disciplinarias o promover otros procedimientos apropiados. Además, la CPC debe denunciar eventuales actos de corrupción a esas mismas reparticiones públicas, para que puedan adoptar las medidas disciplinarias que correspondan.¹¹⁹

[159] Con respecto a los mecanismos de coordinación previstos en la Ley de Divulgaciones Protegidas, de 2011, si en el curso de una investigación o finalizada la misma la CPC concluye que un jerarca o funcionario del organismo público respectivo ha incurrido en incumplimiento de una obligación o en irregularidades o delitos penales, la CPC debe derivar el asunto a la(s) persona(s) competente(s) para promover los procedimientos disciplinarios o de otro género que correspondan.¹²⁰

[160] Con respecto a los mecanismos de rendición de cuentas, la sección 12(1) del Primer Anexo de la Ley dispone que la Comisión debe presentar al Ministro de Justicia un informe anual relativo a las actividades que haya realizado en el ejercicio financiero precedente. Ese informe debe contener además un estado de sus cuentas auditadas. Esos informes anuales están disponibles en el sitio web

¹¹⁸ Comisión para la Prevención de la Corrupción: Presupuesto aprobado para el Quinquenio comprendido entre 2010/2011 y 2014/2015, http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_jam.htm

¹¹⁹ Ley sobre (Prevención de) la Corrupción, sección 12, *supra* note 104.

¹²⁰ Véase la sección 3(4) del Tercer Anexo de la Ley de Divulgaciones Públicas, 2011, *supra* nota 108.

de la CPC, en <http://cpcpd.gov.jm/reports>. Además, en la respuesta al cuestionario, el Estado analizado señala que se proporciona información al público en general mediante presentaciones al Parlamento de esos informes anuales y en sesiones de información solicitadas regularmente por organismos del Estado.¹²¹

[161] Además, el informe anual proporciona los datos de salarios y asignaciones para viajes para sus ejecutivos superiores (Secretario/Gerente y dos Analistas Financieros Superiores), así como las remuneraciones recibidas por los miembros de la CPC.¹²²

[162] Finalmente, en su carácter de autoridad designada conforme a la Ley de Divulgaciones Protegidas, de 2011, la CPC debe presentar al Ministro, dentro de los seis meses siguientes al cierre de cada ejercicio, un informe que se refiera, en general, a las actividades que haya realizado en el ejercicio precedente. Ese informe se pone a consideración de la Cámara de Representantes y del Senado.¹²³

3.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas.

[163] La Comisión para la Prevención de la Corrupción (CPC) tiene un conjunto de disposiciones y/o de otras medidas pertinentes para promover la consecución de los objetivos de la Convención, algunos de los cuales se describen sucintamente en la sección 3.1. No obstante, el Comité considera apropiado formular algunas observaciones con respecto a esas disposiciones y/o a otras medidas.

[164] El Comité primeramente toma nota del importante papel que cumple la Comisión para la Prevención de la Corrupción en las actividades encaminadas a hacer frente a la corrupción en Jamaica. Como se señaló en la sección 3.1, ese órgano de supervisión es responsable de recibir, examinar e investigar las declaraciones (patrimoniales) legalmente preceptivas que deben presentar los funcionarios públicos, así como recibir e investigar denuncias de actos de corrupción en que estos incurran. Además a ese órgano de supervisión se le ha encomendado la responsabilidad adicional de realizar el seguimiento de la observancia de la Ley de Divulgaciones Públicas de 2011 en lo referente a protección de denunciantes.

[165] El Comité observa asimismo que en la Política de Seguridad Nacional de Jamaica de 2013, que fue preparada por la Unidad de Coordinación de la Política de Seguridad Nacional (Oficina del Gabinete) y el Ministerio de Seguridad Nacional, uno de los peligros claros y presentes experimentados por Jamaica es la corrupción de los funcionarios públicos.¹²⁴ Ese peligro ha sido identificado como de Nivel 1, lo que significa que es de fuerte impacto, de alta probabilidad y que ha sido considerado como alta prioridad y requiere una respuesta activa.¹²⁵

[166] El Comité toma nota de que el Estado analizado ha presentado un proyecto de ley de Comisión de Integridad de 2014, que derogaría la Ley sobre (Prevención de) la Corrupción y crearía un único organismo anticorrupción, encargado de promover y reforzar los estándares de conducta ética, no sólo para los funcionarios públicos, sino también para los parlamentarios y otras personas.¹²⁶ Ese proyecto consolidaría leyes relativas a la prevención de la corrupción y a la adjudicación, el seguimiento y la

¹²¹ Respuesta al Cuestionario, pág. 12, *supra* nota 7.

¹²² Véase el Apéndice 1 del Informe Anual de 2012/2013 de la Comisión para la Prevención de la Corrupción, Remuneraciones de los Directores y de los Funcionarios Ejecutivos Superiores, págs. 40 – 41, *supra* nota 88.

¹²³ Ley de Divulgaciones Protegidas, 2011, secciones 21(4) y 21(5), *supra* nota 108.

¹²⁴ Política de Seguridad Nacional de Jamaica de 2013, pág. 15, *supra* nota 78.

¹²⁵ *Ídem*, pág. 4.

¹²⁶ Véase el Preámbulo de la Ley de la Comisión de Integridad de 2014, *supra* nota 34.

investigación de contratos gubernamentales y el otorgamiento de licencias preceptivas, y dispondría el establecimiento de un único órgano, una nueva Comisión de Integridad, para promover y fortalecer medidas de prevención, detección, investigación y procesamiento penal por actos de corrupción,¹²⁷ con lo cual fusionaría la Comisión para la Prevención de la Corrupción, la Comisión de Integridad, y la Oficina del Contratista General en un único organismo anticorrupción, medida que ha sido recomendada también por la Política de Seguridad Nacional arriba mencionada.¹²⁸

[167] Además, el Comité desearía destacar también lo siguiente, como se señaló en la Exposición de Objetivos y Fundamentos de dicho proyecto de ley:¹²⁹

[168] *“El actual régimen, previsto por la Ley sobre Prevención de la Corrupción y la Ley (de Integridad de los Miembros) del Parlamento, ha sido considerado inadecuado para la lucha contra la corrupción.”*

[169] El Comité observa además, que la creación en Jamaica de un único organismo anticorrupción le merece una consideración favorable, ya que contribuiría a eliminar la superposición y duplicación de recursos y a hacer frente a las fallas que se perciben en el actual marco institucional, que se considera desarticulado, fraccionado, sumamente ineficaz, ineficiente, insuficientemente dotado de recursos e inadecuado para combatir la corrupción.¹³⁰

[170] Teniendo en cuenta el importante papel que cumple la CPC en la detección de actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, la conclusión del Gobierno de Jamaica de que el régimen actualmente vigente, en especial el regido por la CPC, es inadecuado para hacer frente a la corrupción en Jamaica, y la necesidad de hacer frente al peligro claro y presente identificado en la Política Nacional de Seguridad de Jamaica de 2013, el Comité formula las siguientes observaciones para ayudar a fortalecer la labor de ese órgano de supervisión:

[171] El Comité toma nota de que para el ejercicio de 2012 el número de funcionarios públicos que deben presentar sendas declaraciones de activos, pasivos e ingresos es de treinta y un mil ciento treinta y dos (31. 132), cifra considerable para ingresar en su base de datos. Del gran número de declaraciones recibidas, 31 fueron examinadas, lo que arroja un total de 625 casos examinados hasta la fecha del último informe anual de la CPC. Significativamente, 28 de esos 31 casos fueron derivados para investigaciones adicionales, lo que hace un total de 350 casos que estaban sujetos a investigación por la CPC. Los principales temas de preocupación con respecto a esas declaraciones fueron los siguientes: adquisición de activos sin prueba de financiamiento; falta de declaración de activos, tales como inmuebles o automotores; omisión de la fuente de fondos; insuficiente información presentada sobre una declaración, en especial recepción de donaciones, y falta de declaración de intereses/ingresos empresariales.¹³¹

[172] El Comité observa que 31 exámenes, de un potencial conjunto de 31.132 declaraciones, es una cifra muy baja, que representa aproximadamente el 0,001% de las declaraciones presentadas. Ello puede obedecer a los recursos a disposición de la CPC. El Comité toma nota de que este órgano de supervisión cumple su labor con un personal de 23 funcionarios, 4 de los cuales son analistas financieros y 6 son investigadores financieros, que presumiblemente serían responsables de examinar esas declaraciones y

¹²⁷ *Ídem*

¹²⁸ Política de Seguridad Nacional de Jamaica de 2013, pág. 33, *supra* nota 78.

¹²⁹ Exposición de Objetivos y Fundamentos, pág. 67, *supra* nota 34.

¹³⁰ Véanse los comentarios del Contratista General en su Vigésimo Quinto Informe Anual (2011), pág. 41, *supra* nota 32.

¹³¹ 2012/2013 Informe Anual de la Comisión para la Prevención de la Corrupción, pág. 11, *supra* nota 88.

verificar su contenido.¹³² El Comité observa que en el pasado la CPC carecía de analistas e investigadores financieros que facilitaran su labor. Por ejemplo, en sus informes anuales correspondientes al período comprendido entre 2003 y 2006 la CPC señaló que su capacidad de realizar investigaciones de declaraciones se veía afectada por restricciones de personal y que se había remitido al Ministerio de Justicia una solicitud de designación de investigadores.¹³³ En 2007, disponiendo de un investigador se examinó una muestra de 104 declaraciones, labor realizada por dos analistas financieros y un investigador. Pese a disponer de menos analistas e investigadores, la CPC pudo examinar más del triple del número de declaraciones, no obstante disponer de la mitad del plantel con que actualmente cuenta. Posteriormente, en 2008, 2009, 2010 y 2011, el número de declaraciones examinadas fue de 105, 153, 110 y 46, respectivamente.¹³⁴

[173] El Comité también observa que la CPC, en 2012, fue designada como autoridad competente para realizar el seguimiento del cumplimiento de la Ley. Como se señala en la sección 3.1, desde 2012 es responsable de importantes asuntos que requieren fuerte disponibilidad de recursos, tales como proporcionar asistencia a cualquier persona que desee formular una denuncia y cualquier persona que sea un jerarca, empleador u otra persona sujeta a la ley; la ejecución y el seguimiento de programas de sensibilización pública encaminados a informar e instruir a empleados, empleadores y al público en general sobre la formulación de denuncias y sobre los procedimientos de recepción e investigación de denuncias, iniciación de una investigación y recepción de denuncias, inclusive de empleados en ciertos casos.¹³⁵

[174] Durante la visita *in situ*, los representantes de la CPC señalaron que se habían formulado solicitudes de incremento de su presupuesto para tener adecuadamente en cuenta esas nuevas responsabilidades, pero que no se había proporcionado apoyo para el ejercicio de 2013/2014.

[175] En virtud de lo que antecede, el Comité observa que el Estado analizado debería proporcionar a la CPC los recursos presupuestarios y humanos necesarios para el adecuado desempeño su función, dentro de los límites de los recursos disponibles. El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 3.4.1 en la Sección 3.4 del Capítulo II del presente Informe)

[176] En relación con lo que antecede, el Comité toma nota de que el régimen previsto en la Ley de Divulgaciones Protegidas de 2011 aún no ha sido implementado, pese a haber sido sancionado, a la fecha del presente informe hace 3 años, y a que la autoridad designada fue nombrada en 2012. El Comité observa que esa importante norma legislativa puede cumplir un papel importante en la lucha contra la corrupción mediante la implementación de un sistema por el cual los funcionarios públicos y los ciudadanos privados puedan denunciar actos de corrupción cometidos por los agentes públicos, así como poner en marcha mecanismos de protección de quienes en efecto denuncien. Como las responsabilidades de la CPC como autoridad designada aún no han terminado de implementarse, el Comité considera que sería útil considerar la adopción de un cronograma en que se establezcan prioridades, actividades que han de emprenderse, plazos para su ejecución y objetivos anuales que han de alcanzarse, así como publicar ese cronograma para que el público pueda valorar los esfuerzos realizados por la CPC para avanzar hacia

¹³² Véase el Informe Anual de la Comisión para la Prevención de la Corrupción, 2012/2013, pág. 5, *idem*, y la Estructura Orgánica de la Comisión para la Prevención de la Corrupción, http://cpcpd.gov.jm/sites/default/files/pdf/Organization_Chart.pdf

¹³³ Véase, por ejemplo, el Informe Anual de 2003 de la Comisión para la Prevención de la Corrupción, pág. 2, <http://cpcpd.gov.jm/sites/default/files/reports/CPC%20Annual%20Report%202003-2004.pdf>

¹³⁴ Estas cifras están disponibles en los informes anuales de la Comisión para la Prevención de la Corrupción, que están disponible en: <http://www.cpcpd.gov.jm/reports>

¹³⁵ Ley sobre Divulgaciones Protegidas, 2011, sección 10, *supra* nota 108.

el pleno cumplimiento de sus cometidos. El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 3.4.2 en la Sección 3.4 del Capítulo II del presente Informe)

[177] A este respecto, el Comité observa que la sección 25(1)(d) de la Ley de Divulgaciones Protegidas de 2011 dispone que el Ministro puede sancionar reglamentos en relación con las operaciones de la autoridad designada. El Comité considera que el Estado analizado debería considerar sancionar reglamentos con respecto al funcionamiento de la CPC como autoridad designada, estipulando asuntos tan fundamentales como la contratación de personal y la manera de proporcionarle recursos presupuestarios. La falta de esas disposiciones básicas sería una dificultad para que ese órgano pueda cumplir su mandato de supervisar la aplicación de esa ley. El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 3.4.3 en la Sección 3.4 del Capítulo II del presente Informe)

[178] Un paso que la CPC puede comenzar a realizar consiste en dar a conocer su labor como autoridad designada en su sitio web. El Comité observa que si bien dicho sitio contiene información sobre los cometidos del citado órgano en virtud de la Ley sobre (Prevención de) la Corrupción, carece de un componente con respecto a sus cometidos en virtud de la Ley de Divulgaciones Protegidas de 2011. El órgano de supervisión debería considerar la posibilidad de establecer un componente de ese tipo, que contenga, por ejemplo, información sobre los derechos que tiene un denunciante al formular una denuncia, la manera en que ésta debe ser presentada y las protecciones de que puede gozar. Además debería publicarse también el informe de sus actividades, que tiene obligación de presentar anualmente. Un hecho significativo es que uno de los mandatos de la CPC es publicar una directriz de procedimientos referentes a la elaboración, recepción e investigación de denuncias. El Comité, durante la visita *in situ*, recibió una copia de esas directrices, pero ellas no han sido aún publicadas en el sitio web de la CPC.¹³⁶ El Comité observa que el establecimiento de ese componente en su sitio web contribuiría al mandato de la CPC como autoridad designada en materia de planificación, ejecución y seguimiento de programas de sensibilización pública encaminados a informar y educar a empleados, empleadores y al público en general en Jamaica sobre la realización de denuncias protegidas y los procedimientos de recepción e investigación de las mismas.¹³⁷ El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 3.4.4 en la Sección 3.4 del Capítulo II del presente Informe)

[179] A este respecto, el Comité también toma nota de que al parecer no existe manera de que el público pueda presentar a la CPC una denuncia con respecto a un supuesto acto de corrupción que pueda cometer un funcionario público, como el de enriquecimiento ilícito, o para presentar una denuncia en el marco de la Ley de Divulgaciones Protegidas de 2011. El Comité cree que la información de contacto para la presentación de denuncias debería ser fácil y públicamente disponible, utilizando métodos similares a los del Contratista General, es decir en línea, a través de una línea telefónica de emergencia para denuncia de irregularidades, correo electrónico o haciendo posible la recepción de denuncias anónimas. El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 3.4.5 en la Sección 3.4 del Capítulo II del presente Informe)

[180] El Comité observa que durante la visita *in situ* los representantes de la CPC señalaron que se agregará una página web para recibir denuncias.

[181] Con respecto al uso de sistemas o tecnologías modernas para facilitar su labor, el Comité observa que durante la visita *in situ* los representantes de la CPC expresaron que ésta tenía acceso a bases de datos para facilitar la verificación del contenido de las declaraciones legalmente preceptivas, relativas a

¹³⁶ Directrices Procesales para la Ley de Divulgaciones Protegidas, 2011, http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_jam.htm

¹³⁷ Sección 21(3)(c) de la Ley de Divulgaciones Protegidas de 2011, *supra* nota 108.

propiedad de inmuebles, tributación, operaciones bancarias y automotores. No obstante, el Comité toma nota de que la CPC ha venido recomendando que la Ley sobre (Prevención de) la Corrupción sea enmendada para hacer posible que ese órgano de supervisión inspeccione y saque copias de registros y documentos en manos de departamentos y organismos de gobierno, incluyendo el acceso completo a la Administración Tributaria de Jamaica.¹³⁸ El Comité observa que conforme a la sección 5(2) de la Ley, la Comisión tiene la potestad de citar testigos, requerir la presentación de documentos y de hacer todo aquello que considere necesario o conveniente a los efectos del cumplimiento de sus funciones. No obstante, algunas informaciones pueden estar sujetas a requisitos de confidencialidad y no figurar en registros públicos.¹³⁹ En tales casos la capacidad de requerir la presentación de documentos puede ir en detrimento de la labor de la CPC de verificar el contenido de las declaraciones de funcionarios públicos. El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 3.4.6 en la Sección 3.4 del Capítulo II del presente Informe)

[182] El Comité observa asimismo que durante la visita *in situ* los representantes de la CPC manifestaron que la presentación de declaraciones se hace en papel; en otras palabras, que no se realiza electrónicamente. A esos efectos su Secretaría utiliza los servicios de 5 funcionarios de ingreso de datos.¹⁴⁰ Pese a que el tema de los sistemas de registro de ingresos, activos y pasivos fue examinado en la Primera Ronda y se formularon recomendaciones, El Estado analizado debería considerar la posibilidad de implementar un sistema electrónico para facilitar el proceso de presentación, lo que además facilitaría el examen de la información proporcionada, en especial por el hecho de que más de 30.000 declaraciones deben presentarse cada año. El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 3.4.7 en la Sección 3.4 del Capítulo II del presente Informe)

[183] Con respecto al examen de las declaraciones, como se señala en el informe de país correspondiente a Jamaica de la Primera Ronda de Análisis, aunque esas declaraciones se usan para detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito, no se usan para detectar y prevenir conflictos de intereses. A este respecto, el Comité observa que la legislación no contempla el hecho de que los funcionarios públicos declaren sus intereses, tales como, por ejemplo, la calidad de miembros de directorios en compañías u órganos instituciones, los detalles de contratos celebrados con el Estado, o el nombre o la descripción de cualquier compañía, asociación o sociedad en que el funcionario público sea inversionista. El Comité considera que el Estado analizado debería considerar la posibilidad de mantener un registro de intereses, en virtud del cual los funcionarios públicos proporcionarían una lista de esos intereses, pecuniarios o no pecuniarios, que parezcan suscitar un conflicto entre el interés privado de un funcionario público y sus obligaciones públicas. Ese registro puede ayudar a identificar esos posibles conflictos de intereses, que la CPC pueda entonces atender mediante instrumentos adecuados, tales como exigir la creación de fideicomisos ciegos. A este respecto el Comité observa que la CPC ha recomendado en sus informes anuales que los jerarcas y empleados del sector público no puedan realizar una labor que genere un conflicto de intereses con sus cometidos y obligaciones oficiales, y que se prevean sanciones para tales actividades.¹⁴¹ El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 3.4.8 en la Sección 3.4 del Capítulo II del presente Informe)

¹³⁸ El Estado analizado señala que se ha dado a la Comisión acceso electrónico a registros disponibles [excepto el del impuesto sobre la renta] de la Administración de Tributos de Jamaica.

¹³⁹ Véase, por ejemplo la observación de la Comisión para la Prevención de la Corrupción, en la página 16 del Informe Anual de 2012/2013 de dicha comisión, *supra* nota 88.

¹⁴⁰ Estructura Orgánica de la Comisión para la Prevención de la Corrupción, *supra* nota 132.

¹⁴¹ Véase, por ejemplo, la observación de la Comisión para la Prevención de la Corrupción, en las páginas 3 y 21 del Informe Anual de la Comisión para la Prevención de la Corrupción correspondiente a 2012/2013, *supra* nota 88.

[184] A este respecto, el Comité toma nota de que la Política de Seguridad Nacional para Jamaica, al describir a la corrupción de funcionarios electivos como un peligro claro y presente para el país, pone de manifiesto el daño que experimenta el Estado analizado cuando existen estrechos lazos entre funcionarios públicos y un contratista, especialmente en relación con contratos de obras públicas.¹⁴²

[185] El Comité observa asimismo que durante la visita *in situ* los representantes manifestaron que la CPC depende del Ministerio de Justicia y que sus propuestas presupuestarias se presentan también a través de ese ministerio. Además, los informes anuales del CPC, que proporcionan los detalles de sus funciones, se presentan al Ministro de Justicia, quien además determina el salario del personal de la Comisión, por cuanto ningún salario de más de setecientos cincuenta mil dólares puede asignarse a ningún cargo sin aprobación previa.¹⁴³ El Comité observa que durante la visita *in situ* los representantes de la CPC manifestaron que el Ministerio de Justicia no tenía influencia en los exámenes que realiza la Comisión y que las decisiones y operaciones de la misma son autónomas. No obstante, para reforzar la importante labor que lleva a cabo la CPC y contribuir a asegurar la integridad de esa labor, el Comité cree que el Estado analizado debería considerar la posibilidad de sancionar disposiciones que establezcan que ese órgano de supervisión, en el ejercicio de sus funciones en el marco de la Ley sobre (Prevención de) la Corrupción, no está sujeto al control o la orientación de ninguna persona o autoridad, muy a semejanza de lo que se establece en la Ley del Contratista General, que estipula expresamente la independencia del Contratista General.¹⁴⁴ El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 3.4.9 en la Sección 3.4 del Capítulo II del presente Informe)

[186] Análogamente, el Comité observa asimismo que, a diferencia de lo que ocurre con el Contratista General, no rigen disposiciones que indiquen en qué circunstancias las personas que constituyen la CPC pueden ser destituidas como miembros de la misma o inhabilitadas para ocupar ese cargo. El Primer Anexo de la Ley dispone únicamente que el Gobernador General, tras celebrar consultas con el Primer Ministro y el Jefe de la Oposición, puede remover al miembro de la Comisión. A juicio del Comité el Estado analizado puede considerar la posibilidad de sancionar disposiciones que proporcionen los parámetros para la destitución; por ejemplo que un miembro de la Comisión sea removido del cargo por padecer una dolencia corporal o mental o por cualquier otra causa; conducta impropia o un conflicto de intereses. También deberían establecerse parámetros de inhabilitación para ocupar un puesto; por ejemplo incumplimiento de las condiciones de rehabilitación de una quiebra, o procesamiento penal por un delito que suponga deshonestidad o falta de moralidad pública, como la prevista en las disposiciones contenidas en la Ley del Contratista General o el proyecto de ley de la Comisión de Integridad de 2014. Mediante el establecimiento de parámetros se puede contribuir a brindar transparencia sobre las causales de destitución o remoción e inhabilitación, e indicar a los miembros designados qué conductas pueden comprometer su elegibilidad como miembros de la Comisión. El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 3.4.10 en la Sección 3.4 del Capítulo II del presente Informe)

[187] Finalmente, una cuestión que puede afectar a la labor global de la CPC, tal como se identifica en sus informes anuales desde su surgimiento, es la obligación de presentar una declaración el 31 de diciembre de cada año, conforme a lo dispuesto por la sección 3(3) del Reglamento sobre (Prevención de) la Corrupción. No obstante, la CPC señala que la sección 4(5) de la Ley sobre (Prevención de) la Corrupción, que establece las oportunidades en que las declaraciones legalmente preceptuadas le han de ser presentadas, no contiene ese requisito referente a la presentación anual de una declaración. Por lo tanto, la opinión de la CPC es que la oportunidad preceptuada contenida en el Reglamento es ultra

¹⁴² Política de Seguridad Nacional de Jamaica de 2013, pág. 20, *supra* nota 78.

¹⁴³ Sección 13(1) del Primer Anexo de la Ley sobre (Prevención de) la Corrupción, *supra* nota 104.

¹⁴⁴ Véase la sección 5 de la Ley del Contratista General, *supra* nota 3.

vires.¹⁴⁵ Una disposición similar en la ley original fue suprimida por la Ley sobre (Prevención de) la Corrupción de 2002. El Comité cree que el Estado analizado debería considerar la posibilidad de enmendar la Ley para incluir el requisito anual de presentar una declaración o hacerlo además con la periodicidad que indique la Comisión. El Comité formulará una recomendación. (Véanse la Recomendación 3.4.11 en Sección 3.4 del Capítulo II del presente informe)

3.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas.

[188] En su Respuesta al Cuestionario, el Estado analizado proporciona la siguiente información con respecto a las campañas de divulgación pública tendientes a hacer públicas las consecuencias de la corrupción.¹⁴⁶

Campañas de educación pública		
2007	Organismo	No. de asistentes
Sept	4	55
Oct	10	138
Nov	8	136
Dic	22	329
	44	658
2008		
Ene	3	108
Feb	4	156
Mar	1	35
	8	299
2011		
Ene	2	75
Feb	9	320
Mar	4	81
	15	476
2013		
Ene	4	86
Feb	8	164
Mar	4	89
	16	339

[189] La CPC cumple un papel importante en materia de detección e investigación de actos de corrupción, y debería seguir llevando a cabo programas para sensibilizar a los funcionarios públicos sobre las obligaciones que les impone la Ley sobre (Prevención) de la Corrupción, de 2000, así como la Ley de Divulgaciones Protegidas de 2011. No obstante, el Comité toma nota de que esos programas de sensibilización parecen realizarse con carácter ad hoc y para un limitado número de funcionarios públicos, lo que puede deberse a la limitación de los recursos que se ponen a disposición de ese órgano

¹⁴⁵ Por ejemplo, véase el Informe Anual de 2012/2013, pág. 16, *supra* nota 88.

¹⁴⁶ Respuesta al Cuestionario, págs. 12 – 13, *supra* nota 7.

de supervisión. El Comité toma nota asimismo de que la descripción de esos programas no figura en los informes anuales ni en el sitio web de la CPC. El Comité considera que el Estado analizado debería seguir realizando esos programas de sensibilización, pero en forma ampliada, permanente, y que esas actividades, así como el contenido de esos programas, deberían darse a conocer públicamente, para que puedan llegar a una audiencia más amplia. El Comité formulará recomendaciones. (Véanse la Recomendaciones 3.4.12 y 3.4.13 en la Sección 3.4 del Capítulo II del presente Informe)

[190] El Comité desearía también llamar la atención sobre el cuadro estadístico siguiente, que aparece en el Informe Anual de la CPC correspondiente a 2012/2013, y que se refiere a la incidencia, históricamente alta, de las declaraciones (patrimoniales) pendientes:¹⁴⁷

Declaraciones legalmente preceptivas pendientes

Período de declaración	No. de declaraciones previstas	No. de declaraciones recibidas	Declaraciones pendientes	Porcentaje de declaraciones pendientes
31 de enero de 2003	14 705	12 819	1886	13%
31 de diciembre de 2003	14 705	11 020	3685	25%
31 de diciembre de 2004	17 228	12 870	4358	25%
31 de diciembre de 2005	14 104	9112	4992	35%
31 de diciembre de 2006	15 409	9185	6224	40%
31 de diciembre de 2007	20 684	12 789	7895	38%
31 de diciembre de 2008	23 447	13 090	10 357	44%
31 de diciembre de 2009	23 447	13 271	10 176	43%
31 de diciembre de 2010	24 389	15 034	9355	38%
31 de diciembre de 2011	25 040	14 788	10 252	41%
31 de diciembre de 2012	31 132	14 916	16 216	52%
Total	224 290	138 894	85 396	38%

[191] El Comité considera alarmante el alto número de funcionarios públicos que no han cumplido su obligación de presentar declaraciones, y cree que el Estado analizado debería considerar implementar medidas que garanticen que los funcionarios públicos presentarán sus declaraciones como lo exige la legislación jamaicana. Una de esas medidas puede consistir en hacer de esa obligación una de las condiciones para mantener un empleo en el servicio público. Otra medida que el Estado analizado puede considerar es la posibilidad de conferir a la CPC la potestad de imponer una sanción administrativa

¹⁴⁷ Informe Anual de la Comisión para la Prevención de la Corrupción correspondiente a 2012/2013, pág. 7, *supra* nota 88.

persuasiva por presentación tardía u omisión de presentar una declaración.¹⁴⁸ El Estado analizado puede también considerar examinar las sanciones actualmente vigentes, ya que al parecer no constituyen un disuasivo eficaz de la violación de la Ley. En la actualidad la sección 15(2) de la Ley dispone que la omisión de presentar una declaración a la CPC se sanciona, previo trámite sumario declarativo de culpabilidad, con multa de no más de doscientos mil dólares y/o prisión por un término de no más de dos años. El Comité formulará recomendaciones. (Véanse las Recomendaciones 3.4.14, 3.4.15 y 3.4.16 en la Sección 3.4 del Capítulo II del presente Informe)

[192] A este respecto, los representantes de “National Integrity Action” señalaron en la visita *in situ*, que si las multas son relativamente insignificantes como para que no constituyan un disuasivo eficaz, la reputación del sistema se desploma.

[193] El Comité observa asimismo que el número de exámenes llevados a cabo por la CPC con respecto de las declaraciones presentadas es muy exiguo. En el año 2012, por ejemplo, el número de declaraciones de activos, pasivos e ingresos recibidos fue de 14.916. De ese número de declaraciones recibidas se examinaron 31, lo que hace un total de 625 casos examinados desde la creación de la CPC hasta la fecha de su último informe anual.¹⁴⁹ El Comité observa que 31 exámenes, de un conjunto potencial de 14.916 declaraciones, constituye una cifra muy baja, que representa aproximadamente el 0,002% de las declaraciones presentadas, y si se incluyen todos los exámenes y declaraciones recibidas, 625 de 138.894, respectivamente, la proporción es del 0,004%. El Comité cree que el examen de un minúsculo número de declaraciones no proporciona un incentivo para que los funcionarios públicos declaren verazmente sus ingresos, activos y pasivos si, estadísticamente hablando, no se realiza un examen de sus declaraciones. Una razón del exiguo número de declaraciones es la escasez de recursos a disposición de la CPC. El Comité toma nota de que ese órgano de supervisión lleva a cabo su labor con un personal de 23 funcionarios, cuatro de los cuales son analistas financieros y seis son investigadores financieros, que presumiblemente se encargan de examinar esas declaraciones y verificar su contenido,¹⁵⁰ por lo cual supervisar un régimen que recibe más de 30.000 declaraciones por año será un desafío para cualquier órgano de supervisión con un número de funcionarios como el referido. Para contribuir a la capacidad de la CPC de realizar investigaciones de declaraciones y no verse afectado por restricciones presupuestarias y de personal, el Comité reitera su recomendación 3.4, formulada en la sección 3.2 del presente Informe, de que se proporcionen a este órgano de supervisión recursos presupuestarios y de personal adecuados para que pueda cumplir eficazmente su función. El Comité cree además que el Estado analizado debería también considerar incrementar el número de exámenes de declaraciones para poder disponer de un régimen eficaz que reduzca y prevenga la corrupción en el sector público. Esos exámenes son especialmente necesarios por el hecho de que de los 31 exámenes realizados, 28 fueron considerados deficientes, cifra que es significativamente alta y puede ser

¹⁴⁸ Los representantes de la CPC tomaron nota durante la visita *in situ* de que la Fuerza de Policía de Jamaica, que como organismo tiene un alto número de declaraciones pendientes, ha implementado una medida tendiente a aumentar el cumplimiento por sus miembros, al exigir prueba de observancia de los requisitos de la Ley (de Prevención) de la Corrupción, de 2000 antes de que esos miembros puedan ser recomendados para promoción y oportunidades de capacitación. Véase también la pág. 9 del Informe Anual de la Comisión para la Prevención de la Corrupción correspondiente a 2012/2013, *ídem*

¹⁴⁹ 2012/2013 Informe Anual de la Comisión para la Prevención de la Corrupción, pág. 11, *ídem*

¹⁵⁰ Véase el Informe Anual de la Comisión para la Prevención de la Corrupción correspondiente a 2012/2013, pág. 5, *ídem* y Estructura Orgánica de la Comisión para la Prevención de la Corrupción, http://cpcpd.gov.jm/sites/default/files/pdf/Organization_Chart.pdf

representativa de la calidad de la mayoría de las declaraciones presentadas.¹⁵¹ El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 3.4.17 en la Sección 3.4 del Capítulo II del presente Informe)

[194] A este respecto, durante la visita *in situ* el representante del Colegio de Abogados de Jamaica expresó la opinión de esa entidad de que se ignoraba la magnitud de las comprobaciones realizada con respecto a esas declaraciones, y manifestó que no tenía conocimiento de que persona alguna hubiera sido inculpada por ese motivo.

[195] El Estado analizado proporciona también el cuadro estadístico siguiente en su Respuesta al Cuestionario, en cuanto a las medidas adoptadas en los último cinco años para detectar casos de corrupción, hasta el 28 de noviembre de 2013:¹⁵²

Casos de incumplimiento	2009	2010	2011	2012	2013
Total de casos	487	512	555	619	764
Casos en trámite	16	13	4	12	
En etapa decisoria					
Derivados al Fiscal General	487	512	555	619	764
Cerrados: ningún acto ulterior	42	471	428	428	450
Multas	\$300.000,00	\$437.000,00	\$1.407.000,00	\$2.336.000,00	\$3.946.500,00

[196] El Comité toma nota de que esas cifras son acumulativas a medida que los años corren, y los casos derivados a la Fiscalía General son, por ejemplo, que los funcionarios públicos no han presentado sus declaraciones. El Comité observa, sin embargo, que el total de declaraciones pendientes (85.396) es enormemente mayor que el total de 764 casos derivados a la Fiscalía General desde el establecimiento de la CPC. Por otra parte, de esos 764 casos derivados a la Fiscalía General, ésta ha desechado 450, lo que hizo que la CPC lamentara en el pasado que el bajo número de infractores llevados a la justicia, así como el alto número de retiro de cargos, hubiera frustrado sus esfuerzos por reducir la corrupción.¹⁵³

[197] Además, el Comité cree que el extremadamente alto número de omisiones no sólo afecta la labor de la CPC, sino también la de la Fiscalía General. En la sección 1.2 del presente Informe se hace mención a las dificultades experimentada por la Oficina del Director del Ministerio Público para realizar su labor, haciéndose referencia a su falta de recursos y al considerable número de casos acumulados. Se señala que la CPC ha derivado 18 431 casos a la Oficina del Director del Ministerio Público para la adopción de medidas y actualmente está preparando un nuevo listado de atrasos para remitirlos a esa Oficina, lo que no puede menos que reducir los limitados recursos de que ésta dispone.¹⁵⁴

¹⁵¹ Informe Anual de la Comisión para la Prevención de la Corrupción correspondiente a 2012/2013, pág. 11, *idem*. Los temas que más preocupan con respecto a las declaraciones fueron los siguientes: adquisición de activos sin prueba del financiamiento; omisión de declarar activos, tales como inmuebles o automotores; omisión de declarar la fuente de fondos; insuficiente información presentada en una declaración; en especial la recepción de donaciones, y omisión de declarar intereses/ingresos empresariales.

¹⁵² *Ídem*, pág. 13.

¹⁵³ Véase el Informe Anual de la Comisión para la Prevención de la Corrupción correspondiente a 2009/2010, pág. 10 <http://www.cpcpd.gov.jm/sites/default/files/reports/CPC%20Annual%20Report%202009-2010.pdf>

¹⁵⁴ Informe Anual de la Comisión para la Prevención de la Corrupción correspondiente a 2012/2013, pág. 9, *supra* nota 88.

[198] El Comité observa asimismo que en el caso de que la CPC efectivamente ha detectado un problema de enriquecimiento ilícito lo ha derivado a la Fiscalía General para la adopción de medidas. En el Informe Anual de la CPC correspondiente a 2012/2013 se presenta el cuadro siguiente:¹⁵⁵

Casos investigados

Año	Número de casos denunciados al DMP	Número de casos llevados a la justicia	Resultados en la justicia	Número de casos a la espera de decisiones del DMP
2008/2009	2	-	-	2
2009/2010	2	2	2	-
2010/2011	4	1	1	3
2011/2012	2	-	-	2
2012/2013	8	1	1	7
Total	18	4	4	14

[199] Esos casos representan graves infracciones de la Ley sobre (Prevención de) la Corrupción, tales como enriquecimiento ilícito u omisión, sin causa justificada, de proporcionar esa información conforme a lo requerido por la CPC en relación con una declaración legalmente preceptiva. Como surge del cuadro, de los 18 casos denunciados, 14 aún están a la espera de decisiones de la Fiscalía General. En consecuencia, sólo 4 casos referentes a graves infracciones de la Ley han llegado a la órbita judicial desde la creación de la CPC, en 2003.

[200] El Comité observa que la cifra de casos llegados a la justicia es baja en comparación con el número de casos denunciados a la Fiscalía General. En la sección 1.2 se hizo referencia a las preocupaciones de la Oficina del Contratista General con respecto al bajo número de procesamiento penales promovidos por la Fiscalía General por casos de corrupción, que también afectan a la labor de la CPC y revisten importancia para la misma. Si la Fiscalía General no promueve procesamiento por actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos se ven afectados los esfuerzos realizados por el Estado analizado para hacer frente a los problemas de seguridad identificados en la Política de Seguridad Nacional de 2013. El Comité reitera la recomendación que formuló en la sección 1.2 del presente Informe con respecto a la falta de procesamiento promovidos por la Fiscalía General. (Véase la Recomendación 1.4.6 en la Sección 1.4 del Capítulo II del presente Informe)

[201] A este respecto, los representantes de “National Integrity Action” expresaron en la visita *in situ* su preocupación sobre el hecho de que de 18 graves infracciones de la Ley sobre (Prevención de) la Corrupción derivados a la Fiscalía General, sólo 4 llegaron a los tribunales.

[202] En relación con este tema el Estado analizado puede considerar la posibilidad de promover mecanismos de coordinación entre esos órganos de supervisión y la Fiscalía General. Como ésta tiene competencia exclusiva en materia de promoción de procesamiento penales, la existencia de canales abiertos de comunicación entre la CPC y dicha Oficina puede contribuir a facilitar su labor y dar lugar a procesamiento por delitos de corrupción y relacionados con corrupción. El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 3.4.18 en la Sección 3.4 del Capítulo II del presente Informe)

¹⁵⁵ *Ídem*, pág. 15.

[203] El Comité también observa que la CPC actualiza su base de datos sobre las personas que deben presentar declaraciones formulando una solicitud anual a los organismos del sector público para que actualicen la lista de personas a las que la ley impone la obligación de presentar declaraciones de activos, pasivos e ingresos, y las respuestas recibidas. El Comité observa que la CPC nunca recibió respuesta de 130 de 176 entidades.¹⁵⁶ En el Informe Anual de la CPC correspondiente a 2003 el órgano de supervisión manifestó lo siguiente, que sigue siendo pertinente, con respecto a los obstáculos con que ha tropezado para determinar cuántos funcionarios públicos tienen la obligación de presentar sus declaraciones:¹⁵⁷

[204] *“La labor de la Comisión para establecer la base de datos se vio dificultada asimismo por el hecho de que no existe un organismo central del Servicio Público del que pueda obtenerse toda la información pertinente sobre los funcionarios públicos, y la mayoría de los organismos no han proporcionado datos actualizados ni informado a la Comisión sobre ningún cambio que sea necesario introducir en la estructura del personal. Ello a su vez ha generado problemas para establecer si la lista de omisiones es completa.”*

[205] El Comité considera que el Estado analizado debería establecer una base de datos centralizada de organismos del servicio público que contenga una lista completa y actualizada de funcionarios públicos que deban presentar declaraciones (patrimoniales) legalmente preceptivas, a la que pueda tener acceso la Comisión para la Prevención de la Corrupción. El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 3.4.19 en la Sección 3.4 del Capítulo II del presente Informe)

3.4. Conclusiones y recomendaciones.

[206] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la Comisión para la Prevención de la Corrupción en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[207] **Jamaica ha considerado y adoptado medidas encaminadas a mantener y fortalecer la Comisión para la Prevención de la Corrupción como órgano de control superior, tal como se describe en la Sección 3 del Capítulo II del presente informe.**

[208] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 3.4.1 Proporcionar a la Comisión para la Prevención de la Corrupción los recursos presupuestarios y humanos necesarios para el adecuado desempeño de su función, dentro de los límites de los recursos disponibles. (Véase la sección 3.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 3.4.2 Adoptar un cronograma para la implementación, por parte de la Comisión para la Prevención de la Corrupción, de las funciones que se le atribuyen como autoridad designada en el marco de la Ley de Divulgaciones Protegidas de 2011, estableciendo prioridades, medidas que hayan de realizarse, plazos para ejecutarlas y objetivos anuales que han de alcanzarse, y difundir ese programa para que el público pueda valorar los esfuerzos de la Comisión encaminados a avanzar hacia el pleno ejercicio de sus funciones. (Véase la sección 3.2 del Capítulo II del presente Informe)

¹⁵⁶ *Ídem*, pág. 11.

¹⁵⁷ Informe Anual de la Comisión para la Prevención de la Corrupción, 2003, pág. 9, <http://www.cpcpd.gov.jm/sites/default/files/reports/CPC%20Annual%20Report%202003-2004.pdf>

- 3.4.3 Considerar la posibilidad de sancionar reglamentos en relación con las operaciones de la Comisión para la Prevención de la Corrupción, como autoridad designada en el marco de la Ley de Divulgaciones Protegidas de 2011. (Véase la sección 3.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 3.4.4 Establecer en el sitio web de la Comisión para la Prevención de la Corrupción un componente que establezca sus cometidos como autoridad designada conforme a la Ley de Divulgaciones Protegidas de 2011, que contenga información, por ejemplo, sobre los derechos de las personas que formulen denuncias, la manera en que estas puedan formularse y los mecanismos de protección que pueden proporcionarse. (Véase la sección 3.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 3.4.5 Establecer un mecanismo por el cual las personas puedan presentar denuncias con respecto a actos de corrupción en que incurran funcionarios públicos y para presentar denuncias en el marco de la Ley de Divulgaciones Protegidas de 2011. (Véase la sección 3.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 3.4.6 Conferir a la Comisión para la Prevención de la Corrupción la potestad de inspeccionar y sacar copias de todos los registros y documentos de departamentos y organismos de Gobierno, incluyendo el acceso completo a la Administración Tributaria de Jamaica. (Véase la sección 3.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 3.4.7 Implementar un sistema electrónico de presentación de declaraciones (patrimoniales) por los funcionarios públicos. (Véase la sección 3.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 3.4.8 Implementar un registro sobre declaraciones de intereses, para facilitar la identificación de potenciales conflictos de intereses entre los intereses privados de un funcionario público y sus obligaciones públicas. (Véase la sección 3.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 3.4.9 Considerar la posibilidad de sancionar disposiciones que establezcan que la Comisión para la Prevención de la Corrupción, en el ejercicio de sus funciones en el marco de la Ley sobre (Prevención de) la Corrupción no está sujeta al control o la orientación de ninguna persona o autoridad. (Véase la sección 3.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 3.4.10 Considerar la posibilidad de sancionar disposiciones que establezcan las circunstancias en que los miembros designados para integrar la Comisión para la Prevención de la Corrupción pueden ser removidos o destituidos de sus cargos, así como los parámetros de las inhabilidades para dichos cargos. (Véase la sección 3.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 3.4.11 Considerar la posibilidad de enmendar la Ley sobre (Prevención de) la Corrupción para establecer el requisito de que los funcionarios públicos deban presentar una declaración conforme a la ley el 31 de diciembre de cada año o a los intervalos que la Comisión para la Prevención de la Corrupción indique. (Véase la sección 3.2 del Capítulo II del presente informe)

- 3.4.12 Aumentar e implementar programas de difusión para concientizar a los servidores públicos y al público en general acerca de las obligaciones de los servidores públicos previstas en la Ley sobre (Prevención de) la Corrupción y en la Ley de Divulgaciones Protegidas de 2011. (Véase la sección 3.3 del Capítulo II del presente Informe)
- 3.4.13 Incluir información detallada sobre las campañas de educación pública en los informes anuales de la Comisión para la Prevención de la Corrupción. (Véase la sección 3.3 del Capítulo II del presente Informe)
- 3.4.14 Establecer como condición para mantener un empleo en el servicio público la presentación de la declaración (patrimonial) preceptiva requerida en la Ley sobre (Prevención de) la Corrupción. (Véase la sección 3.3 del Capítulo II del presente Informe)
- 3.4.15 Considerar la posibilidad de conferir a la Comisión para la Prevención de la Corrupción la potestad de imponer sanciones administrativas por presentación tardía u omisión de presentar declaraciones por un funcionario público. (Véase la sección 3.3 del Capítulo II del presente Informe)
- 3.4.16 Considerar la posibilidad de actualizar las sanciones vigentes por infracción de la Ley sobre (Prevención de) la Corrupción, para que ellas constituyan un disuasivo eficaz. (Véase la sección 3.3 del Capítulo II del presente Informe)
- 3.4.17 Aumentar el número de exámenes de declaraciones (patrimoniales) legalmente preceptivas por parte la Comisión para la Prevención de la Corrupción. (Véase la sección 3.3 del Capítulo II del presente Informe)
- 3.4.18 Establecer, como sea apropiado, un mecanismo o régimen de intercambio de información y coordinación entre la Comisión para la Prevención de la Corrupción y la Fiscalía General. (Véase la sección 3.3 del Capítulo II del presente Informe)
- 3.4.19 Establecer una base de datos centralizada de organismos del servicio público que contenga una lista completa y actualizada de funcionarios públicos que deban presentar declaraciones (patrimoniales) legalmente preceptivas, a la que pueda tener acceso la Comisión para la Prevención de la Corrupción. (Véase la sección 3.3 del Capítulo II del presente Informe)

4. DEPARTAMENTO DEL AUDITOR GENERAL

4.1 Existencia de un marco jurídico y/o de otras medidas

[209] La Oficina del Auditor General cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico, y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[210] Con respecto a sus objetivos y al alcance de sus funciones, la sección 122(1) de la Constitución de Jamaica establece que el Auditor General debe auditar, e informar por lo menos una vez por año, sobre las cuentas de la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, las oficinas administrativas del Senado y

de la Cámara de Representantes y las cuentas de todos los departamentos y oficinas del Gobierno de Jamaica, incluidas las oficinas del Gabinete, la Comisión del Servicio Judicial, la Comisión del Servicio Público y la Comisión del Servicio Policial.¹⁵⁸ Además, la sección 122(5) confiere al Auditor General la potestad de cumplir esas funciones en relación con las cuentas del Gobierno de Jamaica y las de otras autoridades públicas y otros órganos que administran fondos públicos en Jamaica, conforme a lo preceptuado por, o en virtud de, cualquier ley vigente en Jamaica; o de cumplir cualesquiera otras funciones relativas a la supervisión y al control del gasto de fondos públicos en Jamaica que se le hayan encomendado, o relativas a cualquier otro gobierno que le haya encomendado cumplir en su nombre cualquier potestad en esa materia. Como se expresa en la Respuesta al Cuestionario, el Estado analizado sostiene que no existe ninguna disposición legal que limite el derecho del Auditor General de auditar los libros de todos los Ministerios, Departamentos y organismos of Gobierno.¹⁵⁹

[211] La Ley de Administración Financiera dispone también, en la sección 25, que el Auditor General, en el cumplimiento de sus funciones conforme a la sección 122(1) de la Constitución, debe verificar, entre otras cosas, a) que las cuentas a las que se hace referencia en esa sección se mantengan en forma fidedigna y adecuada; b) que las normas y los procedimientos aplicados sean suficientes para garantizar una fiscalización efectiva del avalúo, la recaudación y la adecuada asignación del ingreso correspondiente a otras fuentes fiscales; c) que todas la sumas gastadas y cargadas a una cuenta de apropiación hayan sido aplicadas a los fines para los cuales estaban destinadas conforme a disposiciones adoptadas por el Parlamento y que todo pago de dineros públicos se adecue a las potestades de la autoridad que lo rige, y que se ha incurrido en ese gasto observando debidamente la obligación de evitar el derroche y la extravagancia; d) que se mantengan los registros esenciales y que las normas y los procedimientos estructurados y aplicados sean suficientes para salvaguardar el control de los bienes públicos; e) que el Gobierno haya cumplido esas y otras disposiciones legales relativas a la administración de dineros públicos, y f) que se hayan establecido procedimientos satisfactorios para medir la eficacia de los programas y servicios, y se informe sobre los mismos.¹⁶⁰

[212] Al Auditor General le está prohibido, en cambio, auditar las cuentas de su Departamento, conforme a lo dispuesto por la sección 122(4) de la Constitución, pues la auditoria y el suministro de informes sobre las mismas están a cargo del Ministro competente en materia de finanzas.

[213] Conforme a la sección 122(3) de la Constitución, el Auditor General, en el ejercicio de sus funciones, no está sujeto a directrices ni al control de ninguna persona o autoridad.

[214] La sección 122(1) dispone asimismo que en el cumplimiento de sus cometidos el Auditor General tendrá acceso a todos los libros, registros, declaraciones e informes relativos a las cuentas. La sección 25(3) de la Ley de Administración Financiera y Auditoría amplía las potestades del Auditor General a ese respecto. Por ejemplo, para el examen de cualquier cuenta el Auditor General tiene derecho de acceso a todos los libros, registros, comprobantes, documentos, declaraciones, informes, dispositivos de almacenamiento de información, efectivo, impresión, valores, depósitos u otros bienes del Gobierno que estén en posesión de cualquier autoridad; puede solicitar por escrito y obtener la custodia, de cualesquiera libros, cuentas, comprobantes o documentos que estén bajo el control de cualquier autoridad relativos a las cuentas públicas, y de convocar a cualquier jerarca para que proporcione cualesquiera explicaciones e información.

¹⁵⁸ Constitución de Jamaica, http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_jam_council.pdf

¹⁵⁹ Respuesta al Cuestionario, pág. 15, *supra* nota 7.

¹⁶⁰ Ley de Administración Financiera y Auditoría, http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_jam_finan.pdf

[215] La sección 120(1) dispone que el Auditor General es designado por el Gobernador General, previa recomendación de la Comisión del Servicio Público.¹⁶¹ La sección 121(3) de la Constitución dispone además que el Auditor General sólo puede ser separado del cargo por incapacidad para el desempeño de sus funciones resultante de enfermedad mental o corporal o cualquier otra causa, o por incurrir en irregularidades. Además, la sección 121(4) dispone que el Auditor General sólo puede ser removido de su cargo por el Gobernador General si las causales de remoción han sido puestas a consideración de un tribunal y éste ha recomendado al Gobernador General la remoción del Auditor General de su cargo por las causales de incapacidad arriba mencionadas o por haber incurrido en irregularidades.

[216] Con respecto a los funcionarios de la Oficina del Auditor General, los mismos son considerados funcionarios públicos y están sujetos a las Órdenes para el Personal del Servicio Público.¹⁶² En tal carácter, la entidad responsable de la designación, remoción y ejercicio del control disciplinario sobre esos funcionarios es la Oficina de la Comisión del Servicio Público. El Estado analizado, en su Respuesta al Cuestionario, señala que el Auditor General ha delegado cometidos en materia de sus recursos humanos y puede designar funcionarios de cierto nivel, pero los nombramientos de personal superior son realizados por la Comisión del Servicio Público, y esos jerarcas están sujetos al Código de Conducta contenido en las Órdenes para el Personal del Servicio Público, así como en su régimen disciplinario.¹⁶³ Como a la Oficina del Auditor General se le han conferido atribuciones delegadas en relación con sus recursos humanos, esas funciones incluyen designaciones, destituciones, aplicación de normas disciplinarias y capacitación. A ese respecto la Oficina ha elaborado un Manual de Políticas y Procedimientos de Administración de Recursos Humanos¹⁶⁴

[217] Además, en su Respuesta al Cuestionario, el Estado analizado expresa lo siguiente sobre la contratación de personal:¹⁶⁵

[218] *“El Departamento tiene el cometido de contratar personal para llenar las vacantes que existan en el sistema del servicio público. Las vacantes se anuncian en la esfera interna y externa y la selección se basa en concursos basados en el mérito. Existen descripciones específicas para cada puesto; en ellas se reseñan los requisitos de competencia, calificación y experiencia. Las Órdenes para el Personal del Servicio Público prescriben el régimen de descalificación de empleados.”*

[219] Con respecto a la existencia de manuales o documentos de cumplimiento de tareas y descripción de funciones el Estado analizado, en su Respuesta al Cuestionario, manifiesta que el Departamento del Auditor General tiene manuales específicos para cada unidad operativa, incluidos manuales de auditoría, cuentas y recursos humanos¹⁶⁶ A ese respecto el Comité toma nota de que el Estado analizado proporcionó un Manual de Procedimientos de Auditoría y un Manual de Políticas y Procedimientos de Recursos Humanos y Administración.¹⁶⁷

¹⁶¹ En la Sección 121(1) se dispone además que el Auditor General se mantendrá en su cargo hasta cumplir los sesenta años de edad, o sesenta y cinco si lo recomienda la Comisión del Servicio Público. Además, la sección 120(3) dispone que el titular de la Oficina del Auditor General no es elegible para ocupar ningún otro cargo público.

¹⁶² Órdenes para el Personal del Servicio Público, <http://jis.gov.jm/media/revisedStaffOrders.pdf>

¹⁶³ Respuesta al Cuestionario, pág. 16, *supra* nota 7.

¹⁶⁴ Departamento del Auditor General, Manual de Procedimientos y Políticas de Recursos Humanos y Administración, http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_jam.htm

¹⁶⁵ Respuesta al Cuestionario, pág. 17, *supra* nota 7.

¹⁶⁶ *Ídem*.

¹⁶⁷ Ambos están disponibles en http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_jam.htm.

[220] Se establece además un programa de capacitación que ofrece diversos cursos de ese género para funcionarios a lo largo de todo el año.¹⁶⁸ Esa labor se realiza en la esfera interna y en la externa. A ese respecto, el Apéndice 9 del Informe Anual del Auditor General correspondiente a 2012/2013 reseña la labor de capacitación realizada durante el año, así como el programa de capacitación planificado para 2014.¹⁶⁹ Además, durante la visita *in situ* los representantes señalaron que existe un presupuesto para prestación de servicios de capacitación, que incluye capacitación de aula y trabajo de campo. Se mencionó también la asistencia proporcionada por entidades financieras internacionales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, en materia de capacitación.

[221] En cuanto a la existencia de procedimientos documentados para el cumplimiento de sus cometidos, el Estado analizado manifiesta que el Manual de Procedimientos de Auditoría establece las políticas y los procedimientos relativos a todos los aspectos de la función de auditoría; facilita la preparación y presentación de estados financieros e informes de auditoría precisos, oportunos y confiables; asegura la aplicación sistemática de políticas y facilita la capacitación del personal en materia de procedimientos de auditoría, entre otras cosas.¹⁷⁰ Además, las auditorías deben realizarse en observancia de normas internacionales, como las promulgadas por la Organización Internacional de Instituciones Supremas de Auditoría, así como las Normas Internacionales de Auditoría.¹⁷¹

[222] Adicionalmente, en su Respuesta al Cuestionario el Estado analizado manifiesta que el Departamento contrató recientemente el suministro de una serie de programas de auditoría para automatizar el proceso de auditoría, y que como parte de esa iniciativa está automatizando el proceso de registro.¹⁷² Como se señala en el Informe Anual del Auditor General correspondiente a 2012/2013:¹⁷³

[223] *“En consonancia con las estrategias de formación de capacidad, el AuGD [Departamento del Auditor General] adquirió los equipos y programas necesarios para hacer posible la automatización de la totalidad del proceso de auditoría para mejorar la gestión de la información, con la meta última de una transición a un sistema sin uso de papel. Se ha previsto que la implementación total del sistema tenga lugar en 2014.”*

[224] Con respecto a la manera en que se proporciona información al público en general sobre sus objetivos y funciones, los informes del Departamento del Auditor General, incluidos los informes anuales, los de desempeño y los informes especiales, se publican en el sitio web del Auditor General, en www.auditoriaorgeneral.gov.jm/reports. En ese sitio se presenta, además, el papel y la función del Departamento, su mandato, información institucional, y la explicación del proceso de auditoría. Finalmente, también se proporciona información de contacto para el público en general, tal como dirección postal, números de teléfono y fax y correo electrónico, y se brinda la posibilidad de remitir un formulario electrónico de contacto. El Estado analizado, en su Respuesta al Cuestionario, señala que la oficina cuenta con un funcionario designado que maneja toda la interrelación con el público y las preguntas y pedidos de información.¹⁷⁴

¹⁶⁸ Respuesta al Cuestionario, pág. 17, *supra* nota 7.

¹⁶⁹ Informe Anual del Auditor General correspondiente a 2012/2013, Apéndice 9, Capacitación realizada durante el año, pág. 138, http://www.auditoriaorgeneral.gov.jm/files/u5/AGD_ANNUAL_REPORT_2013.pdf

¹⁷⁰ Manual de Procedimiento de Auditoría, pág. 5, *supra* nota 164.

¹⁷¹ Véase Proceso de Auditoría, Departamento del Auditor General de Jamaica, <http://www.auditorgeneral.gov.jm/audit-process-of-auditor-genreal-jamaica>

¹⁷² Respuesta al Cuestionario, pág. 17, *supra* nota 7.

¹⁷³ Informe Anual del Auditor General correspondiente a 2012/2013, pág. 5, *supra* nota 169.

¹⁷⁴ Respuesta al Cuestionario, pág. 17, *supra* nota 7.

[225] En cuanto a mecanismos de control interno referentes a reclamaciones, quejas y denuncias, el Estado analizado, en su Respuesta al Cuestionario, manifiesta que esos mecanismos están detallados en el manual de auditoría del Departamento, y que en un proyecto de estructura de ese Departamento se incluirá una unidad de garantía de calidad, que tendrá cometidos específicos en esa esfera. El Estado analizado también manifiesta que la calidad del mecanismo de control actualmente existente es sólida, existiendo varios niveles de examen.¹⁷⁵

[226] Con respecto a la manera en que se obtienen los recursos presupuestarios para sus operaciones, el Estado analizado, en su Respuesta al Cuestionario, manifiesta que el “*Departamento recibe sus recursos presupuestarios del Ministerio de Finanzas y Planificación, que se ponen a su disposición a través del Fondo Consolidado, a semejanza de otros organismos públicos que carecen de financiamiento propio.*”¹⁷⁶

[227] En cuanto a mecanismos de coordinación para armonizar funciones, el Estado analizado, en su Respuesta al Cuestionario, señala que el más visible es el Comité de Cuentas Públicas del Parlamento.¹⁷⁷ Los informes del Departamento se presentan al Parlamento y se delibera sobre ellos en las sesiones de dicho comité.

[228] Con respecto a mecanismos de rendición de cuentas, el Auditor General, conforme a la sección 29(1) de la Ley de Asuntos Financieros y Administración, debe informar anualmente cuanto antes, y a más tardar el 31 de diciembre que siga al cierre de cada ejercicio fiscal, sobre los resultados del examen que haya realizado. Además, el Auditor General, si le parece conveniente, puede preparar un informe especial; el cual debe dirigirse al presidente de la Cámara de Representantes.¹⁷⁸ Esos informes están disponibles en el sitio web del Departamento del Auditor General, en www.auditoriaorgeneral.gov.jm/reports

4.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas.

[229] La Oficina del Auditor General cuenta con un conjunto de disposiciones y/o de otras medidas pertinentes para promover la consecución de los objetivos de la Convención, algunas de las cuales se describen sucintamente en la sección 4.1. No obstante, el Comité considera apropiado formular algunas observaciones con respecto a esas disposiciones y/o a otras medidas.

[230] En primer lugar, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ* los representantes del Auditor General señalaron que resultaba difícil atraer y retener personal, ya que las remuneraciones del sector privado son más atractivas. Como consecuencia existen casos en que un nuevo funcionario permanece durante tres meses y se marcha a ocupar un cargo mejor remunerado. Además, no es sólo la mejor remuneración en el sector privado lo que incide en la retención de personal, sino también la falta de recursos suficientes. El Estado analizado, en su Respuesta al Cuestionario, señala lo siguiente:¹⁷⁹

[231] “*El Departamento, al igual que muchas otras entidades públicas, carece de recursos suficientes, y por lo tanto tiene dificultades para atraer personal. Esos factores aumentan el riesgo de que en las auditorías no se logre identificar actividades fraudulentas, incumplimiento de directrices*

¹⁷⁵ *Ídem.*

¹⁷⁶ *Ídem.*

¹⁷⁷ *Ídem*, págs. 17 – 18.

¹⁷⁸ Ley de Asuntos Financieros y Administración, sección 29, *supra* nota 160. Véase también la sección 122(2) de la Constitución de Jamaica, que dispone que el Auditor General debe presentar informes al Presidente de la Cámara de Representantes, el cual debe disponer su presentación a dicha cámara, *supra* nota 158.

¹⁷⁹ Respuesta al Cuestionario, págs. 18 – 19, *supra* nota 7.

gubernamentales, ineficiencia de operaciones del Gobierno y declaraciones inexactas en las cuentas públicas.”

[232] El problema de los recursos y la dificultad que supone atraer personal calificado fueron señalados en el Informe Anual del Auditor General correspondiente a 2009/2010.¹⁸⁰

[233] *“La escasez de recursos humanos impone una limitación al alcance de la labor de nuestra auditoría y aumenta el riesgo de auditoría de falta de detección de errores e irregularidades. A ese respecto, el AGD [Departamento del Auditor General] solicitó personal adicional para operar en las unidades de Estados Financieros, Auditorías de Desempeño, Auditorías de TI e Investigaciones Especiales y para responder a solicitudes específicas de entidades interesadas, especialmente el Gobierno y organismos internacionales. En consecuencia el Ministerio de Finanzas aprobó la solicitud para dieciséis puestos de administración media adicionales, La provisión de los puestos adicionales se realizará a lo largo de un período de tres años y al mismo tiempo acordamos ceder seis puestos administrativos de auditoría. Sin embargo, dada la remuneración de esos puestos tuvimos dificultades para atraer personal calificado.”*

[234] La escasez de recursos es también evidente cuando el Departamento amplía sus actividades para cumplir mejor su mandato. Por ejemplo, el Departamento ha ampliado las auditorías basadas en actividades, que como se describe en el Informe Anual del Auditor General correspondiente a 2012/2013, entrañan *“el examen de la actividad básica de una entidad para cerciorarse de que la administración haya implementado un sólido sistema de control para garantizar la consecución de su objetivo o mandato global.”*¹⁸¹ Esas actividades forman parte de las auditorías de cumplimiento realizadas por la Unidad de Auditorías de Seguridad, que determinan la medida en que los Ministerios, Departamentos y organismos cumplen las normas, leyes y reglamentos, las políticas respectivas y los códigos establecidos.¹⁸²

[235] Sin embargo, la expansión de esas auditorías basadas en actividades han suscitado considerables dificultades en el Departamento del Auditor General:¹⁸³

[236] *“El AuGD [Departamento del Auditor General] tuvo que hacer frente al efecto negativo de la curva de aprendizaje vinculado con la aplicación de la metodología de auditorías basadas en actividades, problema que se vio exacerbado por prioridades contrapuestas, tales como iniciativas de formación de capacidad, que impusieron cargas adicionales a nuestros ya limitados recursos.”*

[237] Además, el Departamento no ha logrado completar todas las auditorías o certificar todos los estados financieros, que se requieren en el curso del año. Por ejemplo, en el Informe Anual del Auditor General correspondiente a 2012/2013 se señaló que de 32 auditorías de cumplimiento planificadas, que se realizan para determinar en qué medida los Ministerios, Departamentos y organismos cumplen las normas, leyes y reglamentos, las políticas y los códigos establecidos, el Departamento completó 15.¹⁸⁴ De las 83 auditorías de estados financieros planificadas, el Departamento pudo realizar 77, y de ese total, certificar 50.¹⁸⁵

¹⁸⁰ Informe Anual del Auditor General correspondiente a 2009/2010, págs. 25 – 26,

http://www.auditoriaorgeneral.gov.jm/files/u5/AUDITOR_GENERAL_S_ANNUAL_REPORT_2010_0.pdf

¹⁸¹ Informe Anual del Auditor General correspondiente a 2012/2013, párrafo 2.1.7, pág. 11, *supra* nota 169.

¹⁸² *Ídem*, párrafo 3.1.2, pág. 17.

¹⁸³ *Ídem*, págs. 5 – 6.

¹⁸⁴ *Ídem*, pág. 17.

¹⁸⁵ *Ídem*, pág. 18.

[238] En virtud de lo que antecede, el Estado analizado debería considerar la posibilidad de proporcionar al Departamento del Auditor General recursos humanos y presupuestarios suficientes para cumplir adecuadamente sus funciones dentro de los límites de los recursos disponibles. El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 4.4.1 en la Sección 4.4 del Capítulo II del presente Informe)

[239] La cuestión de la suficiencia de recursos humanos se ha visto afectada también por un proyecto de estructura orgánica presentado al Ministerio de Finanzas y Planificación. En 2012, para garantizar que el Departamento sea dotado de personal competente y que la estructura orgánica sea suficientemente sólida como para atender sus necesidades, el Auditor General contrató los servicios de “PricewaterhouseCoopers (PwC)” para la realización de un examen institucional general (procesos y personas) a fin de establecer el tipo de complemento de personal y la estructura orgánica más adecuada para que el Departamento pueda cumplir su mandato.¹⁸⁶ En ese mismo año recibió las conclusiones y recomendaciones del informe de “PwC” y las presentó a la Oficina del Gabinete con miras a su aprobación, y el Ministerio de Finanzas y Planificación y Gabinete creó una ‘estructura orgánica provisional’ como primer paso hacia la consecución de la estructura propuesta.¹⁸⁷ Para ello la Sección de Presupuesto del Ministerio de Finanzas y Planificación recibió esa nueva estructura para la aprobación del proceso de cálculo de costos y financiamiento, que según se espera será implementado en 2014 – 2015. No obstante, ese proceso ha llevado al Departamento a suspender todo proceso de contratación de personal hasta que el Ministerio de Finanzas y Planificación y Gabinete apruebe la implementación de la estructura, suspensión que ha sido mencionada en los informes anuales correspondiente a 2011/2012 y 2012/2013. El Comité cree que el Estado analizado debería considerar ese proyecto de estructura cuanto antes para que el Departamento del Auditor General pueda comenzar a contratar personal para poder cumplir eficazmente su importante labor de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la aplicación de prácticas óptimas en las operaciones gubernamentales. El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 4.4.2 en la Sección 4.4 del Capítulo II del presente Informe)

[240] Con respecto a la dificultad de atraer y retener personal, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ*, los representantes del Auditor General señalaron como una limitación el nivel salarial del nuevo personal establecido por la Comisión del Servicio Público. Además, una dificultad identificada por el Estado analizado en su Respuesta al Cuestionario con respecto a la labor del Departamento del Auditor General es que el perfil de recursos humanos de ese Departamento se ve restringido a lo que le proporcione la Orden de Establecimiento del Ministro de Finanzas, que señala el número de empleados que puede emplear el Departamento, así como las posiciones establecidas, sus grados y salarios.¹⁸⁸ El Departamento, vinculado por esa orden, según el Estado analizado, no puede obtener acceso a personas con conocimientos especializados y con la experiencia conexas, lo que ha reducido su capacidad de llevar a cabo ciertas actividades.¹⁸⁹ El Comité observa, sin embargo, que el Departamento del Auditor General ha sido identificado como una de las doce entidades a las que se delegarán funciones y conferirán atribuciones desconcentradas. Como se señala en el Informe Anual del Auditor General correspondiente a 2012/2013, eso significa que se dará a ese Departamento autonomía para sus operaciones, recursos humanos y financieros, lo cual supondrá considerables cambios en sus operaciones. La implementación por etapas tendrá lugar entre 2014 y 2015. El Comité toma nota de que con una mayor autonomía sobre sus recursos humanos y financieros, el Departamento puede estar en mejores condiciones para atraer y

¹⁸⁶ Véase 2011/2012 Informe Anual del Auditor General, párrafo 3.1.11, pág. 26,

http://www.auditoriaorgeneral.gov.jm/files/u5/AGD_ANNUAL_REPORT_2012_-_COMPLETE.pdf

¹⁸⁷ Informe Anual correspondiente a 2012/2013 del Auditor General, párrafo 3.1.2, pág. 19, *supra* nota 169.

¹⁸⁸ Respuesta al Cuestionario, pág. 19, *supra* nota 7. Véase la Orden (General) de Establecimiento del Servicio Civil, 2010, <http://www.mof.gov.jm/sites/default/files/publications/2010-est-full.pdf>, y la Orden (General) de Establecimiento del Servicio Civil, 2011, <http://www.mof.gov.jm/sites/default/files/publications/2011-est-full.pdf>

¹⁸⁹ Respuesta al Cuestionario, *idem*.

retener personal, proporcionar salarios más competitivos que los que actualmente ofrece, y por lo tanto atender mejor las necesidades de recursos humanos que experimenta. El Comité formulará una recomendación a ese respecto. (Véase la Recomendación 4.4.3 en la Sección 4.4 del Capítulo II del presente Informe)

[241] El Comité observa que una de las importantes funciones del Departamento del Auditor General es la detección de irregularidades al realizar una auditoría. A ese respecto, si el Departamento constata que un funcionario: a) no ha recaudado sumas de dinero debidas al Estado; b) es responsable de algún pago irregular de fondos públicos o de algún pago que no esté debidamente justificado, o c) es responsable de alguna irregularidad en materia de dineros públicos, sellos, valores, depósitos u otros bienes del Estado, o en la pérdida o destrucción de los mismos, debe hacerlo saber al Secretario de Asuntos Financieros y recomendar el recargo que debe cobrarse por concepto de recuperación¹⁹⁰ En ese caso, el Secretario de Asuntos Financieros puede entonces imponer ese recargo al funcionario por la suma no recaudada o por el pago impropio, el pago no debidamente justificado, el faltante, la pérdida de valor de los bienes destruidos, según fuere el caso, si dentro de determinado período no se presenta una explicación satisfactoria de esa negligencia. La Ley establece además que no puede aplicarse un recargo después de la expiración de un plazo de tres años desde la fecha del acto negligente, y que el Secretario de Asuntos Financieros debe comunicar al Auditor General y al oficial contable del Departamento de que se trate todo recargo impuesto conforme a la Ley. Como se señala en la Respuesta al Cuestionario, el Departamento sólo puede recomendar recargos, los cuales están sujetos a la discrecionalidad del Secretario de Asuntos Financieros, quien puede modificarlos o dejarlos sin efecto.¹⁹¹

[242] El Auditor General, en su Informe Anual correspondiente a 2010/2011, tomó nota de la suma recaudada por el Secretario de Asuntos Financieros para los años del período 2007 – 2011,¹⁹² en el cual hubo 14 casos en que se denunciaron al Secretario de Asuntos Financieros pérdidas y pagos impropios por un total de aproximadamente \$13 millones, para la posible imposición de recargos. En virtud de esos casos se impusieron recargos por un monto de \$1.500.000, correspondientes a cinco de los casos referentes a pérdidas/pagos impropios de \$6,3 millones, de los cuales sólo se había recuperado \$1 millón a la fecha de dicho informe. Además, tres de los casos, relativos a \$2,9 millones, fueron retirados: dos porque había expirado el plazo de prescripción extintiva de tres años, y el otro porque el funcionario involucrado había interpretado erróneamente las directrices. Finalmente, en decisiones adoptadas en cuatro de los casos, por un monto de \$1.500.000, no se informó al Departamento del Auditor General.¹⁹³

[243] El Comité observa que el Secretario de Asuntos Financieros debería imponer recargos para recuperar la totalidad del monto de las pérdidas no autorizadas de dineros, pagos o bienes, y no dejar expirar el plazo de prescripción trienal para el cobro. En casos de explicación satisfactoria, o si el Secretario de Asuntos Financieros impone un monto menor, ello debería explicarse también por escrito, y el informe debería ser remitido al Departamento. En todos los casos el Secretario de Asuntos Financieros debería comunicar al Departamento del Auditor General el gravamen aplicado y el monto recuperado. Preocupa al Comité el hecho de que el Secretario de Asuntos Financieros en muchos casos no comunica al Departamento lo referente a ese proceso. El sistema de imposición de recargos está destinado a recuperar una pérdida impropia para el Estado y debería ser un disuasivo eficaz para que los oficiales contables no actúen en contravención de la Ley de Administración Financiera y Auditoría y las demás leyes vigentes en Jamaica. Sin embargo, dado que sólo se recuperó \$1 millón de los \$13 millones

¹⁹⁰ Sección 20 de la Ley de Administración Financiera y Auditoría, *supra* nota 160.

¹⁹¹ Respuesta al Cuestionario, pág. 18, *supra* nota 7.

¹⁹² Informe Anual del Auditor General correspondiente a 2010/2011, Sección 7, Cuestiones relativas a recargos, págs. 50 – 51, http://www.auditoriaorgeneral.gov.jm/files/u5/AGD_ANNUAL_REPORT_2011.pdf

¹⁹³ *Ídem*, y véase el Apéndice P del Informe Anual correspondiente a 2010/2011.

de irregularidades detectadas, lo que puede entrañar actos de corrupción, este régimen no está operando como debería. El Comité cree que el Estado analizado debería considerar la posibilidad de enmendar la ley para que la recuperación de un recargo fuera imprescriptible. Además, el Secretario de Asuntos Financieros debería actuar puntualmente en materia de aplicación de recargos, y si por cualquier motivo el Secretario de Asuntos Financieros impone un recargo menor que el total de la pérdida, se le debería requerir que lo disponga por escrito exponiendo los fundamentos y comunicándolo al Departamento del Auditor General. El Comité formulará recomendaciones. (Véanse las Recomendaciones 4.4.4, 4.4.5 y 4.4.6 en la Sección 4.4 del Capítulo II del presente Informe)

4.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas.

[244] El Comité toma nota de que el Estado analizado, en su Respuesta al Cuestionario, formula la siguiente observación:¹⁹⁴

[245] *“Los diversos informes del Departamento se presentan al Parlamento y se publican en el sitio web del Departamento. También se graban en CD, que están a disposición del público y de las entidades que los soliciten. En ellos suelen destacarse irregularidades cometidas y otros actos de corrupción. Los funcionarios son objeto de capacitación continua sobre diversas metodologías de auditoría. Anualmente se realizan diversas auditorías de diferentes actividades, y esas decisiones se adoptan de acuerdo con determinado perfil de riesgos que se asigna a la entidad. En los informes se detallan también la metodología, el alcance y las eventuales dificultades. Las conclusiones de la auditoría son acompañadas por las recomendaciones pertinentes para corregir esos problemas.”*

[246] A ese respecto, los resultados de las auditorías de desempeño y de estados financieros realizadas por el Departamento del Auditor General se presentan en sus informes anuales.

[247] Además, el Comité observa que en los informes anuales, el Auditor General proporciona estadísticas informativas sobre pagos impropios, que para el período 2012/2013 ascendieron a \$3,96 millones; los pagos no aprobados ascendieron a J\$213,2 millones, US\$60 millones y 925.726 euros; los pagos en exceso ascendieron a \$1 millón, suma de la cual se recuperaron \$100. 916; los anticipos no liquidados ascendieron a US\$485 934; además, los incumplimientos de adquisiciones de bienes y servicios tuvieron un costo de aproximadamente \$24 millones.¹⁹⁵ En los informes anuales se clasificaron esas cifras por Ministerio, Departamento u organismo, monto y pagos distintos de no aprobados, para los ejercicios correspondientes al período comprendido entre 2008/2009 y 2012/2013.

[248] El Comité toma nota de la información variable proporcionada en esos informes anuales con respecto a esas constataciones de pagos no autorizados. No obstante, observa que en los informes anuales no se mantienen estadísticas sobre el monto recuperado de los responsables de los pagos impropios y no aprobados, así como de los anticipos no liquidados, a diferencia de lo que sucede con los pagos en exceso. El Estado analizado debería considerar la posibilidad de mantener estadísticas sobre las sumas que se ha ordenado reembolsar al Estado en esos casos y del monto realmente recibido, como se hace actualmente en el caso de los pagos en exceso. El Comité toma nota de que en los Informes Anuales del Auditor General correspondientes a 2009/2010 y 2010/2011 se incluyen sendos capítulos sobre temas de recargos, así como apéndices que contienen un gráfico en que se identifica el Ministerio, Departamento u organismo para el que se haya establecido un recargo, el monto que el Secretario de Asuntos Financieros haya ordenado aplicar y el monto recibido. Esa información debería incluirse una vez más en los

¹⁹⁴ Respuesta al Cuestionario, pág. 18, *supra* nota 7.

¹⁹⁵ Véase págs. 12 – 14 y Apéndices 1 – 5 del Informe Anual del Auditor General correspondiente a 2012/2013, *supra* nota 169.

informes anuales, ya que hacer pública esa información puede alentar el cumplimiento por parte de quienes adeudan recargos, y la actuación del Secretario de Asuntos Financieros. El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 4.4.7 en la Sección 4.4 del Capítulo II del presente Informe)

[249] Además, el Comité toma nota de que el régimen legal no parece autorizar al Auditor General a denunciar a la Policía el hecho de que una auditoría revele la comisión de un delito penal, o denunciar a la Comisión de Servicio pertinente una falta disciplinaria, como la consistente en conflictos de intereses tales como los previstos en la Órdenes para el Personal del Servicio Público. El Estado analizado, en su Respuesta al Cuestionario, manifiesta que los actos de corrupción que se detectan como consecuencia de una auditoría son derivados a los órganos pertinentes para que se adopte una decisión.¹⁹⁶ Sin embargo, la sección 26 de la Ley de Administración Financiera únicamente dispone que si en algún momento el Auditor General descubre una irregularidad en la recepción, custodia o gasto de dineros públicos o en la recepción, custodia, emisión, venta, transferencia o entrega de sellos, valores, depósitos u otros bienes del Estado o en la contabilidad de los mismos, se debe efectuar la denuncia a la Tesorería. El Comité efectivamente observa que conforme a la sección 80 del Reglamento de Administración Financiera correspondiente a 2011, cuando se descubre una pérdida¹⁹⁷ el funcionario contable debe investigar las circunstancias de la misma y si la investigación revela la comisión de un delito penal, el asunto debe ser manejado por la Policía, si se trata de un delito penal, o por la Comisión del Servicio Público, la Comisión de Servicio Policial o la Comisión de Servicio Judicial, según corresponda, si se trata de una falta administrativa. Además, el funcionario investigador debe formular una denuncia policial si las circunstancias de la pérdida indican que se ha cometido un delito penal.¹⁹⁸ El Comité cree que el Estado analizado debería considerar la posibilidad de autorizar al Auditor General a denunciar infracciones a otras autoridades, tales como la Policía o las Comisiones de Servicios, lo que ya está autorizado en el caso de los oficiales contables, para que se puedan adoptar medidas apropiadas. El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 4.4.8 en la Sección 4.4 del Capítulo II del presente Informe).

[250] Además, el Comité toma nota de que en los informes anuales se clasifican las infracciones en materia de adquisiciones por Ministerio, Departamento y organismo y por costo de la adquisición, para los ejercicios del período 2008/2009 – 2012/2013:¹⁹⁹

Infracción en materia de adquisiciones	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
Total (dólares jamaicanos)	\$365 508 182	\$398 821 064	\$527 800 000	\$286 998 917	\$24 470 822

[251] En cuanto a los incumplimientos, su monto es significativo. Tan sólo para el ejercicio 2012/2013 el Auditor General manifiesta que se trató de casos en que el organismo gubernamental no obtuvo la aprobación preceptiva de la Comisión Nacional de Contratos y de hacer llamados a cotizaciones de precios que se requieren antes de adjudicar un contrato por un monto inferior a \$10 millones. Además el Auditor General señala que no fue posible determinar la manera en que esos organismos comprobaron

¹⁹⁶ Respuesta al Cuestionario, pág. 18, *supra* nota 7.

¹⁹⁷ La Sección 78 del Reglamento de Administración Financiera dispone que debe entenderse que ha existido una pérdida cuando el Estado es privado del uso de dineros públicos o en fideicomiso, bienes públicos, depósitos o cualquier otro activo financiero o físico. Reglamento de Administración Financiera, http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_jam_finan_reg.pdf

¹⁹⁸ Sección 86(2)(b), *idem*.

¹⁹⁹ Informe Anual del Auditor General correspondiente a 2012/2013, pág. 129, *supra* nota 169.

que los precios pagados eran justos y razonables.²⁰⁰ El Comité cree que el Estado analizado debería considerar también la posibilidad de que el Auditor General dé cuenta del asunto a la Oficina del Contratista General para la adopción de medidas apropiadas en relación con cualquier infracción en materia de adquisiciones que haya llegado a conocimiento del Auditor General. El Comité formulará una recomendación. (Véase la Recomendación 4.4.9 en la Sección 4.4 del Capítulo II del presente Informe).

[252] Finalmente, como se establece en la sección 4.1, una de las funciones más importantes del Departamento del Auditor General consiste en autorizar los estados financieros y las cuentas pertinentes de los Ministerios, Departamentos y organismos de Jamaica. El Comité toma nota, sin embargo, de que 85 estados financieros no han sido recibidos, como la ley lo requiere, lo que consta en el Informe Anual correspondiente a 2012/2013 del Auditor General; ese total incluye estados financieros pendientes de ejercicios anteriores.²⁰¹ Además, en el Informe Anual se señala también la existencia de 108 cuentas de apropiaciones pendientes de presentación por Ministerios, Departamentos u organismos. Ese total incluye cuentas pendientes de ejercicios anteriores. Además hay 23 casos de estados financieros pendientes, incluidos estados de ingresos y pagos, de organismos de creación legal.²⁰² Como señala en ese informe el Auditor General:²⁰³

[253] *“El retraso en la presentación de los estados financieros anuales fue en detrimento del proceso de contabilidad pública, impidió la adecuada evaluación del desempeño financiero de las entidades y de su situación, y agravó el riesgo de detección tardía de errores y fraude, o de que los mismos no fueran detectados.”*

[254] El Comité señala que la sección 71 del Reglamento de Administración Financiera de 2011 dispone que los oficiales de contabilidad, los receptores principales de ingresos y los jefes responsables deben adoptar procedimientos disciplinarios apropiados conforme al Reglamento de Servicios Públicos contra los funcionarios responsables de la demora en la puntual presentación de estados financieros. Además, las medidas deberán ser puestas inmediatamente en conocimiento del Auditor General y del Secretario Financiero. El Secretario Financiero debe además poner en conocimiento del Ministro el caso de cualquier jerarca de contabilidad o receptor principal de ingresos cuyos estados financieros lleguen con continuos atrasos y contengan información atrasada. No obstante, las sanciones por presentación tardía de estados financieros no parecen aplicarse eficazmente.²⁰⁴

[255] En virtud de lo que antecede, el Estado analizado debería considerar la posibilidad de revisar las medidas establecidas que sancionan a las personas u organismos que no presenten sus estados financieros y apliquen las sanciones previstas para las personas u organismos que no presenten sus cuentas, a fin de alentar el cumplimiento, facilitando así el cumplimiento, por el Auditor General, de su función de promover la rendición de cuentas, la transparencia y la eficiencia en las operaciones gubernamentales. El Comité formulará una recomendación a ese respecto. (Véanse la Recomendación 4.4.10 en Sección 4.4 del Capítulo II del presente informe)

4.4. Conclusiones y recomendaciones.

²⁰⁰ *Ídem*, pág. 14.

²⁰¹ *Ídem*, pág. 14, y Apéndice 7.

²⁰² *Ídem*, págs. 14 – 15 y Apéndices 6 y 8.

²⁰³ *Ídem*, pág. 15.

²⁰⁴ Reglamento de Administración Financiera, 2011, sección 71, *supra* nota 197.

[256] Con base en el análisis integral realizado con respecto al Departamento del Auditor General en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[257] Jamaica ha considerado y adoptado medidas encaminadas a mantener y fortalecer el Departamento del Auditor General, como órgano de control superior, tal como se describe en la Sección 4 del Capítulo II del presente informe.

[258] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 4.4.1 Proporcionar al Departamento del Auditor General los recursos presupuestarios y humanos necesarios para el adecuado desempeño de su función, dentro de los límites de los recursos disponibles. (Véase la sección 4.2 del Capítulo II del presente Informe).
- 4.4.2 Concluir el proceso de aprobación por parte del Ministerio de Finanzas y Planificación y el Gabinete, relativa a la nueva estructura orgánica propuesta para el Departamento del Auditor General. (Véase la sección 4.2. del Capítulo II del presente Informe)
- 4.4.3 Aplicar el régimen de delegación de atribuciones al Departamento del Auditor General. (Véase la sección 4.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 4.4.4 Considerar la posibilidad de enmendar la Ley de Administración Financiera y Auditoría, eliminando el plazo trienal de prescripción para el cobro de resarcimientos a favor del Estado. (Véase la sección 4.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 4.4.5 Asegurarse de que el Secretario de Asuntos Financieros actúe prontamente cuando reciba del Auditor General una recomendación de imposición de un resarcimiento a favor del Estado. (Véase la sección 4.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 4.4.6 Disponer que el Secretario de Asuntos Financieros exponga por escrito, con sus fundamentos, la decisión de imponer un resarcimiento a favor del Estado menor que el recomendado por el Auditor General, y lo haga saber al Departamento del Auditor General. (Véase la sección 4.2 del Capítulo II del presente Informe)
- 4.4.7 Mantener estadísticas sobre los resarcimientos a favor del Estado recomendados por el Auditor General, clasificados por organismo público, monto que se ordene reembolsar, monto cuya imposición haya sido ordenada por el Secretario de Asuntos Financieros, así como las sumas realmente recibidas, en orden a identificar retos y recomendar medidas correctivas. (Véase la sección 4.3 del Capítulo II del presente Informe)
- 4.4.8 Considerar la posibilidad de reformar la Ley de Administración Financiera y Auditoría para autorizar al Auditor General a denunciar a la Policía y a las Comisiones de Servicios un delito penal o una falta administrativa, respectivamente, que sea detectada durante la realización de una auditoría. (Véase la sección 4.3 del Capítulo II del presente Informe)

- 4.4.9 Autorizar al Auditor General a poner en conocimiento de la Oficina del Contratista General todo incumplimiento de contratos de adquisiciones que se detecte al realizar una auditoría. (Véase la sección 4.3 del Capítulo II del presente Informe)
- 4.4.10 Considerar la posibilidad de revisar las medidas establecidas que sancionen a las personas u organismos públicos que falten al cumplimiento de su obligación de presentar sus estados financieros y cuentas. (Véase la sección 4.3 del Capítulo II del presente Informe)

III. BUENAS PRÁCTICAS

[259] De conformidad con la Sección V de la *Metodología para el Análisis de la Implementación de la Disposición de la Convención Interamericana Contra la Corrupción Seleccionada en la Cuarta Ronda* y con el *Formato* adoptado por el Comité para los informes de dicha ronda, se hace referencia a la buena práctica de realización de una auditoría, asegurando así que la información sea exhaustiva, precisa y pertinente, tal como se prevé en el Manual de Procedimientos de Auditoría.²⁰⁵ Además, esa buena práctica asegura que el proceso sea equitativo para la entidad de que se trata.

IV. SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS²⁰⁶

[260] El Comité se referirá a continuación a los avances e información y desarrollos nuevos dados por Jamaica en relación con las recomendaciones formuladas y las medidas sugeridas por el Comité para su implementación en los informes de la Primera Ronda, sobre las que estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas,²⁰⁷ y procederá, según corresponda, a tomar nota de aquellas que han sido consideradas satisfactoriamente y de aquellas que necesitan atención adicional por el Estado analizado, y si es el caso, se referirá a la vigencia de tales recomendaciones y medidas y a su replanteamiento o reformulación, de acuerdo con lo previsto en la sección VI de la metodología adoptada por el Comité para la Cuarta Ronda.

[261] El Comité también tomará nota en este apartado del informe de las dificultades que para la implementación de las aludidas recomendaciones y medidas haya puesto de presente el Estado analizado, y de la cooperación técnica que haya sido requerida por el mismo con tal fin.

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 y 2 DE LA CONVENCIÓN)

1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

Recomendación:

²⁰⁵ Respuesta al Cuestionario, pág. 19, *supra* nota 7.

²⁰⁶ El listado de las recomendaciones que después de este análisis aún requieren atención adicional o han sido reformuladas se encuentra incluido en el Anexo I de este Informe.

²⁰⁷ Disponibles en: <http://www.oas.org/juridico/english/jam.htm>

Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los conflictos de intereses, asegurando que sean aplicables a todos los funcionarios y empleados públicos, de modo de permitir la aplicación práctica y efectiva de un sistema de ética pública.

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Establecer o adaptar y luego implementar normas de conducta para los cargos que actualmente no están comprendidos en el ámbito de ningún control, incluyendo sanciones adecuadas por la violación de tales normas. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.1.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[262] Con respecto a la medida anterior, en su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos. En este sentido, el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance en la implementación de esta medida, lo siguiente:²⁰⁸

[263] – El Estado analizado señala que el Reglamento del Servicio Público de 1961 rige el patrón de conducta exigible a todas las oficinas públicas del Gobierno Central y proporciona orientación para otros organismos del sector público. No obstante, el Estado analizado señala que el reglamento no especifica, en su sección sobre interpretación, a quiénes se aplica. A ese respecto:

[264] “*Por razones de claridad se propone a través de las enmiendas de dicho reglamento, que están siendo analizadas, que debe establecerse que el Reglamento del Servicio Público “se aplica a todos los jefes públicos del Gobierno Central, a los transferidos a otros organismos públicos en relación con una jubilación, gratuidad y otros beneficios jubilatorios, y (iii) a los Organismos Ejecutivos.”*

[265] Además, el Estado analizado señala que “[e]n la Ley de Organismos Ejecutivos se han establecido normas de conducta; la Resolución del Reglamento (General) de Organismos Ejecutivos de 2010 (segundo Anexo) que incorpora secciones del Reglamento del Servicio Público de 1961 con respecto a las disposiciones de dicho reglamento que han de incluirse en el Código de Conducta y en los Manuales de Recursos Humanos de los Organismos Ejecutivos; los mismos guardan relación con las faltas disciplinarias y el proceso de destitución.”²⁰⁹

[266] Esos factores fueron reiterados por los representantes de la Comisión del Servicio Público durante la visita *in situ*. Además, los representantes de la Oficina del Ministerio Público mencionaron también que un consultor versado en la legislación de la Commonwealth sería contratado para proporcionar orientación y consultar a entidades interesadas, como la Oficina del Ministerio Público, como garantía de que las enmiendas propuestas para el Reglamento del Servicio Público satisfagan las necesidades pertinentes.

[267] Además, en un documento presentado por el Estado analizado tras la visita *in situ* se señala que:²¹⁰

[268] “*En el primer semestre de 2012 se elaboraron Directrices Judiciales y están actualmente en vigor. Se están realizando trámites para la enmienda del código vigente. El comité que formuló las*

²⁰⁸ Respuesta al Cuestionario, pág. 21, *supra* nota 7.

²⁰⁹ *Ídem*, pág. 22.

²¹⁰ Recomendaciones para la Ronda 1: Información adicional, http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_jam.htm

*directrices está revisándolas para agregar comentarios más detallados para la mejor orientación de los jueces. El proceso de revisión se realiza con asistencia de Canadá conforme al programa JUST. Se prevé que la revisiones de las directrices sean aprobadas dentro de poco.”*²¹¹

[269] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la aplicación de la medida a) de la recomendación que antecede, así como de la necesidad de prestar atención a los mismos, teniendo en cuenta que las enmiendas propuestas para el Reglamento del Servicio Público que aclararán el alcance de su cobertura aún no han sido sancionadas. (Véase la medida a) de la sección 1.1 del Anexo 1 del presente Informe)

[270] Además, el Comité señala que el problema identificado en la Primera Ronda, que llevó a la medida a), fue el limitado alcance de la Órdenes para el Personal, ya que no se aplican a todo el personal empleado por el Gobierno. Como se señala en el referido Informe:²¹²

[271] *“Conforme a la interpretación del término “Funcionario Público” establecida en la sección de introducción de las Órdenes de Personal, esas excepciones son las siguientes: los miembros de la Comisión del Servicio Público, la Comisión del Servicio Judicial, el Ministerio Público, el Auditor General y los funcionarios cuya designación sea regulada por la Comisión del Servicio Judicial i la Comisión del Servicio Policial. Esos no son los únicos órganos que no forman parte del Servicio Público y que por lo tanto no están comprendidos en las Órdenes para el Personal. Todos los órganos políticos, así como los Jueces de la Corte Suprema y los de la Corte de Apelaciones, los miembros de juntas, paneles, comités u órganos similares establecidos por la ley y otros órganos especificados como ajenos al servicio público a los efectos de las disposiciones constitucionales también están exentos de esos controles...Esas excepciones representan una vía para socavar el sistema establecido para prevenir conflictos de intereses y corrupción, por lo cual sería conveniente establecer estándares de control y regulación de las actividades de esas oficinas.”*

[272] Si bien la adopción de las Directrices Judiciales proporciona guías éticas para los jueces de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema, los másters de la Corte Suprema y los Magistrados Residentes, el Estado analizado no parece haber implementado medidas que puedan prevenir conflictos de intereses y corrupción. El Comité señala que las Órdenes para el Personal, en su introducción, establecen que cualesquiera disposiciones de tales órdenes pueden adoptarse para que sean aplicadas por cualquier otra entidad dentro del Servicio Público en más amplio sentido.²¹³ No obstante, el Comité no puede determinar si esto ha sucedido.

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Establecer normas escritas que requieran que la contratación de servidores públicos se realice sobre la base del concurso de méritos. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.1.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

²¹¹ Directrices sobre Conducta Judicial, http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_jam.htm

²¹² Informe sobre la Aplicación en Jamaica de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción seleccionadas para Examen en el Marco de la Primera Ronda, pág. 9, http://www.oas.org/juridico/english/mec_rep_jam.pdf

²¹³ Órdenes para los Funcionarios del Servicio Público, Introducción, *supra* nota 162.

[273] Con respecto a la medida anterior, en su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos. En este sentido, el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance en la implementación de esta medida, lo siguiente:²¹⁴

[274] – *El enunciado de la misión de la Oficina de las Comisiones de Servicios establece, que consiste en “hacer efectivo el principio del mérito en la designación, la formación y el régimen disciplinario de los funcionarios públicos a través de procesos que sean transparentes y justos”. En el cumplimiento de esa misión.” la Comisión del Servicio Público se rige por las directrices escritas del Reglamento del Servicio Público de 1961 (el RSP). La Regla 17 (1) del RSP establece: “de cuando en cuando, cuando se producen vacantes, la Comisión deberá considerar la elegibilidad de todos los funcionarios para promociones y con respecto a cada uno de ellos tendrá en cuenta no sólo su antigüedad, experiencia y calificaciones educativas, sino también sus méritos y capacidad.” La Regla 17 (2) de dicho RSP señala también que “para la promoción a un cargo que incluya una labor de carácter rutinario podrá hacerse gravitar más la antigüedad que cuando la labor suponga una mayor responsabilidad e iniciativa. Al mérito y a la capacidad se les irá dando mayor gravitación a medida que la labor implique un mayor grado de responsabilidad e iniciativa.” Además, en el Reglamento 19 (2) del RSP, en los requisitos relativos al desempeño de las funciones del candidato a ser entrevistado deben existir ciertos criterios que han de cumplirse. Además, para respaldar el enunciado de misión y para garantizar un sistema que se funde en la meritocracia la Comisión del Servicio Público ha utilizado centros de evaluación, diferentes instrumentos de selección, estudios de casos y juntas (paneles) de selección (Regla 20 del Reglamento del Servicio Público de 1961) que ayuden a asegurar que la contratación pública para el servicio público se base en el principio del mérito. Corresponde señalar los debates que están teniendo lugar para enmendar el Reglamento del Servicio Público de 1961 a fin de incluir otros requisitos para que considere la Comisión, tales como los informes de evaluación de desempeño y cartas de recomendación en relación con la labor especial realizada, al entrevistar a candidatos para contratación.*

[275] Además, el Estado analizado señala que se está llevando a cabo una revisión e introducción de enmiendas en el Reglamento del Servicio Público, que incluirá otros requisitos, tales como informes de evaluación del desempeño y cartas de recomendación en relación con la labor especial realizada, al entrevistar a candidatos para la contratación, y que los Ministerios a los que se delegan funciones son auditados para garantizar la observancia del principio de la meritocracia y que cuando se detecten fallas se recomienden y/o adopten medidas correctivas.²¹⁵

[276] Asimismo, durante la visita *in situ* los representantes señalaron que la revisión y las enmiendas al Reglamento del Servicio Público son disposiciones en que se menciona específicamente que el ingreso en el servicio público debe basarse en el mérito, así como las enmiendas que dispondrán que todos los anuncios de vacantes se den a conocer a todos los candidatos elegibles.

[277] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la aplicación de la medida b) de la recomendación que antecede.

[278] No obstante, el Comité toma nota de que el tema del mérito en los sistemas de contrataciones públicas se examina en forma más amplia en la Segunda Ronda de Examen del Estado analizado, y que el Estado analizado recibió una recomendación similar en que se prevé la adopción, a través de los procedimientos legislativos y/o administrativos, de disposiciones que prevén expresamente que la

²¹⁴ Respuesta al Cuestionario, págs. 22 – 23, *supra* nota 7.

²¹⁵ *Ídem*, pág. 23.

contratación pública para el servicio público se base en el principio del mérito. El Estado analizado tendrá la oportunidad de proporcionar información más exhaustiva sobre la manera en que esté cumpliendo esta recomendación en el proceso de seguimiento de esta ronda de revisión. En virtud de lo que antecede el Comité considera que la medida b) ya no es válida.

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Desarrollar, cuando corresponda, disposiciones que limiten la participación de los ex funcionarios públicos, en situaciones que conlleven el aprovechamiento indebido de esa condición, en un plazo de tiempo determinado. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.1.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[279] Con respecto a la medida anterior, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos en un documento presentado tras la visita *in situ*. En este sentido, el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance en la implementación de esta medida, lo siguiente:²¹⁶

[280] – “*La Junta de Secretarios Permanentes ha establecido un comité encargado de elaborar un Código de Ética para los Funcionarios Públicos. Se ha realizado hasta la fecha una significativa labor de realización de estudios sobre el tema de los conflictos de intereses posteriores al empleo. El Comité tendrá en cuenta el estudio que ha sido realizado y espera haber preparado un borrador en 2014. Ya se ha preparado un índice de temas que han de incluirse en dicho borrador.*”

[281] Además, el Estado analizado señala, y así se refleja en el Informe de la Primera Ronda de Examen correspondiente a Jamaica,²¹⁷ que en la Constitución y en la legislación hay disposiciones que prohíben los conflictos de intereses posteriores al empleo; por ejemplo las aplicables a los miembros de la Comisión del Servicio Público y al Auditor General tras el cumplimiento de su mandato. Además, el Estado analizado destaca que el Párrafo 3 (d) (VI) del Primer Anexo de la Ley del Contratista General, Reglamento de Adquisiciones del Sector Público, prohíbe a los oficiales de adquisiciones dialogar sobre futuras posibilidades de empleo, o aceptarlo, con oferentes o potenciales oferentes, proveedores, contratistas o consultores.

[282] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida c) de la recomendación que antecede, y de la necesidad de seguir prestando atención al asunto, habida cuenta de que el proyecto de Código de Ética para los Funcionarios Públicos, que se referiría al conflicto de intereses post-empleo, aún no ha sido adoptado. (Véase la medida b) de la sección 1.1 del Anexo 1 del presente Informe)

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Estimular la implementación de un código de ética para Senadores y Diputados, incluyendo mecanismos punitivos por violaciones. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.1.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

²¹⁶ Recomendaciones para la Ronda 1: Información adicional, pág. 1, *supra* note 210.

²¹⁷ Informe de la Primera Ronda de Análisis, pág. 10, *supra* nota 212.

[283] Con respecto a la medida anterior, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos en un documento presentado tras la visita *in situ*. En este sentido, el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance en la implementación de esta medida, lo siguiente:²¹⁸

[284] “*Se ha redactado un Código de Ética para Senadores y Miembros de la Cámara Baja, que será remitido al Secretario del Gabinete en abril de 2014. Se prevé que en el Proyecto de Ley de la Comisión de Integridad, cuando sea aprobado, se prevea la elaboración de Códigos de Conducta. Se prevé que el proyecto de ley del Código de Ética pueda formar parte del proceso previsto en el nuevo proyecto de ley de elaboración de Códigos de Conducta.*”

[285] A esos fines, los representantes de las Cámaras del Ministerio Público manifestaron durante la visita *in loco* que el Secretario del Gabinete les había escrito solicitando que dicho Código fuera redactado y puesto a consideración del Gabinete.

[286] Además, en el documento presentado tras la visita *in situ*, y durante esa visita el Estado analizado señaló que la sección 21(1) de la Ley (de Potestades y Privilegios) del Senado y la Cámara de Representantes establece que ningún miembro de esos cuerpos puede aceptar o recibir, directa o indirectamente honorarios, remuneraciones, donaciones o recompensas para, o con respecto a, la promoción de u oposición a cualquier proyecto de ley, resolución, asunto o cuestión presentados a o que se tuviera la intención de poner a consideración de cualquiera de las Cámaras. Además, las secciones 40 y 41 de la Constitución disponen que una persona que aspire a ser designada para el Senado o elegida a la Cámara Baja y que sea parte o socio de una empresa, o director o gerente de una compañía de la que tenga conocimiento de que es parte en cualquier contrato con el Gobierno y no dé a conocer previamente el interés en cuestión no podrá ser electa. En el caso de un Senador, debe informar al Gobernador General y en caso de un potencial miembro de la Cámara Baja debe publicar un aviso en la Gaceta dentro de un período de un mes anterior a la fecha de la elección. La omisión de declarar tales intereses surgidos después de su nombramiento da lugar, conforme a la sección 41, a que su banca quede vacante.²¹⁹

[287] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida d) de la recomendación que antecede, así como de la necesidad de que Jamaica siga prestando atención al tema, teniendo en cuenta que aún no se ha aprobado el proyecto de Código de Ética para Senadores y Miembros de la Cámara de Representantes. (Véase la medida c) de la sección 1.1 del Anexo 1 del presente Informe)

Medida e) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Asegurar que existan mecanismos que brinden transparencia y eliminen los riesgos de conflicto de intereses en los casos en que el Primer Ministro acepte que un ministro mantenga un interés relevante que este no pueda o no desee abandonar. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.1.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[288] Con respecto a la medida anterior, el Estado analizado, en un documento presentado tras la visita *in situ*, señala que en los párrafos 39 y 40 del Documento Ministerial 19 se incluyen mecanismos que imponen al Primer Ministro el cometido de “impartir las instrucciones apropiadas para eliminar el conflicto de intereses”, y cuando no es posible diseñar tal medida, el Ministro debe

²¹⁸ Recomendaciones para la Ronda 1: Información adicional, pág. 1, *supra* note 210.

²¹⁹ *Ídem*, págs. 1 – 2.

obtener asesoramiento jurídico y consultar al Primer Ministro. Además, en dicho Documento se establece que en tal caso puede ser necesario que el Ministro cese en su cargo.²²⁰

[289] Durante la visita *in situ* los representantes de las Cámaras del Ministerio Público manifestaron que el Documento No. 19 del Ministro dispone que esos conflictos de intereses deben ser eliminados, y que si no se puede diseñar un mecanismo para ello, el Ministro debe cesar en el cargo inmediatamente. En ese sentido, el Primer Ministro carece de discrecionalidad para autorizar a un Ministro a mantener cualquier interés pertinente que no pueda o no quiera hacer cesar.

[290] El Comité señala que los párrafos 39 y 40 del Documento del Ministro fueron analizados y considerado en el Informe de la Primera Ronda de Examen de Jamaica, y que el problema en cuestión era la aparente discrecionalidad que tiene el Primer Ministro para autorizar que un Ministro mantenga el interés en cuestión.²²¹

[291] No obstante, en virtud de lo que antecede el Comité considera apropiado eliminar la medida e) de la recomendación arriba mencionada de la sección 1.1 del Capítulo IV del presente Informe.

1.2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos

Recomendación 1.2.1 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Fortalecer los sistemas de control dentro de la administración pública perfeccionando las normas escritas aplicables a todos los funcionarios y empleados públicos para establecer el deber de conservar y usar debidamente los bienes y recursos que se les confían o asignen. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[292] Con respecto a la recomendación anterior, en su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos. En este sentido, el Comité observa el siguiente como un paso que lo llevan a concluir que la recomendación se ha considerado satisfactoriamente.²²²

[293] – La Sección 127 del Reglamento de Administración Financiera, 2011, establece que los oficiales de contabilidad tiene la obligación de asegurar que no existe derroches, extravagancias o abusos en el uso de bienes públicos bajo la custodia o control de su departamento. La aplicación de esa medida es responsabilidad del Ministerio de Hacienda y Planificación.²²³

[294] Además, en un documento proporcionado tras la visita *in situ*, el Estado analizado señala que la medida se aplica a través de circulares periódicas remitidas a los órganos gubernamentales, siendo las más recientes las Circulares Nos. 2 y 3, de marzo de 2013, que enuncian el uso apropiado de tarjetas de débito para anticipos de fondos financiados por el Gobierno para la adquisición de ciertos bienes, y establecen directrices en que se reseñan las responsabilidades por pagos, límites de gastos, recepción y custodia de tarjetas, canje de tarjetas por combustible, sistemas de información, conservación, el requisito de control del consumo y el registro de las modalidades de gastos, para

²²⁰ *Ídem*, pág. 2. El Documento 19 del Ministerio está disponible en <http://www.cabinet.gov.jm/files/The%20GOJ%20Conduct%20of%20Ministros.pdf>

²²¹ Informe de la Primera Ronda de Examen, págs. 6 y 10, *supra* nota 212.

²²² Respuesta al Cuestionario, págs. 26 – 27, *supra* nota 7.

²²³ Reglamento de Administración Financiera, 2011, *supra* nota 197.

asegurar la gestión prudente de los recursos escasos. Además en esas circulares constan las sanciones que deben imponerse por incumplimiento de esas directrices.²²⁴

[295] El Comité toma nota de la satisfactoria consideración, por el Estado analizado, de la recomendación que antecede.

Recomendación 1.2.2 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Adoptar medidas que aseguren que las entidades correspondientes remitan oportunamente al Auditor General las cuentas de asignación de fondos y promuevan un mayor rendimiento de cuentas (“accountability”) cuando estas entidades excedan el gasto que aprueba el Parlamento. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.2.3 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[296] Con respecto a la recomendación anterior, el Estado analizado señala que el Reglamento de Administración Financiera de 2011 establece el procedimiento y el plazo para la presentación de estados financieros, así como las sanciones que deben imponerse a los jerarcas responsables por la demora en la presentación puntual de esas declaraciones. También establece que ningún gasto debe ser reasignado a ningún nuevo servicio no previsto por la Ley de Apropiações o que supere las sumas agregadas para esos servicios.²²⁵

[297] El Comité señala, no obstante, que subsiste un problema de presentación puntual de cuentas apropiadas por los organismos públicos. Como se señala en la sección 3 del Capítulo II del presente informe, en el Informe Anual del Auditor General correspondiente a 2012/2013 se señaló que hay 108 cuentas de apropiaciones pendientes que no han sido presentadas por Ministerios, Departamentos u Organismos; ese total comprende cuentas pendientes de años anteriores, hecho reconocido por el Estado analizado en la Respuesta al Cuestionario, en que señala que las cuentas de algunas entidades públicas no están al día.²²⁶ Además, si bien se ha trabajado en la presentación de estados financieros e imposición de sanciones por omisión de hacerlo dentro de los plazos estipulados, no puede decirse lo mismo sobre las cuentas de apropiaciones. Por otra parte, las medidas mencionadas en la Respuesta al Cuestionario parecen no referirse a los casos en que ha habido excesos en el gasto aprobado por el Parlamento en varios organismos públicos.

[298] El Comité ciertamente constata que el tema de la oportuna presentación de cuentas de apropiación por los organismos públicos se examina en mayor detalle en la sección 4.3 del Capítulo IV del presente Informe. En virtud de lo que antecede, el Comité considera la reformulación de la recomendación de la sección 1.2 del Capítulo IV del presente Informe, en los términos siguientes:

[299] Adoptar medidas para alentar una mayor responsabilidad en casos en que algunos organismo superan el gasto aprobado por el Parlamento (véase la recomendación única contenida en la sección 1.2 del Anexo del Capítulo IV del presente Informe)

²²⁴ Recomendaciones para la Ronda 1: Información adicional, págs. 2 – 3, *supra* nota 210. Las mencionadas circulares, así como oras pertinentes, se encuentran en <http://www.mof.gov.jm/mofpcirculars>

²²⁵ Respuesta al Cuestionario, págs. 27 – 28, *supra* nota 7.

²²⁶ Informe Anual del Auditor General correspondiente a 2012/2013, pág. 15 y Apéndice 6, *supra* nota 169 y véase Respuesta al Cuestionario, pág. 29, *idem*.

1.3. Normas de conducta y mecanismos en relación con las medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento

Recomendación:

Desarrollar, cuando sea apropiado, y fortalecer mecanismos que exijan a los funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Establecer el deber de denunciar para los funcionarios y empleados públicos que actualmente no están obligados a denunciar a las autoridades competentes los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.3.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[300] Con respecto a la medida anterior, en su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos. En este sentido, el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance en la implementación de esta medida, lo siguiente:²²⁷

[301] – La Ley de Divulgaciones Protegidas, de 2011, facilita y alienta la formulación de denuncias de conducta impropia en interés público. La Sección 20 de esa Ley establece además que toda disposición de un acuerdo será nula y sin ningún valor si impide a un empleado formular una divulgación protegida.

[302] Además, en un documento presentado tras la visita *in situ*, el Estado analizado señala que la Comisión para la Prevención de la Corrupción fue designada como autoridad para cumplir las funciones previstas en la Ley. El Comité señala asimismo que se han adoptado Directrices Procesales para la realización, recepción e investigación de denuncias formuladas en virtud de la Ley.²²⁸

[303] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida a) de la recomendación que antecede, así como de la necesidad de seguir prestando atención al tema, teniendo en cuenta que si bien la Ley de Difusiones Protegidas, de 2011, facilita y alienta la formulación de denuncias de conducta impropia, en interés público, la legislación no impone a los funcionarios públicos la obligación de denunciar a las autoridades competentes actos de corrupción en el desempeño de funciones públicas, como lo estipula la Convención Interamericana contra la Corrupción. (Véase la medida a) de la sección 1.3 del Anexo 1 del presente Informe)

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Adoptar e implementar medidas de protección de los funcionarios públicos que denuncien de buena fe actos de corrupción, para protegerlos de amenazas o represalias de las que pueden ser objeto a raíz del cumplimiento de esa obligación. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.3.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

²²⁷ Respuesta al Cuestionario, pág. 30, *supra* nota 7.

²²⁸ Recomendaciones para la Ronda 1: Información adicional, págs. 3 – 4, *supra* nota 210.

[304] Con respecto a la medida anterior, en su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos. En este sentido, el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance en la implementación de esta medida, lo siguiente:²²⁹

[305] – El Estado analizado señala que la “*Ley de Divulgaciones Protegidas (legislación sobre denunciantes) fue sancionada en 2011. Su finalidad consiste en alentar y facilitar la formulación de denuncias, por los funcionarios, en interés público; regular la recepción, investigación u otro tipo de tramitación de denuncias de irregularidades, y proteger a los empleados que formulen determinadas denuncias para que no sean objeto de detrimento laboral, y asuntos conexos*”

[306] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida b) de la recomendación que antecede. No obstante, el Comité toma nota de la existencia de problemas de protección de los funcionarios públicos que denuncian de buena fe actos de corrupción, para protegerlos frente a amenazas de represalias de que pueden ser objeto como resultado del cumplimiento de esta obligación se examinan en forma más exhaustiva en la Segunda Ronda de Examen y el Estado analizado recibió similares recomendaciones a ese respecto. Por lo tanto Jamaica tendrá la oportunidad de proporcionar información más exhaustiva sobre la manera en que esté cumpliendo esta recomendación en la etapa de seguimiento de esta ronda de examen. En virtud de lo que antecede, el Comité considera que la medida b) de la Recomendación 1.3 ya no es válida.

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Brindar capacitación adecuada a los funcionarios y empleados en cuanto a los requisitos y procedimientos que deben seguir las denuncias de los actos de corrupción y los mecanismos de protección a favor de los denunciantes. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.3.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[307] En su respuesta, el Estado analizado no informó sobre nuevos acontecimientos con respecto a la medida c) de la recomendación anterior.²³⁰

[308] El Comité toma nota de que los temas de protección de los funcionarios públicos que denuncian de buena fe actos de corrupción, para protegerlos frente a amenazas de represalias de que puedan ser objeto como resultado del cumplimiento de esta obligación se examinan en forma más exhaustiva en la Segunda Ronda de Examen. No obstante, el suministro de capacitación a los funcionarios y empleados sobre mecanismos de protección para quienes denuncian actos de corrupción no es objeto de recomendaciones en el Informe de la Segunda Ronda de Examen correspondiente a Jamaica. En virtud de lo que antecede, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación del asunto. (Véase la medida b) de la sección 1.3 del Anexo 1 del presente Informe)

2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación:

²²⁹ Respuesta al Cuestionario, págs. 30 – 31, *supra* nota 7.

²³⁰ *Ídem*, págs. 31 – 32.

Fortalecer los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos.

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Maximizar el uso de sistemas para analizar los contenidos de las declaraciones de ingresos, activos y pasivos, y adoptar medidas adecuadas para que los mismos puedan también usarse para detectar y prevenir conflictos de intereses y detectar casos de enriquecimiento ilícito, utilizando tecnologías modernas, cuando sea posible, para agilizar o hacer más expeditas la presentación de las declaraciones e igualmente como una herramienta para mejorar los sistemas, análisis o investigaciones de los casos. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[309] Con respecto a la medida anterior, en su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos. En este sentido, el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance en la implementación de esta medida, lo siguiente:²³¹

[310] – El Estado analizado señala que la “*Comisión para la Prevención de la Corrupción actualiza anualmente la base de datos de Funcionarios Públicos que deben presentar una Declaración Legal de Activos, Pasivos e Ingresos, la cual se usa como instrumento para el seguimiento de los Funcionarios Públicos omisos, y para realizar averiguaciones al respecto. En el Segundo Anexo de la Ley sobre (Prevención de) la Corrupción se dispone que la Declaración debe ser acompañada por uno o más estados bancarios o cartas de bancos que confirmen los saldos declarados. La Comisión ha hecho saber a todos los Organismos y Departamentos Públicos que está dispuesta a aceptar fotocopias de libretas bancarias, talones de máquinas de transacciones automatizadas y estados bancarios electrónicos (de servicios bancarios electrónicos) con el fin de agilizar la presentación de declaraciones.*”

[311] Además, el Comité observa que la base de datos se está usando para detectar casos de enriquecimiento ilícito y graves infracciones de la Ley sobre (Prevención de) la Corrupción. Como se señala en la sección 3.3 del Capítulo II del presente informe, para el ejercicio de 2012/2013, 8 de esos casos fueron derivados al Director del Ministerio Público.²³²

[312] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida a) de la recomendación que antecede, así como de la necesidad de que se siga prestando atención a la misma, teniendo en cuenta que los sistemas de análisis del contenido de la declaración no se están usando para detectar y prevenir conflictos de intereses, ni se cuenta con sistemas de presentación electrónica de declaraciones.

[313] En virtud de lo que antecede, el Comité considera la reformulación de la medida a) de la recomendación que antecede para sección 2 del Capítulo IV del presente Informe, en los términos siguientes:

[314] Utilizar en la máxima medida posible los sistemas de análisis del contenido de las declaraciones y adoptar las medidas apropiadas para que puedan usarse para ayudar a detectar y prevenir conflictos de intereses y usar, cuando sea posible, modernas tecnologías para agilizar la presentación de declaraciones

²³¹ Respuesta al Cuestionario, págs. 32 – 33, *supra* nota 7.

²³² Véase el Informe Anual de 2012/2013 de la Comisión para la Prevención de la Corrupción, pág. 14, *supra* nota 88.

y también como medio de mejorar sistemas, análisis e investigaciones de casos. (Véase la medida a) de la sección 2 del Anexo 1 del presente Informe)

[315] Además, el Comité señala que en los informes anuales de la Comisión para la Prevención de la Corrupción, el sistema de registro de ingresos, activos y pasivos no requiere necesariamente que todos los funcionarios públicos presenten declaraciones previstas por la ley, debido a la amplia reestructuración de organismos y departamentos, que ha dado lugar a abolición de cargos, fusiones, y al establecimiento de otros.²³³ Como la Comisión sólo recibe declaraciones de los cargos mencionados en las Partes 1 y 2 del Reglamento sobre (Prevención de) la Corrupción, de 2003, esos nuevos cargos no están sujetos a la Ley sobre (Prevención de) la Corrupción, y por lo tanto no es obligatoria la presentación de una declaración. Esos nuevos cargos están ubicados en importantes organismos públicos, como el Departamento de Aduanas, el Departamento de Ingreso Internos, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, e incluyen los de los miembros de la Unidad de Delitos Financieros de la División de Investigaciones Financieras.²³⁴ Además, una reestructuración del régimen tributario realizada en Jamaica ha dado lugar a la creación de la Administración Tributaria de Jamaica, que no está sujeta a la Ley, y de un nuevo organismo que no figura en las Partes 1 y 2 del Reglamento. El Comité considera que para maximizar adecuadamente el uso de los sistemas de análisis del contenido de las declaraciones, y adoptar las medidas adecuadas para que ellas puedan usarse para ayudar a detectar y prevenir conflictos de intereses y detectar casos de enriquecimiento ilícito deberían revisarse y actualizarse las Partes 1 y 2 del Reglamento sobre (Prevención de) la Corrupción, a fin de incorporar todos los cargos pertinentes para los que deban presentarse declaraciones legales.

[316] Análogamente, la Comisión para la Prevención de la Corrupción, en su Informe Anual correspondiente a 2012/2013, señala que el Fiscal General ha dictaminado que el Presidente de la Corte Suprema, el Presidente de la Corte de Apelaciones y los Magistrados Residentes están comprendidos en el régimen de la Ley sobre (Prevención de) la Corrupción; no así otros jueces...²³⁵ El Comité cree que el país debería tomar medidas para corregir esa situación anómala.

[317] Para maximizar adecuadamente el uso de los sistemas de análisis del contenido de las declaraciones y adoptar las medidas apropiadas para que ellos puedan usarse para ayudar a detectar y prevenir conflictos de intereses y detectar casos de enriquecimiento ilícito, el Comité considera que sería apropiado formular las siguientes medidas:

[318] Revisar y actualizar las Partes 1 y 2 del Reglamento sobre (Prevención de) la Corrupción para incluir todos los cargos del servicio público que correspondan cuyos titulares deban presentar declaraciones conforme a la Ley. (Véase la medida b) de la sección 2 del Anexo 1 del presente Informe)

[319] Considerar la posibilidad de enmendar la Ley sobre (Prevención de) la Corrupción para que todos los miembros de la Judicatura deban presentar declaraciones conforme a la Ley. (Véase la medida c) de la sección 2 del Anexo 1 del presente Informe)

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos relativos a la divulgación pública, según corresponda, de las declaraciones de ingresos, activos y pasivos, sujeto a la Constitución y a los

²³³ Informe Anual de 2012/2013 de la Comisión para la Prevención de la Corrupción, *idem*, pág. 17.

²³⁴ *Idem*, págs. 17 – 19.

²³⁵ *Idem*, pág. 19.

principios fundamentales del derecho. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[320] Con respecto a la medida anterior, el Estado analizado, en un documento presentado tras la visita *in situ*, señaló que la “*Sección 13(1) J (ii) de la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales establece el derecho de toda persona de respetar y proteger la vida privada y familiar y la privacidad del hogar y (ii) la protección de la privacidad de la propiedad y la comunicación ajena. La información constituye “información personal “que en la jurisprudencia de otras jurisdicciones de Derecho Anglonorteamericano goza de la protección de la privacidad... Dagg v. Canada (Ministro de Hacienda), [1997] 2 SCR 403.*

[321] *La jurisprudencia sobre la interpretación de la Carta dentro de Jamaica es limitada, por lo cual pueden extraerse ilustraciones de los derechos protegidos conforme a la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH) protegidos por la sección 13 de la Carta. Notablemente, el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos establece: “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.”*

[322] *Al igual que la sección 13 de la Carta, el artículo 8 de la CEDH protege el derecho a la vida privada, la privacidad/protección del hogar y de la correspondencia/comunicación. Los derechos contemplados en el artículo 8 de la CEDH, como los de la sección 13 de la carta son garantizados, salvo en la medida en que sea necesario para una sociedad libre y democrática.*

[323] *La Corte Europea de Derechos Humanos (la “Corte”) ha ampliado el alcance del artículo 8 para incluir en el concepto de “vida privada” la información pública contenida en los archivos de las autoridades públicas. En el caso Rotaru v. Rumania la Corte concluyó que la información recogida sobre el peticionario, que incluía información sobre sus estudios, sus actividades políticas, sus antecedentes penales, estaba comprendida en el concepto del término “vida privada”.*

[324] *Habida cuenta de la jurisprudencia que antecede y de la extensión del término “vida privada” en cuanto incluye cierta información mantenida sobre una persona por autoridades públicas, es nuestra opinión que la información sobre declaraciones legales no debe darse a conocer públicamente. Además la declaración pública podría tener consecuencias para la seguridad de las personas”.*²³⁶

[325] En virtud de lo que antecede, el Comité considera que la medida b) de la Recomendación 2 ya no es válida.

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Intensificar las campañas de concientización y brindar capacitación para funcionarios públicos en su obligación legal y moral de presentar sus declaraciones de ingresos, activos y pasivos, así como para los funcionarios encargados de hacer cumplir la obligación de presentar las declaraciones. (La

²³⁶ Recomendaciones para la Ronda 1: Información adicional, págs. 4 – 5, *supra* nota 210.

fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 2.3 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[326] Con respecto a la medida anterior, en su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos. En este sentido, el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance en la implementación de esta medida, lo siguiente:²³⁷

[327] – En la Respuesta al Cuestionario, el Estado analizado señala que la Oficina de las Comisiones de Servicios ha intensificado las campañas de sensibilización y ha proporcionado capacitación a los funcionarios sobre su obligación jurídica y ética de proporcionar sus declaraciones legales. Se alienta el cumplimiento a través de reuniones y circulares emitidas que indican al personal la importancia de obedecer las disposiciones de la Ley sobre (Prevención de) la Corrupción y su Reglamento. La Oficina ha proporcionado además a los funcionarios los formularios de presentación de las declaraciones legales y les ha notificado el plazo para presentarlos. Además ha emitido circulares para recordarles la necesidad de que todos los jerarcas de los ministerios y departamentos a los que se aplica la Ley proporcionen a la Comisión para la Prevención de la Corrupción la declaración legal; por ejemplo la Circular No. 23, del 26 de septiembre de 2012.

[328] En cuanto a los requisitos previstos en la Ley (sobre Integridad de los Miembros) del Parlamento, el Jefe de Administración de las Cámaras del Parlamento ha concertado reuniones con los parlamentarios, en las que se pidió a la Comisión de Integridad que hiciera una breve exposición sobre los requisitos de declaración que requiere la Ley. Se sensibilizó a los parlamentarios sobre las disposiciones de la Ley y se les recordó su obligación de completar las declaraciones en forma precisa y presentar puntualmente los documentos de respaldo necesarios.

[329] Finalmente, el Estado analizado, en su Respuesta al Cuestionario, señala que la Comisión para la Prevención de la Corrupción ha ejecutado programas de capacitación y educación continuados en forma localizada. Esa labor de sensibilización con organismos públicos se centra en el proceso de cumplimiento de la Ley sobre (Prevención de) la Corrupción.

[330] Además, en un documento presentado tras la visita *in situ*, el Estado analizado señala que entre enero y marzo de 2013 la Comisión para la Prevención de la Corrupción realizó en total 16 sesiones de educación pública para sensibilizar a los funcionarios públicos sobre su obligación legal de presentar sus declaraciones; en ellas participaron en total 339 funcionarios públicos.²³⁸ También se informó al Presidente de la Comisión para la Prevención de la Corrupción que todos los funcionarios públicos, definidos como tales en la sección 2 de la Ley sobre (Prevención de) la Corrupción, tienen la obligación de presentar sus declaraciones a más tardar el 31 de marzo de 2014, conforme a lo publicado en la Gaceta No. 48 del 6 de diciembre de 2013.²³⁹ El Estado analizado observa además que ello forma parte del proceso por el que la Comisión intensifica sus campañas de concienciación y sensibilización de los funcionarios públicos sobre las obligaciones que les impone la Ley. La Oficina de la Comisión de Servicios también recordó a todos los funcionarios públicos, mediante la circular No. 13, del 14 de enero de 2014, su obligación de presentar sus declaraciones.²⁴⁰

[331] El Comité observa que esta recomendación fue formulada al Estado analizado en su Informe de la Primera Ronda como resultado del hecho de que un considerable número de funcionarios públicos

²³⁷ Respuesta al Cuestionario, págs. 34 – 35, *supra* nota 7.

²³⁸ Recomendaciones para la Ronda 1: Información adicional, pág. 5, *supra* nota 210.

²³⁹ Disponible en <http://cpcpd.gov.jm/sites/default/files/gazettes/Gazette%202013.pdf>

²⁴⁰ Disponible en <http://www.osc.gov.jm/OSC%20Circulars/Corruption%20Prevention%20Reminder.pdf>

y parlamentarios no cumplían los plazos de presentación de las declaraciones en lo relativo a la Comisión para la Prevención de la Corrupción.²⁴¹ Como se expresa en la sección 3.3 del Capítulo II del presente informe, este problema subsiste para el Estado analizado. En virtud de lo que antecede, el Comité señala la necesidad de que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación de tal recomendación. (Véase la medida d) de la sección 2 del Anexo 1 del presente Informe)

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Fortalecer los órganos responsables de supervisar el cumplimiento de los funcionarios públicos que tienen que presentar sus declaraciones de ingresos, activos y pasivos, así como considerar el fortalecimiento de la Oficina del Director de la Fiscalía Pública, según sea necesario, para asegurar que dichos órganos cuenten con los recursos materiales y humanos necesarios para hacer cumplir la ley y sancionar a quienes no presentan sus declaraciones, presentan declaraciones con información falsas o cometen el delito de enriquecimiento ilícito. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 2.3 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[332] Con respecto a la medida anterior, en su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos. En este sentido, el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance en la implementación de esta medida, lo siguiente:²⁴²

[333] – El Estado analizado señala que “*el total del personal de la Oficina del Director del Ministerio Público (DPP) ha sido incrementado, pasando de treinta (30) a cuarenta y tres (43) funcionarios en la actualidad. No obstante, la Oficina sigue teniendo menos funcionarios que los necesarios para manejar satisfactoriamente su carga de trabajo general. Se requieren entre diez (10) y quince (15) abogados para atender eficazmente el creciente número de asuntos penales. Los casos anticorrupción suelen tratarse con cierta urgencia y los asuntos especialmente señalados como urgentes generalmente se diligencian en el término de uno (1) a tres (3) días.*

[334] Además señala que la Comisión de Integridad experimenta ciertas restricciones presupuestarias, que le han impedido emplear personal adicional. Ha solicitado la aprobación del Ministerio de Hacienda y Planificación para cubrir dos cargos más: un oficial de investigaciones y un analista financiero, que aún no han sido aprobados. Con ese personal adicional la Comisión estaría en condiciones de realizar más investigaciones y análisis más significativos de declaraciones y estados financieros.

[335] El Comité señala que conforme a las secciones 2 y 3 del Capítulo II del presente informe, respectivamente, la Comisión de Integridad y la Comisión para la Prevención de la Corrupción son objeto de exámenes más exhaustivos y se han formulado recomendaciones tendientes a fortalecer esos órganos, que se encargan de supervisar el cumplimiento por los funcionarios públicos de su obligación de presentar sus declaraciones de ingresos, activos y pasivos.

[336] El Comité observa además que a lo largo de todo ese informe se hace mención a las preocupaciones de órganos de supervisión específicos sobre la inacción de la Oficina del Director del Ministerio Público en cuanto a promoción de procesamientos por actos de corrupción, y sobre el bajo número global de procesamientos llevados a cabo por esa Oficina por actos de corrupción y el bajo

²⁴¹ Véase el Informe de la Primera Ronda, págs. 18 – 19, *supra* nota 212.

²⁴² Respuesta al Cuestionario, pág. 36, *supra* nota 7.

número de procesamientos promovidos por esa Oficina. A ese respecto pueden encontrarse casos en las secciones 1.2, 2.3 y 3.3 del Capítulo II del presente informe en cuanto a la Oficina del Contratista General, la Comisión de Integridad y la Comisión para la Prevención de la Corrupción, respectivamente.

[337] En virtud de lo que antecede, el Comité considera la posibilidad de reformular la medida d) de la recomendación que antecede para la sección 2 del Capítulo IV del presente Informe, en los términos siguientes:

[338] Fortalecer la Oficina del Director del Ministerio Público dotándola de los recursos presupuestarios, materiales y humanos necesarios, dentro de los límites de los recursos disponibles, para hacer cumplir la ley y promover el procesamiento de quienes no presenten sus declaraciones, proporcionen declaraciones con información falsa o cometan el delito de enriquecimiento ilícito. (Véase la medida e) de la sección 2 del Anexo 1 del presente Informe)

3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación 3.1 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Establecer órganos, o asignar autoridad adicional a un órgano existente, para supervisar las oficinas que actualmente no están comprendidas en el ámbito de los controles. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 3.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[339] Con respecto a la recomendación anterior, en un documento presentado tras la visita *in situ* el Estado analizado señaló que se han establecido otros órganos y mecanismos anticorrupción. A ese respecto reseña detalladamente los objetivos y actividades llevados a cabo por la Sección Anticorrupción de la Fuerza de Policía de Jamaica, la División de Investigaciones Financieras del Ministerio de Hacienda y el Grupo de Trabajo sobre Delitos Graves Organizados y Anticorrupción.²⁴³

[340] En virtud de lo que antecede, el Comité señala la necesidad de prestar más atención a la implementación de lo expresado, teniendo en cuenta que la recomendación fue formulada en el Informe de la Primera Ronda de Examen, ya que las Órdenes para el Personal no se aplican a la conducta de todo el personal empleado por el Gobierno. Además, como surge de la Sección 2 del Capítulo IV del presente Informe, conforme al sistema de registro de ingresos, activos y pasivos hay segmentos del servicio público a los que no se aplica la Ley sobre (Prevención de) la Corrupción; por ejemplo los nuevos cargos u organismos creados desde la sanción del Reglamento sobre (Prevención de) la Corrupción, o ciertos miembros de la Judicatura que están excluidos de la Ley. Si bien la creación de nuevos órganos anticorrupción contribuye a fortalecer el régimen anticorrupción en el Estado analizado, los órganos citados no establecen un mecanismo de supervisión de las oficinas que actualmente no están comprendidas en ninguna esfera de control. (Véase la recomendación 3.1 de la sección 3 del Anexo 1 del presente Informe)

Recomendación 3.2 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

²⁴³ Recomendaciones para la Ronda 1: Información adicional, págs. 6 – 7, *supra* nota 210.

Fortalecer los órganos de control en sus funciones relacionadas con la aplicación de los artículos III, párrafos 1, 2, 4 y 11 de la Convención, a efectos de asegurar que dicho control sea efectivo; brindarles mayor apoyo y los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones, y establecer mecanismos que permitan la coordinación institucional de sus actividades, según corresponda, y su constante evaluación y supervisión. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 3.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[341] En su respuesta, el Estado analizado no informó sobre nuevos acontecimientos con respecto a la recomendación anterior.²⁴⁴ En virtud de lo que antecede, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación del asunto. (Véase la recomendación 3.2 de la sección 3 del Anexo 1 del presente Informe)

Recomendación 3.3 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Hacer que los órganos de control mantengan y sistematicen información a los efectos de realizar una evaluación objetiva de los resultados del marco jurídico y de otras medidas. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 3.3 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[342] Con respecto a la recomendación anterior, en un documento presentado tras la visita *in situ* el Estado analizado informó la siguiente:²⁴⁵

[343] *“En la sección 1.1.3 del Informe de 2005 Jamaica presentó datos sobre cierto número de casos de corrupción que fueron abordados por los diversos órganos de supervisión, tales como la Comisión de Servicios Públicos, la Comisión de Servicios Policiales, y que incluyen procesamiento penales, casos pendientes, multas impuestas y destituciones. El Comité señaló, no obstante, que la información era de carácter general y que no estaba en condiciones de analizar exhaustivamente los resultados en el terreno. En la sección 2.3 del informe Jamaica proporcionó además información sobre el sistema de declaraciones legalmente preceptivas, inclusive el número de declaraciones presentadas, casos presentados al DPP, número de casos presentados a la Corte de Magistrados Residentes, número de casos retirados, entre otros datos. No resulta claro qué información adicional era necesario; por lo tanto, para cumplir adecuadamente esta recomendación sería útil obtener una aclaración sobre la información precisa que se deba registrar y sistematizar.*

[344] *Se señala que el Auditor General, el Contratista General, la Comisión de Prevención de la Corrupción y la Comisión para la Prevención de la Corrupción realizan el registro y la sistematización continua de datos sobre resultados en sus informes anuales”.*

[345] El Comité señala que en las secciones 1.3, 2.3, 3.3 y 4.3 del presente Informe se lleva a cabo un análisis de la información mantenida por esos órganos de supervisión, lo que ha permitido al Comité evaluar los resultados del marco jurídico y otras medidas, y en relación con el cual se han formulado recomendaciones. No obstante, el Comité señala que ciertos órganos de supervisión no han sido objeto de examen y a los cuales es aplicable la recomendación; por ejemplo los indicados en la sección 3.1 del Informe de la Primera Ronda correspondiente a Jamaica, como la Autoridad de Recepción de Quejas del Público sobre la Policía, la Comisión Nacional de Contratos, el Comité de Cuentas Públicas y el Comité de Administración y Apropiações Públicas.²⁴⁶ Además, el Estado

²⁴⁴ Respuesta al Cuestionario, págs. 37 – 38, *supra* note 7.

²⁴⁵ Recomendaciones para la Ronda 1: Información adicional, pág. 8, *supra* nota 210.

²⁴⁶ Informe de la Primera Ronda, págs. 20 – 22, *supra* nota 212.

analizado ha establecido órganos de supervisión adicionales, como se expresa en el examen de la recomendación 3.1 del Capítulo IV del presente Informe: la Sección Anticorrupción de la Fuerza de Policía de Jamaica, la División de Investigaciones Financieras del Ministerio de Hacienda y el Grupo de Trabajo sobre Delitos Graves Organizados y Anticorrupción..

[346] En virtud de lo que antecede, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de medida a) de la recomendación que antecede, así como de la necesidad de que siga prestando atención al asunto. (Véase la recomendación 3.3 de la sección 3 del Anexo 1 del presente Informe)

4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11 DE LA CONVENCIÓN)

4.1. Mecanismos de participación en general

[347] El Comité no formuló recomendaciones en esta sección.

4.2. Mecanismos para el acceso a la información

Recomendación:

Fortalecer los mecanismos para asegurar el acceso del público a la información.

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Examinar y de ser el caso modificar las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información que permiten que el Ministro de Información excluya cualquier órgano o autoridad legal del ámbito de aplicación de la Ley. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[348] Con respecto a la medida a) de la recomendación anterior, en su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos. En este sentido, el Comité toma nota la siguiente:²⁴⁷

[349] – El Estado analizado señala que “Jamaica ha revisado esta medida y no cree necesario modificar la disposición conforme a la sección 5(6) de la Ley de Acceso a la Información, que autoriza al Ministro a excluir de la aplicación de la Ley a “todo órgano o autoridad que el Ministro especifique por orden sujeta a una resolución afirmativa. La potestad del Ministro conforme a esta sección está sujeta a estricto control parlamentario, por lo cual cualquier orden dictada por el Ministro debe ser aprobada por el Parlamento. El Ministro, por lo tanto, no tiene la potestad irrestricta de excluir a un órgano de creación legal de la aplicación de la Ley, sino que está sujeto a supervisión parlamentaria, lo que hace posible un control efectivo de sus actos. Se trata de una severa forma de control parlamentario, ya que el instrumento u orden debe recibir aprobación parlamentaria antes de que pueda entrar en vigor. Las potestades ministeriales previstas en la sección 5 (3) de la Ley son, además, progresivas, ya que confieren al Ministro la facultad de ampliar la aplicación, haciéndola recaer sobre más órganos y

²⁴⁷ Respuesta al Cuestionario, pág. 40, *supra* nota 7.

organismos que no han sido definidos como “autoridades públicas” en la sección 3 de la Ley, sujetas a ajustes aprobadas por el Parlamento.”

[350] Además, durante la visita *in situ*, el representante de la Unidad de Acceso a la Información hizo hincapié en que la sección 5(6)(d) no permitía la exclusión del alcance de la Ley. También señaló que nunca se ha dictado una orden y que si llegara a dictarse alguna, estará sujeta a aprobación parlamentaria, lo que significa que la aplicación de esta sección está sujeta a un estricto control parlamentario. Se reiteró que toda orden requeriría una resolución afirmativa del Parlamento, lo que significa que en ese órgano debería votarse a favor de la orden para que ésta pudiera aplicarse.

[351] En virtud de lo que antecede, el Comité considera satisfactoria la explicación proporcionada por el Estado analizado y concluye que la medida a) de la recomendación arriba mencionada ya no es válida.

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Continuar la preparación de informes trimestrales sobre pedidos de acceso a la información presentados a las autoridades públicas, inclusive información más detallada sobre la situación de tales pedidos (por ejemplo, tiempo promedio para completar el trámite). (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.2.3 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[352] Con respecto a la medida c) de la recomendación anterior, en su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos. En este sentido, el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance en la implementación de esta medida, lo siguiente:²⁴⁸

[353] – El Estado analizado señala que la “Unidad de Acceso a la Información examinó las normas sobre información para mejorar y fortalecer el sistema de información (incluidos Informes Trimestrales). En julio de 2012 se publicó y emitió una Noticia Estadística (disponible en www.ati.gov.jm). En ella se recordaba a las autoridades públicas sus obligaciones de presentar informaciones y se les proporcionaba orientación sobre las nuevas normas y formularios de información elaborados por la Unidad de Acceso a la información. Se les dio a conocer también la existencia un nuevo Régimen de seguimiento en Tres Niveles (Nivel 1 (Alto riesgo), Nivel 2 (Riesgo mediano), Nivel 3 (Bajo riesgo). Las nuevas normas y formularios de información son obligatorios para todas las autoridades públicas a partir del 1 de enero de 2013 tras un período de transición. Véase el vínculo siguiente: <http://www.ati.gov.jm/sites/default/files/Documents/ATI%20Statistical%20Reporting%20Notice%20No%201%20of%202012.pdf>. El nuevo marco de seguimiento, las normas de información y los formularios han mejorado el seguimiento del estado de las solicitudes.”

[354] Además, durante la visita *in situ* el representante de la Unidad de Acceso a la información señaló que dicha unidad ha llevado a cabo programas de educación pública sobre cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información. Además, como se señala en la Respuesta al Cuestionario, la Unidad de Acceso a la Información ha comenzado a emitir cuadros de calificación institucionales, que califican a las autoridades como de riesgo alto, mediano y bajo en cuanto a cumplimiento de la Ley.

[355] El Comité toma nota de que en el Informe de la Primera Ronda de Examen la recomendación está encaminada a fortalecer los informes trimestrales, por ejemplo incluyendo, entre otras cosas,

²⁴⁸ Respuesta al Cuestionario, pág. 40, *supra* nota 7.

información tal como tasa de culminación y tiempo de respuesta. Si bien la emisión de nuevos estándares y formularios y la emisión de un cuadro de calificaciones es un paso positivo para avanzar en la implementación de la medida c) de la recomendación arriba mencionada, no resulta claro que los nuevos estándares de calificación hayan de incluir también información más detallada sobre el estado de esas solicitudes; por ejemplo el tiempo que en promedio haya llevado completar la tramitación de la solicitud de acceso a la información. En virtud de lo que antecede, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de medida c) de la recomendación que antecede, así como la necesidad de seguir prestando atención a la misma. (Véase la medida a) de la recomendación 4.2 de la sección 4 del Anexo 1 del presente Informe)

[356] El Comité también observa que los cuadros de calificaciones, conocidos también como Cuadros Anuales de Calificaciones de Autoridades Públicas sobre Acceso a la Información, iban a emitirse en 2013. No obstante, al examinar el sitio web de la Unidad de Acceso a la Información se nota que al parecer no están siendo publicados. El Comité considera que la publicación de esos informes se realiza con fines de transparencia y quizá también sirven para alentar a las instituciones públicas a cumplir la Ley por el hecho de que saben que su desempeño se hará público.

[357] Además, el Comité señala que la Ley de Acceso a la Información establece en la sección 36 que se debe preparar un informe anual sobre los resultados de la Ley lo más pronto posible después del final de cada año, pero a más tardar 30 de junio del año siguiente. El informe debe abarcar los siguientes temas: número de peticiones de acceso recibidas, concedidas, diferidas, denegadas o concedidas pero sujetas a supresiones. Las categorías de exenciones aducidas y las cifras de cada categoría; número de peticiones de enmienda de registros de personal y de anotación de registros de personal recibidas; número de peticiones de enmienda de registros de personal o anotación en los mismos; número de peticiones de examen interno de decisiones pertinentes, así como apelaciones interpuestas contra tales decisiones, y coeficiente de éxito o fracaso de las mismas, y todo otro asunto que se considere pertinente. Ese informe debe presentarse a la Cámara de Representantes y al Senado.²⁴⁹ Los informes trimestrales de autoridades públicas arriba mencionados también deben contener la información enunciada en el informe anual. El Comité señala, no obstante, que en el sitio web de la Unidad de Acceso a la Información no se hallarán copias de los informes anuales y al parecer los últimos informes trimestrales se publicaron en 2007.²⁵⁰ El Comité observa que esos informes deben hacerse públicos, lo que ayudaría a evaluar la eficacia de la Ley en cuanto al cumplimiento de su objetivo de fortalecer y dar mayor efectividad a ciertos principios fundamentales en que se basa el sistema de democracia constitucional; a saber a) responsabilidad gubernamental; b) transparencia y c) participación pública en el proceso nacional de adopción de decisiones.²⁵¹

[358] En virtud de lo que antecede, el Comité considera que sería apropiado formular las siguientes medidas:

[359] Hacer públicas en el sitio web de la Unidad de Acceso a la Información las Calificaciones Anuales sobre Acceso a la Información de las Autoridades Públicas. (Véase la medida b) de la recomendación 4.2 de la sección 4 del Anexo 1 del presente Informe)

[360] Hacer públicos en el sitio web de la Unidad de Acceso a la Información todos los Informes Anuales y Trimestrales. (Véase la medida c) de la recomendación 4.2 de la sección 4 del Anexo 1 del presente Informe).

²⁴⁹ Ley de Acceso a la Información, sección 36, http://www.ati.gov.jm/sites/default/files/Documents/atiact_0.pdf

²⁵⁰ Unidad de Acceso a la Información: Informes, <http://www.ati.gov.jm/reports>

²⁵¹ Ley de Acceso a la Información, sección 2, *supra* nota 249.

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Adoptar las medidas adecuadas para garantizar que las solicitudes de acceso a la información sean respondidos dentro del plazo establecido en la Ley de Acceso a la Información. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.2.3 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[361] Con respecto a la medida d) de la recomendación anterior, en su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos. En este sentido, el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance en la implementación de esta medida, lo siguiente:²⁵²

[362] El Estado analizado señala que *“la capacitación en esa esfera ha continuado y la Unidad de Acceso a la Información ha intensificado el seguimiento de los tiempos de respuesta y procesamiento de las solicitudes de acceso a la información, incluidas las de los medios de difusión, sobre la base de las quejas recibidas: La Unidad ha mejorado también sus procedimientos de examen de quejas y ‘seguimiento’ de las mismas con autoridades públicas, por correo electrónico y teléfono. Esto incluye el proceso de intervención temprana que realiza una vez que un peticionario se pone en contacto con la Unidad. Ésta sigue proporcionando orientación a las autoridades públicas sobre esta y otras esferas a través de su programa de capacitación.”*

[363] Además, durante la visita *in situ* el representante de la Unidad de Acceso a la Información mencionó la existencia de directrices impartidas a las autoridades públicas a fin de que puedan cumplir el plazo de 30 días de que disponen para responder a una petición según lo establecido en la Ley de Acceso a la Información. En esas directrices se exhorta a las autoridades públicas a no aguardar al cumplimiento del plazo de 30 días, sino responder cuanto antes. Los representantes manifestaron además que las autoridades públicas disponen de 30 días adicionales, pero si presentan una explicación, como la de que la petición abarca un gran volumen de documentos. Al cabo de 60 días la falta de información se entiende como denegación tácita. El representante manifestó además que existe un sitio web que las personas pueden consultar para conocer sus derechos conforme a la Ley. Además sus programas de capacitación están siendo revisados este año como parte de un nuevo proceso estratégico. Lo que debe examinarse es la emisión de nuevas directrices al responder a una solicitud.

[364] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida d) de la recomendación que antecede, y de la necesidad de seguir prestando atención a ese tema, teniendo en cuenta que los pasos para asegurar que se responda a los pedidos de acceso a la información dentro del marco cronológico establecido por la Ley de Acceso a la Información, tales como los de capacitación continua, ya fueron mencionados en el Informe de la Tercera Ronda,²⁵³ y que no se ha proporcionado ninguna información sobre el impacto que hayan tenido las directrices en cuanto al mejoramiento del tiempo de respuesta a una petición, que era el tema que preocupaba en el Informe de la Primera Ronda.²⁵⁴ (Véase la medida d) de la recomendación 4.2 de la sección 4 del Anexo 1 del presente Informe)

4.3. Mecanismos de consulta

²⁵² Respuesta al Cuestionario, pág. 42, *supra* nota 7.

²⁵³ Informe sobre la Implementación en Jamaica de las Disposiciones de la Convención Seleccionadas de Análisis en la Tercera Ronda y sobre Seguimiento de las Recomendaciones Formuladas al país en rondas anteriores, pág. 32, http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_jam_rep.pdf

²⁵⁴ Informe de la Primera Ronda, págs. 26 – 27, *supra* nota 212.

Recomendación:

Fortalecer los mecanismos de consulta existentes.

Medida sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Continuar la implementación de mecanismos de consulta con los sectores interesados de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales respecto del diseño de políticas públicas y del trámite legislativo en los esfuerzos para prevenir la corrupción. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.3.3 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[365] Con respecto a la medida anterior, en un documento presentado tras la visita *in situ* el Estado analizado informó la siguiente:²⁵⁵

[366] “Jamaica ha seguido implementando mecanismos de consulta en relación con la formación de leyes y la política pública. Conforme a las Órdenes Permanentes de la Cámara de Representantes y del Senado siguen estableciéndose Comités Selectos Conjuntos, que debaten informes y proyectos de leyes que hayan sido presentados al Parlamento. Esos comités invitan al público y a la sociedad civil en general a presentar comentarios y sugerencias. La sociedad civil ha participado muy activamente en esos foros. El Gobierno también invita a la sociedad civil en general a formular comentarios sobre ciertas iniciativas de políticas y normas legales mediante la realización de talleres de interesados y consultas a nivel de toda la Isla con grupos de la sociedad civil.”

[367] En virtud de lo que antecede, el Comité toma nota de la necesidad de prestar atención adicional a la implementación de lo que antecede, teniendo en cuenta que al mecanismo de consulta mencionada ya se hizo referencia en el Informe de la Primera Ronda de Revisión.²⁵⁶ (Véase la medida única de la recomendación 4.3 de la sección 4 del Anexo 1 del presente Informe)

[368] Para cumplir con esta medida, el Estado analizado puede tener en cuenta la Guía Legislativa titulada Elementos básicos sobre la participación de la sociedad civil preparada por la Secretaría Técnica del MESICIC, que establece los elementos básicos que han de incluirse en marcos jurídicos relacionados con mecanismos de consulta.²⁵⁷

4.4. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública

Recomendación:

Fortalecer y seguir implementando mecanismos para estimular a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública.

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

²⁵⁵ Recomendaciones para la Ronda 1: Información adicional, pág. 8, *supra* nota 210.

²⁵⁶ Informe de la Primera Ronda, págs. 27 – 28, *supra* nota 212.

²⁵⁷ Guía Legislativa: Elementos Básicos sobre la Participación de la Sociedad Civil, http://www.oas.org/juridico/spanish/gl_consulta.doc

Establecer mecanismos adicionales para estimular a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en los esfuerzos por prevenir la corrupción. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.4 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[369] En su respuesta, el Estado analizado no informó sobre nuevos acontecimientos con respecto a la medida a) de la anterior recomendación.²⁵⁸

[370] En virtud de lo que antecede, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación del asunto. (Véase medida a) de la recomendación 4.4 de la sección 4 del Anexo 1 del presente Informe)

[371] Para cumplir con esta medida, el Estado analizado puede tener en cuenta la Guía Legislativa titulada Elementos básicos sobre la participación de la sociedad civil preparada por la Secretaría Técnica del MESICIC, que establece los elementos básicos que han de incluirse en marcos jurídicos relacionados con mecanismos de participación de la sociedad civil.²⁵⁹

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Promover la conciencia pública acerca de los mecanismos disponibles para prevenir la corrupción. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.4 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[372] Con respecto a la medida b) de la recomendación anterior, en un documento presentado tras la visita *in situ* el Estado analizado informó la siguiente:²⁶⁰

[373] “Una importante iniciativa anticorrupción puesta en marcha por la JCP es la línea telefónica de llamada gratuita 1800-CORRUPT. Esta iniciativa permite a los ciudadanos denunciar actos de corrupción sin temor a ser identificados y proporciona una línea telefónica independiente, segura y anónima a través de la cual los miembros de la Fuerza, el Departamento de Aduanas y el público en general pueden proporcionar información o inteligencia sobre prácticas corruptas en que los miembros de esos y otros organismos pueden estar implicados. Dicha línea se contesta en el exterior. Las llamadas se filtran luego para la Fuerza de Policía de Jamaica, a través de la sección Anticorrupción. Algunas de las 1800 llamadas efectuadas han dado lugar a la formulación de cargos y a procesamiento penales. Además otros órganos, como la Comisión de Prevención de la Corrupción y la Oficina del Contratista General, exhortan al público a denunciar supuestos casos de corrupción.”

[374] En virtud de lo que antecede, el Comité toma nota de la necesidad de prestar más atención a la implementación de lo que antecede, teniendo en cuenta que una de las esferas identificadas en las secciones 2.2 y 3.2 del Capítulo II del presente informe, que la Comisión de Integridad y la Comisión para la Prevención de la Corrupción pueden reforzar, es el establecimiento de un componente en sus respectivos sitios web para recibir denuncias de supuestos casos de corrupción. Una página especial para recibir denuncias en un paso importante para promover la sensibilización pública sobre los mecanismos de prevención de la corrupción disponibles. Además, en el caso de la Comisión de Integridad, no hay un sitio web en que el público pueda formular consultas sobre la labor que ella realiza y conocer los mecanismos de prevención de la corrupción que tiene a su disposición para denunciar supuestos actos de

²⁵⁸ Respuesta al Cuestionario, págs. 44 – 45, *supra* note 7.

²⁵⁹ Guía Legislativa: Elementos Básicos sobre Participación de la Sociedad Civil, *supra* nota 257.

²⁶⁰ Recomendaciones para la Ronda 1: Información adicional, pág. 8, *supra* nota 210.

corrupción perpetrados por parlamentarios. (Véase la medida b) de la recomendación 4.4 de la sección 4 del Anexo 1 del presente Informe)

[375] Para cumplir con esta medida, el Estado analizado puede tener en cuenta la Guía Legislativa titulada Elementos básicos sobre la participación de la sociedad civil preparada por la Secretaría Técnica del MESICIC, que establece los elementos básicos que han de incluirse en marcos jurídicos relacionados con mecanismos de participación de la sociedad civil.²⁶¹

4.5. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública

Recomendación:

Fortalecer y seguir implementando mecanismos para estimular a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública y a generar opiniones y propuestas que se tengan en cuenta en la prevención, detección, investigación y sanción de actos de corrupción.

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Promover métodos adicionales, según corresponda, que permitan, faciliten y ayuden a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en el diseño de actividades de seguimiento de la gestión pública y de la prevención de la corrupción. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.5 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[376] En su respuesta, el Estado analizado no informó sobre nuevos acontecimientos con respecto a la medida a) de la anterior recomendación.²⁶²

[377] En virtud de lo que antecede, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación del asunto. (Véase medida a) de la recomendación 4.5 de la sección 4 del Anexo 1 del presente Informe)

[378] Para cumplir con esta medida, el Estado analizado puede tener en cuenta la Guía Legislativa titulada Elementos básicos sobre la participación de la sociedad civil preparada por la Secretaría Técnica del MESICIC, que establece los elementos básicos que han de incluirse en marcos jurídicos relacionados con mecanismos de participación de la sociedad civil.²⁶³

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Diseñar e implementar programas específicos para divulgar públicamente mecanismos que estimulen la participación en el seguimiento de la gestión pública. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.5 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

²⁶¹ Guía Legislativa: Elementos Básicos sobre Participación de la Sociedad Civil, *supra* nota 257.

²⁶² Respuesta al Cuestionario, págs. 46 – 47, *supra* note 7.

²⁶³ Guía Legislativa: Elementos Básicos sobre Participación de la Sociedad Civil, *supra* nota 257.

[379] En su respuesta, el Estado analizado no informó sobre nuevos acontecimientos con respecto a la medida b) de la anterior recomendación.²⁶⁴

[380] En virtud de lo que antecede, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación del asunto. (Véase medida b) de la recomendación 4.5 de la sección 4 del Anexo 1 del presente Informe)

[381] Para cumplir con esta medida, el Estado analizado puede tener en cuenta la Guía Legislativa titulada Elementos básicos sobre la participación de la sociedad civil preparada por la Secretaría Técnica del MESICIC, que establece los elementos básicos que han de incluirse en marcos jurídicos relacionados con mecanismos de participación de la sociedad civil.²⁶⁵

5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación 5.1 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Examinar exhaustivamente las áreas específicas en que Jamaica podría necesitar o le resultaría de utilidad recibir cooperación técnica mutua para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción; y con base en este examen, diseñar e implementar una estrategia amplia que permita que Jamaica se dirija a otros Estados partes y no partes de la Convención y a las instituciones u organismos financieros que participan en la cooperación internacional, a efectos de procurar la cooperación técnica que necesita. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 5.2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[382] En su respuesta, el Estado analizado no informó sobre nuevos acontecimientos con respecto a la anterior recomendación.²⁶⁶

[383] En virtud de lo que antecede, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación del asunto. (Véase recomendación única de la sección 5 del Anexo 1 del presente Informe)

Recomendación 5.2 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Continuar los esfuerzos de intercambio de cooperación técnica con otros Estados partes en torno a mecanismos y métodos efectivos de prevención, detección, investigación y sanción de actos de corrupción. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 5.2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[384] Con respecto de la recomendación anterior, en un documento presentado tras la visita *in situ* el Estado analizado informó la siguiente:²⁶⁷

[385] – La Sección Anticorrupción de la Fuerza de Policía de Jamaica (JCF, por sus siglas en inglés) ha recibido apoyo consistente en asistencia técnica de los Estados Unidos y del Departamento del Reino Unido para el Desarrollo Internacional (DFID). A esto se agrega un programa continuo

²⁶⁴ Respuesta al Cuestionario, págs. 47 – 48, *supra* note 7.

²⁶⁵ Guía Legislativa: Elementos Básicos sobre Participación de la Sociedad Civil, *supra* nota 257.

²⁶⁶ Respuesta al Cuestionario, pág. 48, *supra* note 7.

²⁶⁷ Recomendaciones para la Ronda 1: Información adicional, págs. 9 – 10, *supra* nota 210.

estructurado de apoyo financiero del DFID que comprende capacitación, financiamiento para capacitación, equipos técnicos, extensión a la comunidad y desarrollo de capacidades cibernéticas, que según lo previsto se mantendrá hasta 2015, en que será evaluado para determinar si se proporcionará respaldo adicional. Canadá también respalda plenamente el programa de polígrafos de la JCF y ha facilitado la capacitación de entrevistadores en uso de polígrafos de la JCF y la Fuerza de Defensa de Jamaica, y Canadá también ha comprometido fondos para la ampliación de un servicio de capacitación en uso de polígrafos que se creará para facilitar la labor de capacitación que se ofrecerá a otros asociados del Caribe. Se pretende que el centro sea designado como centro de excelencia en uso de polígrafos en la región del Caribe.

[386] Además, el Estado analizado menciona la celebración de una importante conferencia para países del Caribe, patrocinada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), celebrada en marzo de 2011 en Kingston, Jamaica; en ella participaron aproximadamente 150 altos funcionarios de organismos de seguridad pública de instituciones militares y policiales de la región especializados en lucha contra la corrupción. Los discursos principales versaron sobre programas practicados y ejecutados por Estados para hacer frente a la corrupción, y al final de la conferencia se acordaron (en forma de instrumentos multilaterales) protocolos pertinentes subsiguientemente ratificados formalmente por la Asociación de Comisionados de Policía del Caribe (ACCP) para que se usen con el fin de avanzar en la labor de intercambio de inteligencia e información sobre actividades corruptas en toda la región.

[387] Además la JCF estableció en 2008 una base de datos anticorrupción que incluye procedimientos, políticas y estrategias empleadas para hacer frente a la corrupción dentro de la Fuerza y, si es necesario, para ayudar a colegas del Caribe con información. Jamaica ha sido además anfitrión de altos funcionarios de otros territorios por períodos breves, para ponerlos en condiciones de aprender prácticas óptimas, y contribuye a la consecución del objetivo de establecer un enlace. También se realiza una labor conjunta de capacitación.

[388] Existen también acuerdos con los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, especialmente relacionados con intercambio de inteligencia. Ese intercambio de información ha puesto de relieve la necesidad de mantener altos niveles de integridad, ética y estratégica para arrestar y formular cargos contra altos funcionarios corruptos. Existe además otra eficaz base de datos denominada Base de Datos de Inteligencia Anticorrupción (ACID), que sirve para compartir y difundir actividades e información anticorrupción en cada territorio, para que todas las entidades de seguridad pública no sólo estén representadas sino que además no se vean entorpecidas por trámites burocráticos cuando personas específicamente designadas sean nombradas y actúan en representación de sus respectivas entidades. Los Estados participantes en ACID incluyen también personal de seguridad pública del Reino Unido, los Estados Unidos y Canadá. El Estado analizado señala además que dentro de la CARICOM se ha establecido un Comité de Inteligencia para promover el intercambio de inteligencia entre los Estados miembros. Cada país tiene por lo menos un (1) punto de contacto a través de tecnologías apropiadas. Finalmente, un Centro de Regional Conjunto de Comunicaciones y el Centro Regional de Fusión de Inteligencia seleccionan análisis y registra actividades delictivas para ulteriores investigaciones.

[389] El Comité toma nota de la satisfactoria consideración, por el Estado analizado, de la recomendación que antecede.

6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Jamaica ha dado cumplimiento al artículo XVIII de la Convención al designar al “Ministerio de Justicia” y al “Director de la Fiscalía” como autoridad central para los propósitos de la asistencia y cooperación internacional previstas en la Convención, tal y como se indica en el capítulo II, sección 6 del presente informe.

A la luz de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que Jamaica asegure que la mencionada autoridad central disponga de los recursos humanos y técnicos necesarios para asegurar el desempeño adecuado de sus funciones. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 6.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[390] En su respuesta, el Estado analizado no informó sobre nuevos acontecimientos con respecto a la anterior recomendación.²⁶⁸

[391] En virtud de lo que antecede, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación del asunto. (Véase recomendación única de la sección 6 del Anexo 1 del presente Informe)

7. RECOMENDACIONES GENERALES

Recomendación 7.1 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación.

[392] En su respuesta, el Estado analizado no informó sobre nuevos acontecimientos con respecto a la anterior recomendación.²⁶⁹

[393] En virtud de lo que antecede, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación del asunto. (Véase recomendación 7.1 de la sección 7 del Anexo 1 del presente Informe)

Recomendación 7.2 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, podrá tomar en cuenta el listado de indicadores más generalizados, aplicables en el sistema interamericano que estuvieran disponibles para la selección indicada por parte del Estado analizado, que ha sido publicado por la Secretaría Técnica del Comité, en página en Internet de la OEA, así como información que se derive del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la recomendación 7.3 siguiente.

²⁶⁸ Respuesta al Cuestionario, págs. 49 – 50, *supra* note 7.

²⁶⁹ *Idem*, págs. 50 – 51.

[394] En su respuesta, el Estado analizado no informó sobre nuevos acontecimientos con respecto a la anterior recomendación.²⁷⁰

[395] En virtud de lo que antecede, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación del asunto. (Véase recomendación 7.2 de la sección 7 del Anexo 1 del presente Informe)

Recomendación 7.3 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Desarrollar, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, procedimientos para analizar los mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo.

[396] En su respuesta, el Estado analizado no informó sobre nuevos acontecimientos con respecto a la anterior recomendación.²⁷¹

[397] En virtud de lo que antecede, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación del asunto. (Véase recomendación 7.3 de la sección 7 del Anexo 1 del presente Informe)

²⁷⁰ *Idem*, págs. 51 – 52.

²⁷¹ *Idem*, págs. 52 – 53.

ANEXO I

RECOMENDACIONES VIGENTES Y REFORMULADAS SOBRE LOS TEMAS ANALIZADOS EN LA PRIMERA RONDA

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 y 2 DE LA CONVENCIÓN)

1.1 Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

Recomendación:

Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los conflictos de intereses, asegurando que sean aplicables a todos los funcionarios y empleados públicos, de modo de permitir la aplicación práctica y efectiva de un sistema de ética pública.

Medidas sugeridas:

- a) Establecer o adaptar y luego implementar normas de conducta para los cargos que actualmente no están comprendidos en el ámbito de ningún control, incluyendo sanciones adecuadas por la violación de tales normas.
- b) Desarrollar, cuando corresponda, disposiciones que limiten la participación de los ex funcionarios públicos, en situaciones que conlleven el aprovechamiento indebido de esa condición, en un plazo de tiempo determinado.
- c) Estimular la implementación de un código de ética para Senadores y Diputados, incluyendo mecanismos punitivos por violaciones.

1.2 Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos

Recomendación:

Adoptar medidas para alentar una mayor responsabilidad en casos en que algunos organismo superan el gasto aprobado por el Parlamento.

1.3. Normas de conducta y mecanismos en relación con las medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento

Recomendación:

Desarrollar, cuando sea apropiado, y fortalecer mecanismos que exijan a los funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.

Medidas sugeridas:

- a) Establecer el deber de denunciar para los funcionarios y empleados públicos que actualmente no están obligados a denunciar a las autoridades competentes los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.
- b) Brindar capacitación adecuada a los funcionarios y empleados en cuanto a los requisitos y procedimientos que deben seguir las denuncias de los actos de corrupción y los mecanismos de protección a favor de los denunciantes.

2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación:

Fortalecer los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos.

Medidas sugeridas:

- a) Maximizar el uso de sistemas para analizar los contenidos de las declaraciones de ingresos, activos y pasivos, y adoptar medidas adecuadas para que los mismos puedan también usarse para detectar y prevenir conflictos de intereses, utilizando tecnologías modernas, cuando sea posible, para agilizar o hacer más expeditas la presentación de las declaraciones e igualmente como una herramienta para mejorar los sistemas, análisis o investigaciones de los casos.
- b) Revisar y actualizar las Partes 1 y 2 del Reglamento sobre (Prevención de) la Corrupción para incluir todos los cargos del servicio público que correspondan cuyos titulares deban presentar declaraciones conforme a la Ley.
- c) Considerar la posibilidad de enmendar la Ley sobre (Prevención de) la Corrupción para que todos los miembros de la Judicatura deban presentar declaraciones conforme a la Ley.
- d) Intensificar las campañas de concientización y brindar capacitación para funcionarios públicos en su obligación legal y moral de presentar sus declaraciones de ingresos, activos y pasivos, así como para los funcionarios encargados de hacer cumplir la obligación de presentar las declaraciones.
- e) Fortalecer la Oficina del Director del Ministerio Público dotándola de los recursos presupuestarios, materiales y humanos necesarios, dentro de los límites de los recursos disponibles, para hacer cumplir la ley y promover el procesamiento de quienes no presenten sus declaraciones, proporcionen declaraciones con información falsa o cometan el delito de enriquecimiento ilícito.

3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN)

- 3.1 Establecer órganos, o asignar autoridad adicional a un órgano existente, para supervisar las oficinas que actualmente no están comprendidas en el ámbito de los controles.
- 3.2 Fortalecer los órganos de control en sus funciones relacionadas con la aplicación de los artículos III, párrafos 1, 2, 4 y 11 de la Convención, a efectos de asegurar que dicho control sea efectivo; brindarles mayor apoyo y los recursos necesarios para el desempeño de sus

funciones, y establecer mecanismos que permitan la coordinación institucional de sus actividades, según corresponda, y su constante evaluación y supervisión.

- 3.3 Hacer que los órganos de control mantengan y sistematicen información a los efectos de realizar una evaluación objetiva de los resultados del marco jurídico y de otras medidas

4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11 DE LA CONVENCIÓN)

4.1. Mecanismos de participación en general

El Comité no formuló recomendaciones en esta sección.

4.2 Mecanismos para el acceso a la información

Recomendación:

Fortalecer los mecanismos para asegurar el acceso del público a la información.

Medidas sugeridas:

- a) Continuar la preparación de informes trimestrales sobre pedidos de acceso a la información presentados a las autoridades públicas, inclusive información más detallada sobre la situación de tales pedidos (por ejemplo, tiempo promedio para completar el trámite).
- b) Hacer públicas en el sitio web de la Unidad de Acceso a la Información las Calificaciones Anuales sobre Acceso a la Información de las Autoridades Públicas.
- c) Hacer públicos en el sitio web de la Unidad de Acceso a la Información todos los Informes Anuales y Trimestrales.
- d) Adoptar las medidas adecuadas para garantizar que las solicitudes de acceso a la información sean respondidos dentro del plazo establecido en la Ley de Acceso a la Información.

4.3. Mecanismos de consulta

Recomendación:

Fortalecer los mecanismos de consulta existentes.

Medida sugerida:

- Continuar la implementación de mecanismos de consulta con los sectores interesados de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales respecto del diseño de políticas públicas y del trámite legislativo en los esfuerzos para prevenir la corrupción.

4.4. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública

Recomendación:

Fortalecer y seguir implementando mecanismos para estimular a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública.

Medidas sugeridas:

- a) Establecer mecanismos adicionales para estimular a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en los esfuerzos por prevenir la corrupción.
- b) Promover la conciencia pública acerca de los mecanismos disponibles para prevenir la corrupción.

4.5. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública

Recomendación:

Fortalecer y seguir implementando mecanismos para estimular a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública y a generar opiniones y propuestas que se tengan en cuenta en la prevención, detección, investigación y sanción de actos de corrupción.

Medidas sugeridas:

- a) Promover métodos adicionales, según corresponda, que permitan, faciliten y ayuden a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en el diseño de actividades de seguimiento de la gestión pública y de la prevención de la corrupción.
- b) Diseñar e implementar programas específicos para divulgar públicamente mecanismos que estimulen la participación en el seguimiento de la gestión pública.

5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación:

Examinar exhaustivamente las áreas específicas en que Jamaica podría necesitar o le resultaría de utilidad recibir cooperación técnica mutua para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción; y con base en este examen, diseñar e implementar una estrategia amplia que permita que Jamaica se dirija a otros Estados partes y no partes de la Convención y a las instituciones u organismos financieros que participan en la cooperación internacional, a efectos de procurar la cooperación técnica que necesita.

6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación:

Jamaica ha dado cumplimiento al artículo XVIII de la Convención al designar al “Ministerio de Justicia” y al “Director de la Fiscalía” como autoridad central para los propósitos de la asistencia y cooperación internacional previstas en la Convención, tal y como se indica en el capítulo II, sección 6 del presente informe.

A la luz de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que Jamaica asegure que la mencionada autoridad central disponga de los recursos humanos y técnicos necesarios para asegurar el desempeño adecuado de sus funciones.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

Recomendaciones:

- 7.1 Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación.
- 7.2 Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, podrá tomar en cuenta el listado de indicadores más generalizados, aplicables en el sistema interamericano que estuvieran disponibles para la selección indicada por parte del Estado analizado, que ha sido publicado por la Secretaría Técnica del Comité, en página en Internet de la OEA, así como información que se derive del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la recomendación 7.3 siguiente.
- 7.3 Desarrollar, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, procedimientos para analizar los mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo.

ANEXO II

AGENDA DE LA VISITA *IN SITU* A JAMAICA

<u>Lunes, 31 de marzo de 2014</u>	
14:00 hrs. – 15:30 hrs. <i>Courtleigh Hotel</i>	Reunión de coordinación entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
15:30 hrs. – 17:30 hrs. <i>Courtleigh Hotel</i>	Reunión de coordinación entre los representantes del Estado analizado, los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica (y la Oficina o representación de la Secretaría General)
<u>Martes, 1 de abril de 2014</u>	
9:00 hrs. – 10:30 hrs. <i>Primer Piso, Sala de Conferencias, Oficina del Procurador General</i>	Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores.
	Tema: <ul style="list-style-type: none">• Participación del sector privado en las iniciativas de lucha contra la corrupción
	<u>Participantes:</u> <i>Colegio de Abogados de Jamaica</i> Donovan Walker, Presidente Althea McBean, Secretaría <i>Organización del Sector Privado de Jamaica</i> Profesor Anthony Harriot, Miembro del Comité Permanente sobre Seguridad Nacional
10:30 hrs. – 12:30 hrs. <u>Lugar:</u> <i>Por determinar</i>	Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores. (Continuación)
	Temas: <ul style="list-style-type: none">• Perspectivas de la sociedad civil sobre los órganos de control superior para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción• Los esfuerzos para abordar recomendaciones de la Primera

	<p>Ronda</p> <p><u>Participantes:</u> <i>Coalición de la Sociedad Civil de Jamaica</i> Paul Gardener, Presidente <i>Acción Nacional de la Integridad</i> Profesor Trevor Munroe, Director Ejecutivo Nadiya Figueroa, Subdirector de Relaciones Externas</p>
12:30 hrs. – 14:00 hrs.	Almuerzo
14:00 hrs. – 18:30 hrs.	Oficina del Contratista General
14:00 hrs. – 15:00 hrs	<p>Panel 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introducción institucional (10 minutos) • Alcance de funciones – Revocación de contratos • Recursos humanos • Forma en que se adoptan las decisiones <p><u>Participantes:</u> Dirk Harrison, Contratista General Maurice Barrett, Director Principal Interino –Contratos de No Construcción Gillian Pottinger, Oficial Jurídica Carla Kelly, Principal Investigadora Interina</p>
15:00 hrs. – 16:00 hrs.	<p>Panel 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedimientos de denuncia • Selección de altos funcionarios • Selección del personal • Capacitación <p><u>Participantes:</u> Dirk Harrison, Contratista General Maurice Barrett, Director Principal Interino –Contratos de No Construcción Gillian Pottinger, Oficial Jurídica Carla Kelly, Principal Investigadora Interina.</p>

16:00 hrs. – 17:00 hrs.	<p>Panel 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manera en que se le suministra información al público sobre sus objetivos y funciones • Mecanismos de control interno y manejo de quejas o denuncias • Manera en que se aseguran las necesidades presupuestales <p><u>Participantes:</u> Dirk Harrison, Contratista General Maurice Barrett, Director Principal Interino –Contratos de No Construcción Gillian Pottinger, Oficial Jurídica Carla Kelly, Principal Investigadora Interina</p>
17:00 hrs. – 18:30 hrs.	<p>Panel 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordinación con otros órganos gubernamentales • Resultados • Dificultades enfrentadas para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción • Proyecto de Ley de Prevención de la Corrupción (Fiscal Especial), 2011 <p><u>Participantes:</u> Dirk Harrison, Contratista General Maurice Barrett, Director Principal Interino –Contratos de No Construcción Gillian Pottinger, Oficial Jurídica Carla Kelly, Principal Investigadora Interina</p>
18:30 hrs.	<p>Reunión informal/ con los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.</p>
<p><u>Miércoles, 2 de abril de 2014</u></p>	
9:00 hrs. – 12:30 hrs.	<p>Comisión de Integridad</p>
9:00 hrs. – 10:00 hrs.	<p>Panel 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introducción institucional (10 minutos) • Autonomía para el desempeño de sus funciones • Forma en que se adoptan las decisiones • Selección de altos funcionarios y del personal

	<p><u>Participantes:</u></p> <p>Clive Nicholas, Miembro de la Comisión de Integridad</p> <p>Joy Powell, Secretaría</p>
10:00 hrs. – 11:00 hrs.	<p>Panel 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos de control interno y manejo de quejas o denuncias • Manera en que se aseguran las necesidades presupuestales • Coordinación con otros órganos gubernamentales
	<p><u>Participantes:</u></p> <p>Clive Nicholas, Miembro de la Comisión de Integridad</p> <p>Joy Powell, Secretaría</p>
11:00 hrs. – 12:30 hrs.	<p>Panel 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos de rendición de cuentas • Capacitación • Resultados • Proyecto de Ley de Prevención de la Corrupción (Fiscal Especial) 2011 • Recursos
	<p><u>Participantes:</u></p> <p>Clive Nicholas, Miembro de la Comisión de Integridad</p> <p>Joy Powell, Secretaría</p>
12:30 hrs. – 14:00 hrs.	Almuerzo
14:00 hrs. – 17:30 hrs.	Comisión para la Prevención de la Corrupción
14:00 hrs. – 15:00 hrs.	<p>Panel 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introducción institucional (10 minutos) • Objetivos y funciones • Autonomía para el desempeño de sus funciones • Forma en que se adoptan las decisiones
	<p><u>Participantes:</u></p> <p>David Grey, Secretaría/Director</p>

15:00 hrs. – 16:00 hrs.	<p>Panel 9:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selección de altos funcionarios y del personal • Capacitación • Manera en que se aseguran las necesidades presupuestales <p><u>Participantes:</u> David Grey, Secretaría/Director</p>
16:00 hrs. – 17:30 hrs.	<p>Panel 10:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordinación con otros órganos gubernamentales • Mecanismos de control interno y manejo de quejas o denuncias • Mecanismos de rendición de cuentas • Dificultades y propuestas legislativas <p><u>Participantes:</u> David Grey, Secretaría/Director</p>
17:30 hrs	<p>Reunión informal con los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.</p>
<u>Jueves, 3 de abril de 2014</u>	
9:00 hrs. – 12:30 hrs.	Auditor General
9:00 hrs. – 10:00 hrs.	<p>Panel 11:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introducción institucional (10 minutos) • Alcance de funciones – Sanciones monetarias impuestas • Forma en que se adoptan las decisiones <p><u>Participantes:</u> Delores Linton Williams, Directora de División Interina Marlon McAdam, Director Principal de Auditoría</p>
10:00 hrs. – 11:00 hrs.	<p>Panel 12:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selección de altos funcionarios y del personal • Uso de la tecnología • Capacitación

	<p><u>Participantes:</u></p> <p>Delores Linton Williams, Directora de División Interina</p> <p>Marlon McAdam, Director Principal de Auditoría</p>
11:00 hrs. – 12:30 hrs.	<p>Panel 13:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mecanismos de control interno y manejo de quejas o denuncias• Manera en que se aseguran las necesidades presupuestales• Coordinación con otros órganos gubernamentales• Dificultades enfrentadas para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción• Buenas prácticas <p><u>Participantes:</u></p> <p>Delores Linton Williams, Directora de División Interina</p> <p>Marlon McAdam, Director Principal de Auditoría</p>
12:30 hrs. – 14:00 hrs.	Almuerzo
14:00 hrs. – 16:30 hrs.	Seguimiento
	<p>Panel 14: Seguimiento</p> <ul style="list-style-type: none">• Conflicto de intereses• Deber de conservar y utilizar correctamente los recursos públicos• Denuncia de actos de corrupción y protección contra represalias• Sistemas de declaración de ingresos, activos y pasivos• Órganos de control superior• Mecanismos para la participación de la sociedad civil• Asistencia y cooperación• Recomendaciones generales <p><u>Participantes:</u></p> <p><i>Oficina de la Comisión de Servicios</i></p> <p>Judith Cheese-Morris, Directora Adjunto de Personal</p> <p>Lenster Lewis-Meade, Oficial Jurídica</p> <p><i>Unidad de Acceso a la Información</i></p> <p>Damion Cox, Director</p>

16:30 hrs. – 17:00 hrs.	Reunión informal con los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
17:00 hrs.	Reunión final con los representantes del Estado analizado, los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
Funcionarios gubernamentales que asistirán durante la visita en situ Los siguientes funcionarios estarán presentes durante la visita: Nicole Foster-Pusey, Abogada General O’neil Francis, Subprocurador General	

**AUTORIDAD DE CONTACTO DEL PAÍS ANALIZADO PARA LA COORDINACIÓN DE
LA VISITA *IN SITU*, Y REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DEL
SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR Y LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC**

ESTADO ANALIZADO:

JAMAICA

Nicole Foster-Pusey, Q.C.
Abogada General
Oficina del Procurador General

O'Neil Francis
Subprocurador General
Oficina del Procurador General

ESTADOS MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR:

EL SALVADOR

Álvaro Magaña Granados
Secretario Ejecutivo
Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible

Miguel Girón
Abogado Consultor
Miembro Grupo Interinstitucional de Trabajo para Seguimiento de la CICC

GRENADA

Robert Branch
Asesor Jurídico Principal
Oficina del Procurador General

SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC

Rodrigo Silva
Oficial Jurídico del Departamento de Cooperación Jurídica
Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA